

100º PERIODO LEGISLATIVO

7ª REUNION — 4ª SESION ORDINARIA — MAYO 22 DE 1975

Presidencia del doctor CARLOS H. EVANS, vicepresidente 1º del Honorable Senado,
y del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Administrativos y Municipales

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA SOSA DE CESARETTI
Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ANGELOZ, Eduardo César
ÁVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CÁCERES, Rubén Osvaldo
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CULASSO MATTEI, Luis
CHAILE, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS REGIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio Fernando L.
JAUREGUL, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
LUDER, Ítalo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.

MARTÍNEZ, Julio César
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
SALAS CORREA, Luis I.
SOLÍS VRIGOYEN, Hipólito
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa
VIVAS, Ángel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BELENGUER, Emilio
GARCÍA, Américo Alberto
MURGUÍA, Edgardo P. V.
ROMERO, Humberto Antonio

AUSENTES, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán

AUSENTES, CON AVISO:

ALLENDE, José Antonio
CARNEVALE, Luis
ELÍAS, Florencio
HERRERA, José Jorge
LOSADA, Mario
MAYA, Héctor Domingo
NÁPOLI, Antonio Oscar
SAADI, Vicente Leónides
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elías

SUMARIO

- 1.—Homenaje a la Revolución de Mayo. (Pág. 750.)
- 2.—Aprobación del acta de la sesión preparatoria. (Pág. 755.)
- 3.—Telegrama al secretario general de la Organización de Estados Americanos, doctor Orfila con motivo de su reciente designación en ese cargo. (Pág. 755.)
- 4.—Asuntos entrados:
 - I.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 755.)
 - II.—Dictámenes de comisión. (Pág. 755.)
 - III.—Peticiones articularias. (Pág. 756.)
 - IV.—Proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Brizuela (H. G.): servicios cloacales en Humahuaca, provincia de Jujuy. (Pág. 756.)
 - V.—Proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Brizuela (H. G.): subsidio al Club Atlético Ciclón del Norte de Humahuaca provincia de Jujuy. (Pág. 756.)
 - VI.—Proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Brizuela (H. G.): subsidio a la Biblioteca Popular de Jujuy de la provincia del mismo nombre. (Pág. 757.)
 - VII.—Proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Brizuela (H. G.): construcción del edificio de la Escuela Diferencia N° 1 en la provincia de Jujuy. (Página 757.)
 - VIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Caro: reimplantación de servicios aéreos entre ciudades de la provincia de Salta. (Pág. 758.)
 - IX.—Proyecto de ley del señor senador Cúasso Mattei subsidio a la Cooperadora de la Escuela N° 359 de San Cristóbal provincia de Santa Fe. (Pág. 758.)
 - X.—Proyecto de ley del señor senador Saadi subsidio a la provincia de Catamarca para postas sanitarias. (Pág. 759.)
 - XI.—Proyecto de ley del señor senador Saadi industrialización y prohibición de exportación de lanas sucias. (Pág. 759.)
 - XII.—Proyecto de ley del señor senador Moreno para correos y telegrafos en Beltrán provincia de Santiago del Estero. (Pág. 760.)
 - XIII.—Proyecto de ley del señor senador Moreno subsidio a la Municipalidad de La Banda Santiago del Estero. (Pág. 760.)
 - XIV.—Proyecto de resolución del señor senador Grubisich: designación de una comisión

para el estudio de la situación agropecuaria. (Pág. 761.)

XV —Proyecto de resolución del señor senador Peroni: creación del Registro Nacional de Automotores, en Monte Caseros, Corrientes. (Pág. 761.)

- 5.—**Pedido de pronto despacho** del señor senador Peroni para su proyecto de resolución sobre creación del Registro Nacional de Automotores, en Monte Caseros provincia de Corrientes. (Página 761.)
- 6.—**Moción de preferencia** del señor senador Perette para iniciativas vinculadas con la creación de la Comisión Parlamentaria de Defensa de los Derechos Humanos. Se rechaza.
A pedido del señor senador Martiarena se solicita el pronto despacho. (Pág. 762.)

7.—Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto: régimen para el Servicio Exterior de la Nación. Se aprueba. (Pág. 764.)

8.—Dictamen de la Comisión de Interior y Justicia: denominación de una estación ferroviaria con el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz. Se aprueba. (Pág. 811.)

9.—Denuncia de amenazas e intento de secuestro de periodistas. A pedido del señor senador Perette se da traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales Administrativos y Municipales. (Página 813.)

10.—Apendice:

Sanctones del Honorable Senado. (Pág. 814.)

—En Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 1975, a la hora 18 y 47 dice el

Sr. Presidente (Evans) — Con la presencia de los señores senadores, que constituyen quorum legislativo queda abierta la cuarta sesión ordinaria del presente periodo legislativo.

1

HOMENAJE A LA REVOLUCION DE MAYO DE 1810

Sr. Luna — Pido la palabra para un homenaje.

Sr. Presidente (Evans) — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Luna — Señor presidente, señores senadores la evocación del pasado glorioso y heroico, el recuerdo de aquellos días en que los grandes acontecimientos eran precursores de otros mayores para el porvenir de la patria conmueve, no duda alguna el patriotismo de los argentinos.

Para esa evocación va destinado este homenaje en esta tarde de reminiscencia histórica.

Séame permitido pronunciar estas palabras glosando un pensamiento ilustre que nos permite afirmar que los pueblos que no olvidan

Sr. Perette. — Nuestro bloque va a votar afirmativamente.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Evans). — Se procederá en consecuencia.

7

SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

Sr. Presidente (Evans). — De acuerdo con lo resuelto en la sesión anterior, en la que se acordó dar preferencia para tratarlo como primer tema en la sesión de hoy, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación.

Por otra parte, el plan de labor propuesto por el bloque de la mayoría fija su tratamiento como único tema de esta sesión.

Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación, que le fuera enviado en revisión; y, por las razones que se dan en el informe escrito acompañado, os aconseja su aceptación.

El presente dictamen pasa directamente al orden del día de conformidad con el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado.

Sala de la comisión, 15 de mayo de 1975.

Italo A. Luder. — Yamili Bárbora de Nasif. — Juan Carlos Chaile. — Luis Culasso Mattei.

En disidencia parcial:

Luis A. León.

Señor presidente:

La Honorable Cámara de Diputados al considerar el proyecto de ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación que le fuera enviado en revisión ha introducido en el mismo diversas modificaciones, una parte de ellas que son meramente formales y de redacción y otra parte que no hacen a su esencia, que señalaremos seguidamente, razones por las cuales la comisión entiende que no existen inconvenientes en su aceptación desde el momento que las referidas enmiendas no alteran la sanción oportunamente efectuada por esta Cámara.

Cabe señalar, con respecto a las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, que ellas son coincidentes literalmente en

su casi totalidad con los términos de los proyectos de ley del Servicio Exterior que con posterioridad a la sanción del Senado remitiera el Poder Ejecutivo. En efecto, producida la sanción del Senado en junio de 1974, el Poder Ejecutivo cambió parcialmente el criterio con respecto a distintos puntos de su primitivo mensaje y remitió en diciembre de 1974 un nuevo proyecto de ley orgánica para el Servicio Exterior, el que no pudo ser considerado por haberse dado por concluido el período de sesiones extraordinarias. Asimismo, con fecha 2 de mayo del corriente año, remitió un nuevo proyecto de ley similar al anterior y con cuyos términos coincide la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

En el artículo 1º se introduce la definición del Servicio Exterior de la Nación en forma análoga a la que contenía el primitivo proyecto del Poder Ejecutivo y que fuera suprimida en la sanción del Senado por entender que, aparte de ser un tema propio de la ley de ministerios, no constituía una norma positiva, que debe ser la materia de la ley. Aunque la comisión mantiene el criterio que sustentara entonces, no insiste en su supresión desde el momento que al tratarse de una cuestión de mera técnica legislativa, no justificaría la dilación en el trámite de la ley.

En el artículo 2º, inciso c), se suprime para los agregados laborales la exigencia de aprobar un curso de capacitación en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, por haberse querido dejar al estatuto especial y a la reglamentación el establecimiento de los requisitos que deben llenar. Asimismo se incorporan al Servicio Exterior los agregados especializados que se designen de conformidad al artículo 10.

En el artículo 5º se suprime el límite fijado al Poder Ejecutivo para designar embajadores a personas no pertenecientes al Servicio Exterior, y que se establecía en un máximo del 30 % del total de cargos del escalafón en la categoría «A». Este límite fue propuesto por el propio Poder Ejecutivo como una autolimitación en su proyecto original, pero la comisión estima que, aparte de la medida y ponderación que en tal materia ha observado el gobierno, unido a las razones dadas durante el debate de la Honorable Cámara de Diputados para suprimirlo, hacen aconsejable la aceptación de la modificación adoptada.

En las normas relativas al ingreso —que del artículo 13 han pasado ahora a formar parte del artículo 82— se ha modificado la edad máxima para incorporarse como aspirante, llevándola de 33 a 35 años.

En el artículo 17 de la sanción del Senado se disponía que, confeccionada la propuesta de ascensos por la junta calificadora, el funcionario que no ascendía por falta de vacantes tendría el rango que le hubiera correspondido por el ascenso y percibiría un suplemento de sueldo equivalente a la diferencia entre su categoría y la inmediata superior. En la modificación introducida por la Cámara de Diputados se dispone

que el funcionario que el Poder Ejecutivo no hubiere decidido ascender o que no ascendiera por causas no imputables percibirá un suplemento del 50 % de esa diferencia. Asimismo se suprime que la antigüedad cumplida en esas condiciones se consideraba, a todos los efectos, como cumplida en la categoría inmediata superior.

En el artículo 18 —causales por las cuales se deja de pertenecer al cuerpo permanente activo— se suprimen las modificaciones introducidas por el Senado como consecuencia de las modificaciones que se introducen en otros artículos.

En el artículo 22, relativo a los derechos de los funcionarios, y en el artículo 21, respecto de las obligaciones, las modificaciones que se introducen son meramente de forma y de redacción.

En el artículo 23 —prohibiciones—, la que se establecía referente a que el cónyuge y/o personas a cargo del funcionario no podían desempeñar tareas, remuneradas o no, en el país donde estuvieren destinados, se ha modificado en el sentido de que dicha prohibición existe, salvo autorización expresa del ministerio.

En el artículo 25 —pérdida del estado diplomático— se suprime la causa del inciso d), como consecuencia de haberse suprimido los tribunales de honor.

En lo concerniente al Consejo Superior de Embajadores se suprime la nominación de las salas (artículo 31), consignándose solamente que estará dividido en salas; asimismo se suprime el sorteo como método de integración, facultándose al ministerio para designarlos, y se ha suprimido la disposición de que los embajadores que no resultaban designados para su integración pasaban a retiro.

En el artículo 36 se dispone que la junta de calificaciones, en vez de ser integrada por los cuatro primeros en el orden de precedencia, será compuesta por los funcionarios que designe el ministerio y, asimismo, se ha suprimido la disposición que facultaba a la junta de calificaciones a intervenir en todo lo relativo al personal administrativo, técnico, profesional y de servicios generales, presumiblemente porque éstos tienen su propio régimen y esta ley se refiere exclusivamente al personal diplomático.

Se han suprimido, por otra parte, los tribunales de honor que se creaban por los artículos 38 al 41, por estimarse que dicha institución resultaría de difícil aplicación para el Servicio Exterior.

En el nuevo artículo 38, igual al 42 de la sanción del Senado, se establece que la calificación «reservada» deberá ser notificada al interesado, con derecho de éste a recurrir de la misma.

En el artículo 42 se agrega, como sanción disciplinaria aplicable a los funcionarios de categoría «A» —embajadores—, previo sumario, la disponibilidad hasta 2 años, y se ha suprimido la facultad que otorgaba al ministro de Rela-

ciones Exteriores el artículo 49 *in fine*, de pasar a disponibilidad, por razones de servicio, a los embajadores, por un período de hasta 2 años.

En el artículo 53 se suprime la percepción del 25 % de haberes que la sanción del Senado reconocía a favor del personal declarado en disponibilidad a su pedido y, asimismo, se establece que la reincorporación del personal en disponibilidad no será automática al vencimiento de la misma, sino que se dispondrá por resolución ministerial, pudiendo cubrirse el cargo presupuestario del funcionario que se hallare en disponibilidad.

En el artículo 55, relativo a los destinos que deben cubrir los diplomáticos durante su carrera, se agrega que durante su transcurso deben alternar en países de los cinco continentes; ello, evidentemente, para incrementar su caudal de experiencia.

En el artículo 59 se suprime el derecho de pasaje para el cónyuge en comisiones menores de 45 días, que la sanción del Senado reconocía en las comisiones no inferiores a 15 días entre países extranjeros.

En el artículo 63 se suprime el gasto de representación que el proyecto sancionado reconocía a los funcionarios que desempeñan cargos superiores en la Cancillería, y en el artículo 65 se crea el suplemento por tiempo mínimo cumplido, que se abonará al funcionario que cumpla el tiempo mínimo de 3 años en la categoría y no ascienda, suplemento que se fija en el 25 % de la diferencia entre el sueldo de su categoría y el de la inmediata superior.

En el artículo 73, inciso b), la licencia especial se establece cada 3 años en vez de dos y se eleva de 35 a 45 días corridos, y en el inciso d), se reduce de 20 a 10 días la licencia semestral para los funcionarios destacados en países considerados como de «régimen especial». Asimismo, se extiende la licencia extraordinaria de 3 meses también para los que no hubieran gozado la licencia ordinaria o especial durante 3 años y se modifica el monto de la retribución durante esta licencia, elevándola del 50 % que fijaba el proyecto sancionado por el Senado a la percepción del haber íntegro.

En el artículo 77, que establece el derecho al haber de retiro para el funcionario separado de su cargo por las causales del artículo 18 que tuviera 20 años computados, se excluye a los que fueran declarados cesantes o exonerados, como resultado de un sumario o a los que fueron pasibles de condena criminal [incisos c) y d) del artículo 18].

En el artículo 80 se modifica la base del cómputo para el haber de retiro, excluyéndose a las asignaciones familiares aparte de los viáticos con obligación de rendir cuentas.

La sanción venida en revisión suprime, por otra parte, el artículo 89, que disponía el pago de gastos de sepelio y luto en caso de fallecimiento del funcionario que revistaba en Cancillería o del retirado o jubilado.

El artículo 106 dispone que en la reglamentación de la ley se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 30, inciso 5º, de la ley 20.615, o sea el derecho de las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial de colaborar con el Estado como órganos técnicos consultivos, y en el artículo 107 se establece que la redacción del estatuto que regirá a los agregados laborales se hará por una comisión integrada por tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tres del Ministerio de Trabajo y tres representantes de la Confederación General del Trabajo.

En consecuencia, por las razones antedichas, la comisión considera aconsejable aceptar las modificaciones introducidas.

Italo A. Luder.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(8 de mayo de 1975)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

De los funcionarios del servicio exterior

Artículo 1º — La presente ley se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación que, como organización fundamental del Estado nacional para el desarrollo de sus relaciones en la comunidad internacional, es el instrumento de ejecución de la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial.

Art. 2º — El Servicio Exterior de la Nación estará integrado por:

- a) El cuerpo permanente activo, constituido por los funcionarios con estado diplomático en actividad que se desempeñen indistintamente en funciones diplomáticas, consulares y en la Cancillería, y por aquellos que ingresen al servicio exterior conforme a las disposiciones de la presente ley;
- b) El cuerpo permanente pasivo, en jubilación o retiro, constituido por los funcionarios que posean estado diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente hubieran cesado de revistar en actividad conforme al régimen de previsión que les haya sido aplicado;
- c) El cuerpo de agregados laborales, constituido por el personal designado con arreglo al artículo 9º de la presente ley;
- d) El servicio de agregados especializados, constituido por el personal designado con arreglo al artículo 10;
- e) Los funcionarios designados con arreglo al artículo 5º.

Art. 3º — El personal del Servicio Exterior de la Nación estará comprendido en las siguientes categorías:

- A) Embajador extraordinario y plenipotenciario;
- B) Ministro plenipotenciario de primera clase;
- C) Ministro plenipotenciario de segunda clase;
- D) Consejero de embajada y cónsul general;
- E) Secretario de embajada y cónsul de primera clase;
- F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase;
- G) Secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

Art. 4º — El personal del Servicio Exterior de la Nación desempeñará indistintamente funciones en las misiones diplomáticas, en las representaciones consulares y en la Cancillería conforme al sistema de rotación que se determine.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, para la realización de cometidos especiales y concretos y mientras duren los mismos.

La asignación de categoría diplomática en rangos inferiores podrá ser efectuada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto a los efectos protocolares.

Art. 7º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá asignar a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación la categoría inmediata superior a la que posean, al solo efecto del rango protocolar y para la realización de cometidos especiales y concretos, con excepción de los funcionarios de las categorías B y C y en el caso previsto en el artículo siguiente.

Art. 8º — La jefatura de las misiones diplomáticas será desempeñada por funcionarios de la categoría A. Los funcionarios de las categorías B y C podrán ser acreditados temporalmente como jefes de misión, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior jerarquía cuando esas razones desaparezcan. En el caso de que fuera necesaria la designación de encargados de negocios *ad interim*, ella deberá recaer en el funcionario de la re-

presentación, perteneciente al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, que siga en categoría y antigüedad en el grado al jefe de misión.

Este mismo criterio será aplicado para el reemplazo de los jefes de las oficinas consulares.

Art. 9º — El cuerpo de agregados laborales estará constituido por el personal que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo, propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo. Su organización, régimen y funcionamiento serán regulados por un estatuto especial.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo podrá designar agregados especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía u otras, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos. Este servicio de agregados especializados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen. Formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango protocolar.

Art. 11. — Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es indispensable:

- a) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad;
- b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- c) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente;
- d) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable;
- e) Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas;
- f) Que, siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por naturalización;
- g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional;
- h) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 12. — El ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación.

Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá designar o promover funcionarios para la categoría A, ad referendum de la Honorable Cámara de Sena-

dores, e igualmente podrá promover funcionarios a las categorías B y C, en las mismas condiciones.

Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán, desde el punto de vista presupuestario, su cargo anterior interinamente, hasta tanto se otorgue el mismo por parte del Senado de la Nación.

Prestado el acuerdo no se requerirá un nuevo pedido para ulteriores traslados del personal del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de las categorías A, B y C.

El funcionario cuyo acuerdo fuera rechazado o no hubiere sido solicitado al Senado de la Nación en el término correspondiente, volverá a ocupar el mismo cargo en el que revistaba en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 13. — La incorporación al cuerpo permanente activo se efectuará exclusivamente por egreso del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y en calidad de funcionario de la categoría G.

Art. 14. — Anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del cuerpo permanente activo que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos, en todas las categorías en la proporción que determine la reglamentación, de acuerdo con las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse a la categoría inmediata superior.

Art. 15. — Las vacantes en la categoría A —embajador extraordinario y plenipotenciario— serán cubiertas normalmente por el Poder Ejecutivo mediante el ascenso de los ministros plenipotenciarios de primera clase del cuerpo permanente activo. Estos ascensos podrán ser realizados, si las condiciones del Servicio Exterior de la Nación así lo requieren, sin la periodicidad y plazos exigidos por los artículos 14 y 16 inciso b), de la presente ley.

Art. 16. — Son requisitos indispensables para el ascenso:

- a) Que existan vacantes en la categoría inmediata superior;
- b) Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías;
- c) Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — La Junta Calificadora deberá preparar el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos, de acuerdo con su respectiva antigüedad y méritos. El funcionario que habiendo sido incluido en la propuesta de ascensos y que el Poder Ejecutivo no hubiere decidido ascender, o no fuera promovido por causas que no le sean imputables, percibirá un suplemento equivalente al

cincuenta por ciento de la diferencia entre su haber mensual y el de la categoría inmediata superior.

Art. 18. — Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11, previo asesoramiento de la Junta Calificadora;
- b) Los funcionarios de las categorías A, B y C que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación;
- c) Aquellos funcionarios a quienes se aplicara como resultado de un sumario la sanción de cesantía o exoneración;
- d) Los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal impuesta por los tribunales comunes o federales;
- e) Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaran los cursos dispuestos en el artículo 16, inciso c), de la presente ley;
- f) Los funcionarios de las categorías G a E que habiendo permanecido en sus categorías por un período de diez años fueran promovidos automáticamente a propuesta de la Junta Calificadora, según el artículo 37, inciso e), y luego de haber tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango.

Los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora, luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar por dos años en su nueva categoría.

Estas provisiones serán aplicables en ambos casos siempre que el funcionario no alcance el límite de edad establecido en el inciso siguiente;

- g) Los funcionarios que hubiesen alcanzado los siguiente límites de edad: setenta años, en la categoría A; sesenta y siete años, en las categorías B y C, y sesenta y cinco años, en las restantes categorías;
- h) Por renuncia expresa del funcionario.

CAPÍTULO II

Del estado diplomático

Art. 19. — El grado correspondiente a la categoría de cada funcionario del Servicio Exterior de la Nación con las funciones, obligaciones, derechos y prohibiciones inherentes al mismo, instituidos por la presente ley y su reglamentación, constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley.

Art. 20. — Son funciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Representar a la Nación;
- b) Promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, velar por su prestigio y fomentar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, y difundir su conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del superior gobierno de la Nación;
- c) Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la Nación correspondieren a los escribanos públicos; su formalización tendrá plena validez en todo el territorio de la República.

Registrarán, asimismo, nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de hijos extramatrimoniales y todos los demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas cuando sean solicitados y/o sean de su conocimiento, para su posterior inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales pertinentes;

- d) Sin perjuicio de las facultades previstas en el inciso precedente, los jefes de misiones diplomáticas están autorizados, en caso de urgencias, a tomar juramentos o declaraciones de testigos residentes dentro de su jurisdicción, así como a autenticar cualquier acto notarial con las formalidades y condiciones exigidas por las leyes de la Nación para la validez de los instrumentos públicos. Los testimonios que expidan de dichos actos tendrán en la República el mismo valor que acuerden las leyes a los actos análogos debidamente autorizados.

Art. 21. — Son obligaciones de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con arreglo a las disposiciones legales que las reglamenten, y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos internacionales, los usos y las costumbres internacionales:

- a) Prestar juramento, antes de asumir sus tareas, de guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con sus obligaciones y deberes de funcionario del Servicio Exterior de la Nación en las condiciones estipuladas en las prescripciones de la presente ley y su reglamentación;

- b) Prestar servicios en forma regular con toda su capacidad y diligencia, para el mejor desempeño de sus funciones;
 - c) Desempeñar las funciones o misiones que les encomiende el Poder Ejecutivo, ya sea en la Cancillería, en las misiones diplomáticas o en los consulados, cargos y destinos, de los cuales no podrán excusarse;
 - d) Defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación, y reclamar las ventajas que le acuerden los tratados, las leyes y los usos internacionales;
 - e) Difundir ampliamente el conocimiento de la República y fomentar las buenas relaciones políticas, económicas, culturales y sociales con el país en que ejercen sus funciones;
 - f) Informar periódica y documentadamente sobre los diversos aspectos del Estado ante el que están acreditados;
 - g) Prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses, de acuerdo con las normas pertinentes;
 - h) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones que reciban;
 - i) Preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial;
 - j) Guardar absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejaran de pertenecer al Servicio Exterior;
 - k) No abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia, hasta que la misma sea aceptada y se haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante o a quien corresponda, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
 - l) Respetar el orden jurídico y las costumbres vigentes en el lugar de destino;
 - m) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que recibiére;
 - n) Impartir por escrito las órdenes, directivas o instrucciones que deban cumplir sus subordinados en los casos que por su particular trascendencia puedan afectar a los intereses de la Nación;
 - ñ) Efectuar una calificación periódica e individual del personal a sus órdenes, informando de la misma a la superioridad y comunicándola por escrito a sus subordinados;
 - o) Mantener y perfeccionar los niveles de capacidad y eficiencia que exige el servicio;
 - p) Declarar bajo juramento los bienes que poseyeren y las modificaciones que experimentare su patrimonio;
 - q) Observar una conducta pública y privada ajustada a la más estricta honorabilidad en su actuación social y económica;
 - r) Solicitar autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para contraer matrimonio;
 - s) Cuando por necesidades del servicio sean convocados por el Poder Ejecutivo los funcionarios del cuerpo permanente pasivo, deberán presentarse a prestar servicios, quedando sujetos —salvo dispensa expresa— a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad.
- Art. 22. — Son derechos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que lo reglamenten, sin perjuicio de otros establecidos en la legislación nacional:
- a) Gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y no ser separados del mismo sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley;
 - b) Usar el título de la categoría y recibir el tratamiento que les acuerda la misma, de conformidad con la presente ley y su reglamentación;
 - c) Ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
 - d) Percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que correspondan a la categoría y a la misión que les fuere encomendada, en orden a las exigencias de representación de su función, jerarquía, permanencia en el cargo y las distintas obligaciones emergentes de su estado civil;
 - e) Percibir las retribuciones en concepto de compensación por gastos de vivienda adecuada, subsidio familiar y escolaridad de sus hijos, conforme a las exigencias que determinen los países de destino;
 - f) Percibir semestralmente, y según los países, órdenes de pasaje únicamente para sus hijos cuando las posibilidades de educación en el destino resulten deficitarias y por tal causa se vean obligados a desplazarlos a la República o a otros países;
 - g) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos o insalubres, que se calificarán de «régimen especial»;
 - h) Introducir libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles de uso personal, de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyen el ajuar de su casa en el exterior, cuando sean trasladados a la República, dentro de un plazo no mayor de doscientos días

desde la fecha de su llegada al país. Este plazo podrá ser ampliado por causas debidamente justificadas, debiendo solicitarse tal ampliación dentro del lapso mencionado. De igual forma tendrán derecho a exportar libres de todo derecho y gravamen los bienes muebles, inclusive los de industria nacional, de uso personal, y de su familia, así como del personal de servicio, y los que constituyan el ajuar de su casa en ocasión de ser trasladados al exterior o adquiridos durante su permanencia en destino y reintroducirlos en iguales condiciones de exención de derecho y gravámenes cuando regresen a la República;

- i) Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus bienes muebles que hubieren sufrido, ellos o los miembros de su familia, por causas que no provinieren de negligencia o imprevisión del funcionario y en ocasión de sus funciones en el exterior, para lo cual deberán haber presentado previamente a la Cancillería el inventario de sus bienes muebles, sujeto a la reglamentación que se dicte al efecto;
- j) Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma, resolución, medida disciplinaria o calificación que consideren inadecuada o injusta;
- k) Recabar órdenes, directivas o instrucciones escritas del superior jerárquico, cuando por la naturaleza del asunto lo estimen aconsejable;
- l) Usar de las licencias ordinarias y extraordinarias;
- m) El uso del pasaporte diplomático por el funcionario, su cónyuge y los hijos menores de dieciocho años; los otros miembros de la familia que estén a su cargo tendrán derecho al uso de pasaporte oficial;
- n) Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes;
- ñ) Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del Servicio Exterior de la Nación y, por lo tanto, mantienen el uso de los atributos de su categoría.

Art. 23. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Intervenir en la política del país extranjero en que desempeñen sus funciones;
- b) Ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero;
- c) Formar parte de directorios, o ejercer ningún tipo de comercio, representación, gestión ni funciones de carácter hono-

rario o remuneradas al servicio de firmas comerciales, empresas o intereses extranjeros;

- d) Percibir otras remuneraciones a cargo de la administración nacional, provincial o municipal, excepto las referidas a la docencia universitaria;
- e) Prestar servicios en el país extranjero del que fuera originario su cónyuge, con la excepción prevista en el artículo 94 de la presente ley;
- f) Hacer uso indebido de documentos o noticias reservadas, confidenciales o secretas.

Art. 24. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, salvo autorización expresa:

- a) Asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales;
- b) Integrar comisiones con el propósito de asumir una actitud colectiva ante el gobierno del país de destino, salvo extrema gravedad y urgencia debidamente comprobadas;
- c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República;
- d) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino, prohibición que alcanza a la familia a su cargo;
- e) Que su cónyuge y/o las personas a su cargo desempeñen tareas, remuneradas o no, en el país extranjero donde estuvieren destinados;
- f) Ejercer la docencia, la que sólo podrá ser utilizada en el ámbito universitario nacional y siempre que no interfiera en la dedicación y el rendimiento debidos a la función específica.

Art. 25. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa a dicho estado;
- b) Por las causas previstas en el artículo 18 inciso c) de la presente ley;
- c) Por condena criminal impuesta por delitos dolosos;
- d) Por presentarse en concurso o ser declarado fallido.

CAPÍTULO III

Del Consejo Superior de Embajadores

Art. 26. — Créase un Consejo Superior de Embajadores, de carácter permanente, cuyas funciones serán asesorar al ministro en materia de

política exterior y en los asuntos de especial relevancia que conciernan a la conducción general del ministerio.

Art. 27. — Los funcionarios de categoría A del Cuerpo Permanente Activo que hubieren cumplido sesenta y cinco años pasarán a revistar en la Cancillería para integrar el Consejo Superior de Embajadores, salvo la excepción prevista en el artículo 28.

Art. 28. — El límite de edad indicado en el artículo anterior podrá ser ampliado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en forma de excepción, en caso de que lo juzgue conveniente.

Art. 29. — Podrán integrar el Consejo Superior de Embajadores los funcionarios de la categoría A del cuerpo permanente activo que hayan revistado por lo menos doce años en el cargo.

Art. 30. — Una vez integrado el Consejo Superior de Embajadores sus miembros podrán ser trasladados al exterior en misiones permanentes, cuando razones de interés nacional así lo aconsejen, pero podrán cubrir también en cualquier momento misiones especiales y transitorias.

Art. 31. — El Consejo funcionará mediante salas que respondan a distintas especialidades.

Art. 32. — El número de integrantes será limitado y sujeto a la proporción que se establezca por reglamentación. El tiempo de permanencia de funcionarios en el Consejo Superior de Embajadores será de tres años.

Art. 33. — Si al tiempo de constitución o renovación del consejo hubiese mayor número de embajadores en situación de revista en la Cancillería para acceder al mismo, los integrantes serán determinados por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 34. — Los funcionarios integrantes del Consejo Superior de Embajadores dejarán de pertenecer automáticamente al mismo:

- a) Por renuncia al servicio activo;
- b) Al cumplir setenta años de edad;
- c) En caso de traslado al exterior o cese de funciones;
- d) Al finalizar el tercer año de su permanencia, si no les fuera expresamente prorrogado el plazo por un nuevo período no superior a dos años;
- e) Por exigencias de la rotación que corresponda efectuar entre sus miembros.

Art. 35. — La misión de asesoramiento, forma de integración, rotación y funcionamiento del Consejo Superior de Embajadores serán establecidos por la reglamentación de la presente ley.

CAPÍTULO IV

De la Junta Calificadora

Art. 36. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una Junta Calificadora

de cinco miembros, presidida por el subsecretario que tenga a cargo la superintendencia de la administración del personal, e integrada por cuatro miembros en actividad con rango de embajador, designados entre quienes se encuentren en funciones en la Cancillería. El director de personal actuará como secretario asesor. Los cuatro embajadores se renovarán cada dos años.

Art. 37. — Serán funciones de la Junta Calificadora:

- a) Asistir al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en lo referente a promociones, traslados, sanciones disciplinarias, disponibilidades, retiros, jubilaciones y cualquier otra materia vinculada con el régimen de la presente ley que afecte la relación existente entre el Estado y los funcionarios que pertenezcan o hubieran pertenecido al Servicio Exterior de la Nación;
- b) Asesorarlo con respecto a la resolución de los recursos a que dieran lugar las actuaciones mencionadas en el inciso a) anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo 22 de la presente ley;
- c) Asesorar al ministro en lo referente a la integración del Consejo Superior de Embajadores;
- d) Confeccionar el escalafón del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, teniendo en cuenta la antigüedad en la carrera y en la categoría de cada funcionario. El escalafón tendrá carácter público y será actualizado anualmente;
- e) Proponer la promoción automática de los funcionarios de las categorías G a E que no hayan ascendido en el término de diez años, y los de la categoría D que no lo hubieran hecho en doce años, conforme con las previsiones del artículo 18, inciso f).

Art. 38. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con excepción de los pertenecientes a la categoría A, serán calificados anualmente por sus superiores jerárquicos.

Todo funcionario tiene la obligación de calificar a sus subordinados inmediatos cuando éstos se hayan desempeñado a sus órdenes durante un lapso no menor de cuatro meses.

El informe de calificación será confidencial y estará destinado a reflejar la apreciación del superior sobre la forma en que el subalterno se haya desempeñado durante un período determinado.

Una vez notificado el causante por escrito, quien podrá interponer recurso de acuerdo con lo establecido al efecto en la reglamentación, el informe será elevado por la vía jerárquica correspondiente.

CAPÍTULO V

Del régimen disciplinario

Art. 39. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Art. 40. — Cuando un funcionario de la categoría A sea el causante de la transgresión a las normas emergentes de esta legislación, así como también a la conducta ética y moral que debe observar constantemente, será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto ordenará, al efecto, se le instruya el correspondiente sumario.

Art. 41. — El sumario instruido de acuerdo con el artículo anterior puede dar lugar a las siguientes sanciones, que dispondrá el ministro de Relaciones Exteriores y Culto:

- a) Disponibilidad por un período de uno a dos años;
- b) Retiro obligatorio;
- c) Cesantía o exoneración.

Art. 42. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, comprendidos en las categorías B a G, podrán ser objeto de las sanciones disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento por escrito;
- c) Suspensión;
- d) Disponibilidad;
- e) Cesantía;
- f) Exoneración.

Para su aplicación se tendrá en cuenta, en principio, el carácter y la importancia de la falta cometida y los antecedentes del imputado.

Art. 43. — El funcionario del Servicio Exterior de la Nación que violare el juramento establecido en el artículo 21, inciso a), de la presente ley, será pasible de exoneración.

Art. 44. — Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por las siguientes autoridades:

- a) Apercibimiento verbal o escrito, por el superior jerárquico;
- b) Suspensión hasta cinco días, por el jefe de misión diplomática o consular, como asimismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- c) Suspensión hasta diez días, por resolución del subsecretario con superintendencia sobre asuntos de personal a requerimiento del jefe de misión diplomática o de la representación consular, como asimismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- d) Suspensión de diez a noventa días y la disponibilidad, por resolución ministerial.

Toda sanción disciplinaria será comunicada de inmediato al causante, al organismo encargado del personal, y por éste a la Junta Calificadora.

Art. 45. — No se impondrá la suspensión de funciones por más de treinta días ni las medidas disciplinarias indicadas en los incisos e) y f) del artículo 42 sin previa instrucción de un sumario administrativo.

La reglamentación determinará las normas necesarias para garantizar la defensa del funcionario sumariado.

Art. 46. — Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al inculcado de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá disponer la suspensión preventiva por un período no mayor de noventa días.

Art. 47. — Cuando el funcionario estuviere procesado criminalmente por un delito doloso cuya gravedad requiera apartar previamente al imputado de sus funciones, y en el caso en que la substanciación del proceso criminal supere al plazo establecido en el artículo precedente, dicho plazo será ampliado hasta el momento en que quede consentida la sentencia.

Art. 48. — Los sumarios se iniciarán por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO VI

De la disponibilidad

Art. 49. — Los funcionarios podrán ser declarados en disponibilidad:

- a) A su solicitud, por razones particulares, cuando tuvieren más de diez años en el Servicio Exterior de la Nación, en cuyo caso queda en suspenso la prohibición establecida en el artículo 23, inciso b), siempre que las actividades a que se refiere el mismo no sean gestiones de intereses extranjeros;
- b) Cuando la licencia por lesión o enfermedad contraída por causas o en ocasión de sus funciones exceda los períodos de dos años, con el ciento por ciento de sus haberes, y el año de extensión con el cincuenta por ciento, previsto por la legislación general previsional de la Nación;
- c) Los que desempeñaren funciones electivas nacionales, provinciales o municipales, mientras dure su mandato;
- d) Si hubieren sido designados en un organismo nacional, provincial o municipal;
- e) Si hubieren sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República, previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores y Culto;
- f) Por aplicación de la sanción del artículo 42, inciso d), en cuyo caso no podrá exceder de un año.

Art. 50.— En el caso de los incisos a) y b) del artículo anterior, la disponibilidad tendrá en su totalidad o fraccionadamente una duración máxima de un año. En el caso del inciso d), el funcionario podrá solicitar una prórroga no mayor de un año sobre el plazo máximo fijado por el inciso a) o por el período que dure el desempeño de la designación, siempre que ésta, justificadamente, responda a un alto interés nacional. En el caso del inciso e), la disponibilidad se otorgará por dos años, pudiendo extenderse a cuatro a solicitud del interesado siempre que el ministerio juzgue que la designación responde a intereses del Estado. En el caso del inciso f) no podrá ser nunca mayor de un año.

Art. 51.— El tiempo transcurrido en la disponibilidad prevista en el inciso b) del artículo 49 será computado a los fines del ascenso. En los demás incisos dicho lapso no será computable.

El tiempo transcurrido por los motivos señalados en los incisos b), c), d) y e) del artículo 49 y en el artículo 42, inciso d), serán computados a los fines del retiro o jubilación.

Art. 52.— La disponibilidad será ordenada por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Si el funcionario, al vencer los plazos previstos en el artículo 50, no hubiere solicitado su reincorporación o una prórroga en el caso que corresponda se decretará su cesantía.

Art. 53.— Los funcionarios declarados en disponibilidad en virtud del artículo 49, no percibirán sueldo alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hasta la fecha de su reintegro a sus funciones, salvo el caso del inciso b) en que percibirán el cincuenta por ciento de sus haberes cuando la licencia exceda el período de un año y el ciento por ciento de sus haberes cuando supere los dos años.

La disponibilidad impuesta de acuerdo con el artículo 42, inciso d), no podrá ser aplicada sin el previo traslado a la República del funcionario que se encontrase en el extranjero.

El cargo del funcionario en disponibilidad podrá ser cubierto presupuestariamente. La reincorporación se producirá por resolución ministerial.

CAPÍTULO VII

De los traslados

Art. 54.— Todos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación están sujetos a ser trasladados.

Todo traslado será dispuesto por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y deberá ser cumplido como orden de servicio.

A los efectos de la aplicación de la presente ley y su reglamentación se entiende por traslado el pase de un país a otro y, dentro del mismo país, de una ciudad a otra.

El funcionario tendrá un plazo de cuarenta y cinco días continuos, a contar del día siguiente al de su notificación, para hacerse cargo de sus nuevas funciones. Este plazo podrá ser modificado por disposición ministerial, cuando necesidades de servicio así lo requieran.

Art. 55.— El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tendrá en cuenta en las designaciones y traslados que los funcionarios con mejor calificación deberán ser destinados prioritariamente a los países de América latina.

Todo funcionario en el transcurso de su carrera deberá servir en dos períodos como mínimo en países latinoamericanos, y alternar en países de los cinco continentes; asimismo deberá prestar servicios por lo menos en dos oportunidades en funciones consulares, tanto en la Cancillería como en el exterior.

Art. 56.— Los funcionarios de las categorías D a G deberán prestar funciones en forma alternada por los períodos siguientes:

- a) Dos años consecutivos como mínimo y seis como máximo durante su permanencia en la República;
- b) Cuatro años consecutivos como mínimo y seis como máximo durante su permanencia en el exterior.

Estos límites podrán prorrogarse o reducirse por disposición del Poder Ejecutivo.

Art. 57.— Los funcionarios del servicio exterior destinados por primera vez a un cargo permanente en una misión diplomática o consular, independientemente de los gastos de embalaje y fletes, recibirán, en esa única oportunidad, para gastos de instalación, con el coeficiente correspondiente al país de destino, el importe igual a dos meses de retribución si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si en el momento de iniciar el viaje estuvieran casados. Esta última asignación también la recibirán los viudos y solteros que deban atender las necesidades de los miembros de su familia conforme lo determina el artículo 92, siempre que los familiares a su cargo viajen con él.

Art. 58.— Cuando los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con familiares a su cargo sean trasladados, percibirán, antes de emprender viaje, para compensar los gastos de instalación, la suma equivalente a dos meses de retribución, y si se tratase de solteros o viudos sin hijos, la equivalente a un mes de retribución, calculadas conforme al país de coeficiente más favorable, así como los gastos de embalaje y flete, salvo que el traslado fuese dentro de la misma ciudad. Al pasar a prestar servicios a la Cancillería se aplicará para los gastos de instalación el coeficiente del último destino.

Art. 59. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que deban viajar en cumplimiento de un traslado recibirán los pasajes correspondientes para ellos y los miembros de su familia. Cuando se tratare de una misión especial o comisión de servicio de la República al extranjero, el funcionario podrá requerir un pasaje más para su cónyuge si debiera permanecer fuera de su destino permanente más de cuarenta y cinco días.

Art. 60. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación podrán ser llamados en comisión a la República por razones de servicio mediante resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y por el plazo que fije la reglamentación. En tales desplazamientos, durante su permanencia en la República, los viáticos serán liquidados sin el coeficiente del país de destino, y en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 61. — Los funcionarios de las categorías A, B, y C en todos los casos, y los de las restantes categorías que tuvieran por lo menos un hijo menor de doce años, tendrán derecho a un pasaje para un empleado personal.

Art. 62. — En el caso de que un funcionario del Servicio Exterior de la Nación sea trasladado al país por cualquier motivo no contemplado específicamente en esta legislación, le corresponden todos los derechos inherentes al traslado.

En caso de cesación de funciones en el exterior como consecuencia de la pérdida del estado diplomático, el funcionario tendrá derecho, dentro del plazo que fije la reglamentación, a los pasajes para él, su familia y el empleado personal previsto en el artículo 61, así como a los gastos de embalaje y flete.

CAPÍTULO VIII

De los haberes y asignaciones

Art. 63. — Los haberes, asignaciones, suplementos y gastos previstos en la presente ley que correspondan al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las representaciones diplomáticas y consulares, serán liquidados y abonados por trimestre anticipado en el exterior, y desde la fecha de partida, en la divisa que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará o reajustará el Poder Ejecutivo; siempre que la ley no disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se aplicará al sueldo anual complementario.

La reglamentación establecerá la asignación con coeficiente que, en concepto del salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el exterior.

Cuando pasen a prestar servicios a la Cancillería, se liquidarán sus haberes hasta la llegada a la República con el coeficiente del último destino.

Art. 64. — Los funcionarios de las categorías B y C que de acuerdo con el artículo 8º fuesen acreditados como jefes de misión con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, percibirán, mientras se desempeñen como tales, un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su propia remuneración y la que correspondería al funcionario de la categoría A. Asimismo, los encargados de negocios *ad interim* recibirán desde el momento en que invistan ese carácter y por el término del interinato un sobresueldo por responsabilidad de funciones equivalente al veinte por ciento de la remuneración que le correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 65. — Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que superen en sus respectivas categorías los plazos establecidos en el artículo 16, inciso b) de la presente ley, y que no se encuentren sometidos a sumario administrativo, cobrarán mensualmente un suplemento por tiempo mínimo cumplido equivalente al veinticinco por ciento de la diferencia entre el haber de su categoría y el correspondiente a la inmediata superior.

Art. 66. — Todo funcionario del Servicio Exterior de la Nación, que estuviere acreditado ante varios gobiernos, podrá solicitar el reintegro de los gastos de representación y de oficina que se ocasionaren con motivo de sus funciones concurrentes, y percibirá los viáticos correspondientes a los períodos en que deba permanecer en los países en que no tuviera su residencia habitual.

Asimismo se le otorgarán las órdenes de pasajes pertinentes.

Art. 67. — El funcionario que en virtud de usos o exigencias transitorias de servicio deba trasladarse a otra ciudad, dentro del mismo país, podrá modificar su residencia previa autorización del Ministerio.

En ese caso recibirá una retribución extraordinaria equivalente a la tercera parte de su remuneración total y se le otorgarán pasajes para él y su familia.

Art. 68. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que fueren designados para el desempeño de misiones especiales u otras comisiones de servicio tendrán derecho a pasajes y a los viáticos que fijará la respectiva reglamentación.

Cuando para el cumplimiento de dicho cometido deban desplazarse desde el Ministerio, y la permanencia en el exterior exceda de treinta días, recibirán, en substitución de los viáticos, la remuneración que percibiría el funcionario de igual categoría en el país donde desempeñará su misión. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá anticiparles los viáticos o remuneraciones que correspondan y las órdenes de pasaje, así como también en caso necesario una suma para gastos de representación con cargo de rendir cuenta.

Las personas que el Poder Ejecutivo designe para el desempeño de misiones especiales ante gobiernos extranjeros o congresos, conferencias

y reuniones internacionales, así como los miembros que integren las delegaciones, recibirán los pasajes, los viáticos y gastos de representación que se determinarán en cada caso.

Art. 69. — Las representaciones diplomáticas y consulares recibirán los gastos de representación que para cada una de ellas determine anualmente el ministerio conforme a las exigencias propias de su función.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares para las rendiciones de cuentas de dicha partida, teniendo presente que esos gastos no se asignan con carácter personal a dichos jefes sino que tienen como objeto atender los compromisos protocolares oficiales de todos los funcionarios de la representación.

Art. 70. — En los países donde la Embajada no posca para residencia del jefe de misión diplomática una propiedad del Estado, se destinará con cargo a rendir cuenta la suma necesaria para su arrendamiento y se determinarán, también anualmente, las partidas destinadas a las representaciones diplomáticas y consulares para alquiler de sus oficinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares en el arrendamiento de inmuebles a fin de que los contratos de locación que subscriban ad referendum puedan ser ratificados de oficio por el ministerio.

Art. 71. — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determinará anualmente los gastos e inversiones que demande el funcionamiento de cada misión diplomática y oficina consular, y establecerá la forma y responsabilidad emergente de la aplicación de dichas partidas.

Art. 72. — A fin de determinar las sumas que corresponda asignar en virtud de los artículos 69, 70 y 71, las representaciones diplomáticas y consulares elevarán anualmente al ministerio, en el plazo y forma que determine la reglamentación, el presupuesto detallado de sus necesidades.

CAPÍTULO IX

Del régimen de licencias

Art. 73. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes licencias:

- a) Ordinaria anual de treinta días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y con coeficiente, cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- b) Licencia especial de cuarenta y cinco días corridos, para ser utilizada en la República, luego de cada tres años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración total con coeficiente, y las órdenes de pasaje

para el funcionario y su familia. Esta licencia excluye durante el año que sea acordada el derecho a lo previsto en el inciso anterior;

- c) Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se concederán de acuerdo con las normas que las reglen. En el caso de que corresponda percibir haberes serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- d) Semestral de diez días para los funcionarios destacados en los países denominados de «régimen especial», de acuerdo con el artículo 22, inciso g), y que serán otorgadas según lo establezca la reglamentación;
- e) Extraordinaria, que no podrá exceder de tres meses para los funcionarios que por razones de servicio no hayan podido tomar las licencias establecidas en los incisos a) y b) durante un período de tres años, y para aquellos que hayan prestado servicios durante cinco años consecutivos en el exterior. En este último caso interrumpe el plazo para gozar de las licencias de los incisos b) y d) y excluye durante el año en que sea acordada, el derecho a la licencia del inciso a).

Las licencias ordinarias deberán ser usadas en el año calendario correspondiente caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas.

Solamente por razones de servicio autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrán usarse al año siguiente.

CAPÍTULO X

De las jubilaciones, retiros y pensiones

Art. 74. — El régimen de previsión aplicable a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación estará integrado por las normas generales establecidas para los agentes de la administración pública nacional, y las normas específicas referidas a ellos que modificaren aquéllas.

Art. 75. — La prestación de servicios en los destinos indicados en el artículo 22 inciso g), será computada doble a los efectos del retiro o jubilación.

Art. 76. — Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del artículo 18 estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, podrán ser jubilados de oficio.

Art. 77. — Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieren una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales quince como mínimo computables en el Servicio Exterior de la Nación, y hubieran

cesado en sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, con excepción de los incisos c) y d) del mismo, o hayan sido separados por razones ajenas a su voluntad, tendrán derecho al haber de retiro siempre que no hubieran percibido ningún tipo de indemnización en razón del cese de funciones, en cuyo caso deberán reintegrarla.

Art. 78. — Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un haber de retiro mensual equivalente al 2,5 % de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicio computable para el retiro. Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario tenga sesenta años de edad, si estuviere entonces en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y hasta los sesenta y cinco años en caso contrario.

Art. 79. — Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que se acogieren a los beneficios de la jubilación o fueren jubilados de oficio de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, desde el momento en que dejaren de pertenecer al cuerpo permanente en actividad y hasta que obtuvieren el beneficio de la caja respectiva, percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un anticipo de jubilación equivalente al setenta por ciento del que presumiblemente les correspondiere, calculado sobre los importes que por todo concepto hubieren constituido su última retribución, excluidos los viáticos sujetos a rendición de cuentas. La liquidación será efectuada por el ministerio previa acreditación por parte del interesado de haber iniciado el trámite jubilatorio ante la caja, y se computará como pago a cuenta del haber jubilatorio, deduciéndose de la retroactividad que se acumulare. Si el monto de los anticipos excediere la retroactividad a percibir, la diferencia será deducida por la caja de los haberes del beneficiario mediante un descuento que no podrá exceder del veinte por ciento del importe mensual de los mismos. El ministerio deberá comunicar que efectúa el anticipo a la caja, la que a su vez le hará saber la fecha en que comienza el pago de los haberes jubilatorios. En el caso de que en definitiva no se acordara el beneficio por la caja, el ministerio formulará los cargos de reintegro correspondientes.

CAPÍTULO XI

Del Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Art. 80. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación es un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con las facultades que le son atribuidas por la presente ley y su reglamentación.

Art. 81. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación constituye el organismo único de selección, formación e incorporación del personal para el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación y tiene como misión fundamental afirmar y desarrollar la vocación profesional, los principios éticos y morales y la convicción patriótica que informan la conducta de los aspirantes a integrantes del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 82. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación complementa su cometido con sujeción a la misión señalada en el artículo anterior, mediante:

- a) La selección —por el medio que establezca la reglamentación— de los candidatos a ingreso al instituto, los que deben reunir las condiciones establecidas en el artículo 11, ser menores de treinta y cinco años de edad y poseer título universitario de validez nacional en disciplinas afines con la carrera;
- b) La incorporación en calidad de aspirantes de quienes resulten admitidos en el instituto, a los efectos de su formación y capacitación profesional, teórica y práctica;
- c) La propuesta de promoción a la categoría de secretario de embajada y cónsul de tercera clase (categoría G) de los aspirantes que hayan aprobado los cursos y exigencias correspondientes y con arreglo a la reglamentación de la presente ley;
- d) La capacitación teórica y práctica de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación conforme lo exige el inciso c) del artículo 16;
- e) El cumplimiento de todas las actividades docentes, de investigación, estudio y divulgación que determine la reglamentación.

Art. 83. — Los aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación tendrán dedicación exclusiva, por lo que serán becados hasta su egreso, oportunidad en que serán promovidos a funcionarios de la categoría G del Cuerpo Permanente Activo e inscritos en el Escalafón del Servicio Exterior de la Nación, reconociéndoseles como antigüedad en la carrera, al solo efecto de la jubilación o retiro, el tiempo de permanencia en el instituto.

Asimismo quedan sujetos a las obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias establecidas en la presente ley en cuanto sea de aplicación a su calidad de aspirantes al Servicio Exterior de la Nación, de acuerdo con la reglamentación.

Art. 84. — La dirección del Instituto del Servicio Exterior de la Nación estará a cargo de un funcionario de la categoría A del Cuerpo

Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, quien dependerá directamente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO XII

De las disposiciones generales

Art. 85. — Cuando los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación serán elegidos entre los de la categoría A.

Art. 86. — Queda prohibida toda designación honoraria en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 87. — Cuando un funcionario del Servicio Exterior de la Nación se lesionara o contrajera alguna enfermedad por causa o en ocasión de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de asistencia médica, internación y medicamentos, sin perjuicio del retiro, jubilación o indemnización que pudiera corresponderle.

Art. 88. — En caso de fallecimiento de un funcionario del Servicio Exterior de la Nación mientras estuviese designado en el extranjero, el Estado se hará cargo de la repatriación de los restos del extinto hasta el domicilio fijado en la República por su familia y de los siguientes gastos:

- a) De acondicionamiento y sepelio;
- b) De los pasajes de regreso a la República de los miembros de su familia y del empleado previsto en el artículo 61;
- c) De embalaje, fletes y acarreo que se originen como consecuencia del derecho acordado en el artículo 58.

Asimismo se reconocerá a la familia el derecho a los gastos de traslado que le hubieran correspondido al extinto.

Art. 89. — Cuando falleciere un miembro de la familia, el Estado repatriará los restos y se hará cargo de todos los gastos de acondicionamiento y traslado hasta el lugar de la República que determine el funcionario. El pasaje de regreso de la o las personas que acompañen los restos será también abonado por el Estado y se otorgará al funcionario una licencia especial a establecer por reglamentación.

Art. 90. — Los títulos otorgados por universidades extranjeras o establecimientos de enseñanza de nivel primario, secundario o terciario a los funcionarios del Servicio Exterior destinados en el extranjero, así como a los miembros de su familia, serán reconocidos en la República de acuerdo con las reglamentaciones de las universidades nacionales o de los organismos de conducción de la enseñanza de los respectivos niveles. Si los interesados no hubieran terminado sus estudios en el exterior, las universidades nacionales o los respectivos organismos reconocerán la validez de los estudios hasta el último

curso completo aprobado en el extranjero. Si los estudios seguidos no lo fueran por el sistema de cursos completos, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero que tengan su equivalente en el respectivo plan de estudios argentino. Igual criterio se seguirá si hubiera completado cursos en el extranjero, en el caso de que la correspondiente carrera esté organizada por materias en la República.

Art. 91. — Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazca en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte de los padres.

Art. 92. — Se entiende por familia a los fines de esta ley: el cónyuge, los hijos e hijastros menores de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas e hijastras solteras y los ascendientes de primer grado tanto del funcionario como del cónyuge, cuando aquél compruebe que subviene a sus necesidades.

Art. 93. — A partir de la publicación de la presente ley queda prohibido a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros que no se hayan comprometido previamente a obtener la carta de ciudadanía argentina.

Art. 94. — Únicamente se destinará un funcionario al país de origen del cónyuge cuando razones de interés nacional así lo impongan y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a) El cónyuge deberá tener ocho años en el ejercicio de la ciudadanía argentina;
- b) El cónyuge debe haber residido en la República durante ocho años, ya sea en forma continua o discontinua.

Art. 95. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que desempeñan funciones en el exterior conservarán su domicilio legal en la República.

Art. 96. — El jefe de la Misión Diplomática permanente será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado y, en virtud de tal investidura, les serán subordinados jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal.

CAPÍTULO XIII

Del personal administrativo, técnico, profesional y de servicios generales

Art. 97. — El personal administrativo, técnico, profesional, y de servicios generales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mientras preste servicios en las representaciones diplomáticas y consulares de la República, tendrá

el rango, los derechos y obligaciones establecidos en esta ley para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, dentro de las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 98. — Al personal administrativo, técnico, profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior, se le asignará rango diplomático entre las categorías G y E del Servicio Exterior de la Nación, según su categoría administrativa.

CAPÍTULO XIV

Del Ceremonial del Estado

Art. 99. — Dependiente directamente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto funcionará el Ceremonial del Estado, organismo único de gestión protocolar de carácter nacional, que estará a cargo del jefe superior del Ceremonial del Estado, con categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario.

La reglamentación establecerá la forma de su integración, funciones y competencia.

CAPÍTULO XV

De las disposiciones transitorias

Art. 100. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se encuentren en actividad a la fecha de publicación de la presente, así como también todos aquellos reincorporados, designados o nombrados de conformidad con las leyes 20.508, 20.549 y 20.713, con excepción de los que fueran designados de acuerdo con los artículos 5º, 9º y 10 de esta ley, formarán parte integrante del cuerpo permanente activo.

El régimen de estabilidad consagrado por esta ley, no deroga los efectos de la ley 20.713 durante el término de su vigencia.

Art. 101. — Establécese que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que actualmente revistan en la categoría B, ministros plenipotenciarios, y que pasaron a integrarla por o durante la vigencia del decreto ley 19.300/71, ya sea por pertenecer entonces a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase o por promoción, respectivamente, revistarán, a partir de la publicación de la presente ley, en la categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase. El resto pasará a integrar la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase.

Art. 102. — Previo a la aplicación de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), la junta calificadora procederá, dentro de los noventa días desde la publicación de la presente ley, a proponer, en base a sus antecedentes y demás elementos de juicio, el reescalafonamiento, por esta única vez, de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados en sus ascensos sin que mediaren justificativos para esa postergación.

Art. 103. — Como caso de excepción, a efectos de reorganizar adecuadamente el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, facúltase, por esta única vez, al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para que, por un período de ocho meses a partir de la publicación de la presente ley, pueda efectuar promociones siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16.

Art. 104. — Dentro de los ciento ochenta días de publicación de la presente ley, el Ministerio de Bienestar Social, de común acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estudiarán un régimen previsional para el personal del Servicio Exterior de la Nación, que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que presta el mismo.

Art. 105. — Los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales, adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los treinta días de la publicación de la presente.

Igualmente, en el plazo y forma que establezca la reglamentación, quedarán disueltas las oficinas de Ceremonial o de Audiencias Diplomáticas de todas las dependencias del Estado nacional, las que transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para facilitar la gestión del Ceremonial de Estado mencionado en el artículo 99, los créditos existentes en sus respectivos presupuestos destinados a la atención de gastos protocolares.

Art. 106. — La reglamentación de la presente ley será dictada por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dentro de los noventa días de la fecha de su publicación y teniendo en cuenta lo establecido en la ley 20.615 (artículo 30, inciso 5). Hasta tanto se concrete esa medida, regirán las disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto 5.182 del 24 de febrero de 1948 y sus modificaciones, en cuanto sean aplicables a la presente.

Art. 107. — Dentro de los noventa días de la publicación de la presente ley, será puesto en vigencia el estatuto a que se refiere el artículo 9º, el que deberá ser confeccionado por una comisión integrada por tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y tres representantes designados por la Confederación General del Trabajo.

Art. 108. — Derógase el decreto ley 19.300/71 y todas las otras disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 109. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTECEDENTE

Sanción del Honorable Senado

(6/7 de junio de 1974)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

De su integración

Artículo 1º—La presente ley se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación, integrado por los funcionarios que forman el plantel permanente activo, en jubilación o retiro y aquellos que no perteneciendo al mismo sean designados con arreglo a lo establecido en los artículos 5º, 9º y 10 de la presente ley.

Art. 2º—El Servicio Exterior de la Nación estará integrado por:

- a) El Cuerpo Permanente Activo, constituido por los funcionarios con estado diplomático en actividad que se desempeñan indistintamente en funciones diplomáticas, consulares y en la Cancillería, y por aquellos que ingresen al servicio exterior conforme a las disposiciones de la presente ley;
- b) El Cuerpo Permanente Pasivo en jubilación o retiro, constituido por los funcionarios que posean estado diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente hubieran cesado de revistar en actividad conforme al régimen de jubilación que les haya sido aplicado;
- c) El Servicio de Agregados Laborales, constituido por el personal adscrito al Servicio Exterior de la Nación propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo, conforme con las disposiciones del artículo 10 y que hayan aprobado los cursos especiales de capacitación que a tal efecto se dictarán en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, según las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

CAPÍTULO II

De los funcionarios del Servicio Exterior

Art. 3º—El personal que integra el cuadro del Servicio Exterior de la Nación comprende las categorías siguientes:

- A) Embajador extraordinario y plenipotenciario.
- B) Ministro plenipotenciario de primera clase.
- C) Ministro plenipotenciario de segunda clase.
- D) Consejero de embajada y cónsul general.
- E) Secretario de embajada y cónsul de primera clase.
- F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase.
- G) Secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

Art. 4º—El personal del Servicio Exterior de la Nación desempeñará indistintamente funciones en las misiones diplomáticas, en las representaciones consulares y en la Cancillería, conforme al sistema de rotación que se determine.

Art. 5º—El Poder Ejecutivo podrá, excepcionalmente, designar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al

cuerpo permanente activo o pasivo del Servicio Exterior de la Nación, posean antecedentes relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la Nación que lo haya efectuado. Las designaciones previstas en el presente artículo no podrán superar el treinta por ciento del total de cargos que existan en la categoría A del escalafón.

Art. 6º—El Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, para la realización de cometidos especiales y concretos y mientras duren los mismos.

La asignación de categoría diplomática en rangos inferiores podrá ser efectuada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto a los efectos protocolares.

Art. 7º—El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá asignar a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación la categoría inmediata superior a la que posean, al solo efecto del rango protocolar y para la realización de cometidos especiales y concretos, con excepción de los funcionarios de las categorías B y C en el caso previsto en el artículo siguiente.

Art. 8º—La jefatura de las Misiones Diplomáticas será desempeñada por funcionarios de la categoría A. Los funcionarios de las categorías B y C podrán ser acreditados temporalmente como jefes de misión con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior jerarquía cuando esas razones desaparezcan. En el caso que fuere necesaria la designación de encargados de negocios *ad interim*, ella deberá recaer en el funcionario de la representación, perteneciente al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, que siga en categoría y antigüedad en el grado al jefe de misión.

Este mismo criterio será aplicable para el reemplazo de los jefes de las oficinas consulares.

Art. 9º—El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá designar agregados y/o adscritos especializados a las misiones diplomáticas, con la conformidad o a requerimiento de la Presidencia de la Nación o de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos. Igualmente y a requerimiento del Ministerio de Economía podrá destinar a las misiones diplomáticas a los funcionarios del Servicio Económico Comercial Exterior, también con afectación a su respectivo presupuesto.

Los agregados especializados dependerán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los pertenecientes a las fuerzas armadas mantendrán dependencia directa con sus organismos nacionales en cuanto se refiere a materias específicas de su arma, y los pertenecientes al Servicio Económico Comercial Exterior mantendrán dependencia del Ministerio de Economía, en cuanto se refiere a materias específicas de su función. Las instrucciones que reciban, antes de ser ejecutadas, deberán ser puestas en conocimiento del jefe de la misión diplomática a los efectos de mantener la coordinación indispensable y la conducción única en los asuntos internacionales.

Los agregados y/o adscritos así designados, inclusive los de las fuerzas armadas y del Servicio Económico Comercial Exterior, formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de misión.

Por vía reglamentaria se establecerá el orden del rango protocolar que debe adjudicarse a los agregados

especializados y laborales, a quienes les serán reconocidos todos los derechos referidos a los funcionarios del cuerpo profesional activo.

Art. 10. — Institúyese en forma orgánica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con carácter de adscrito al Servicio Exterior de la Nación, el Servicio de Agregados Laborales, que será regulado mediante el estatuto que se dicte al efecto.

Art. 11. — Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es indispensable:

- a) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad;
- b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- c) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente;
- d) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable;
- e) Poseer el funcionario y su cónyuge condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas;
- f) Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por naturalización;
- g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional;
- h) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su reglamentación.

INGRESO, PROMOCION Y EGRESO

Art. 12. — El ingreso, promoción y egreso de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación.

Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá designar o promover funcionarios para la categoría A, ad referendum de la Honorable Cámara de Senadores, e igualmente podrá promover funcionarios a las categorías B y C, en las mismas condiciones.

Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán desde el punto de vista presupuestario su cargo anterior interinamente, hasta tanto se otorgue el mismo por parte del Senado de la Nación.

Prestado el acuerdo, no se requerirá un nuevo pedido para ulteriores traslados del personal del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de las categorías A, B y C.

El funcionario cuyo acuerdo fuera rechazado volverá al mismo cargo que ocupaba en el Servicio Exterior de la Nación.

INGRESO

Art. 13. — La incorporación al cuadro permanente activo se efectuará exclusivamente por la categoría G, una vez aprobados la admisión al Instituto del Servicio Exterior de la Nación y los cursos correspondientes. Para ingresar al Instituto del Servicio Exterior, los candidatos deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 11, ser menores de 33 años de edad y poseer título universitario con validez nacional en disciplinas afines con la carrera.

Una vez admitidos en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación tendrán dedicación exclusiva en carácter de aspirantes y serán becados hasta su egreso.

Los aspirantes que aprobaran los cursos y reunieran los demás requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación y la del Instituto del Servicio Exterior

de la Nación, serán designados en el cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación e incorporados a la categoría G del escalafón, reconociéndoseles como antigüedad en la carrera el tiempo de permanencia en el instituto.

Quienes no aprobaran los cursos o los demás requisitos exigidos podrán presentarse nuevamente y por última vez siempre que continúen reuniendo las condiciones básicas requeridas, pudiendo reintegrarse al instituto, pero sin el derecho a ser becados en caso de ser readmitidos.

Los aspirantes quedan sujetos a las obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias establecidas en la presente ley en cuanto sean de aplicación a su calidad de aspirantes al Servicio Exterior de la Nación y de acuerdo con su reglamentación.

PROMOCIONES

Art. 14. — Anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del cuadro permanente en actividad que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos en la proporción que determine la reglamentación de acuerdo con las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse a la categoría inmediata superior.

Art. 15. — Las vacantes en la categoría A —embajador extraordinario y plenipotenciario— serán cubiertas normalmente por el Poder Ejecutivo, mediante el ascenso de los ministros plenipotenciarios de primera clase del cuadro permanente en actividad. Estos ascensos podrán ser realizados, si las condiciones del Servicio Exterior de la Nación así lo requieren, sin la periodicidad y plazos exigidos por los artículos 14 y 16, inciso b) de la presente ley.

Art. 16. — Son requisitos indispensables para el ascenso:

- a) Que existan vacantes en la categoría inmediata superior;
- b) Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías;
- c) Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — La junta calificadora deberá establecer el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos. En caso de que en alguna o en todas las categorías no existieran en el momento de la promoción el número de vacantes mínimas que establezca la reglamentación, se procederá de la siguiente forma:

El funcionario propuesto para el ascenso que no contara con la pertinente vacante, seguirá revistando en su categoría, pero con el rango que le hubiere correspondido por el ascenso, hasta tanto pueda ocupar la primera vacante que se produzca.

Durante todo este tiempo percibirá la retribución que corresponda a su cargo más un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su categoría y la inmediata superior.

La antigüedad cumplida en estas condiciones se considerará a todos sus efectos como correspondiente a la categoría inmediata superior.

EGRESOS

Art. 18. — Dejarán de pertenecer al cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11, previo asesoramiento de la junta calificadora;
- b) Los funcionarios de las categorías A, B y C que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación;
- c) Aquellos funcionarios a quienes se aplicara, a resulta de un sumario, la sanción de cesantía o exoneración o separados por razones ajenas a su voluntad;
- d) Los funcionarios que fueren pasibles de condena criminal, no comprendidos en el inciso c) del artículo 25 de la presente ley;
- e) Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaran los cursos dispuestos en el artículo 16, inciso c), de la presente ley;
- f) Los funcionarios de las categorías G a E que habiendo permanecido en sus rangos por un periodo de diez años fueren promovidos automáticamente a propuesta de la junta calificadora según el artículo 37, inciso f), y luego de haber tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango.

Los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la junta calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y que elevados sus pliegos hubieran sido aprobados por el Honorable Senado de la Nación, y luego de revistar por dos años en su nueva categoría.

Estas previsiones serán aplicables en ambos casos siempre que el funcionario no alcance el límite de edad establecido por el inciso siguiente;

- g) Los funcionarios que hubiesen alcanzado los siguientes límites de edad: setenta años en la categoría A; setenta y siete años en las categorías B y C, y sesenta y cinco años en las restantes categorías;
- h) Por renuncia expresa del funcionario;
- i) En los casos previstos en el artículo 52, segunda parte, de la presente ley.

CAPÍTULO III

Del estado diplomático

Art. 19. — El grado de cada funcionario del Servicio Exterior de la Nación con las funciones, los derechos, obligaciones y prohibiciones inherentes al mismo instituidos por la presente ley y su reglamentación constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley.

FUNCIONES

Art. 20. — Además de las obligaciones señaladas en el artículo 22, son funciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Representar a la Nación;
- b) Promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, velar por su prestigio y fomen-

tar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, y difundir su conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del superior gobierno de la Nación;

c) Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la Nación correspondieren a los escribanos públicos; su formalización tendrá plena validez en todo el territorio de la República.

Registrarán asimismo nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de hijos extramatrimoniales y todos los demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas cuando sean solicitados y/o sean de su conocimiento, para su posterior inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales pertinentes;

- d) Sin perjuicio de las facultades previstas en el inciso precedente, los jefes de misiones diplomáticas están autorizados, en casos de urgencia, a tomar juramentos o declaraciones de testigos residentes dentro de su jurisdicción, así como a autenticar cualquier acto notarial con las formalidades y condiciones exigidas por las leyes de la Nación para la validez de los instrumentos públicos. Los testimonios que expidan de dichos actos tendrán en la República el mismo valor que acuerden las leyes a los actos análogos debidamente autorizados.

DERECHOS

Art. 21. — Son derechos de los funcionarios en actividad del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que los reglamenten, sin perjuicio de otros establecidos en la legislación nacional:

- a) Usar el título y tratamiento que les acuerda su rango;
- b) Gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- c) No ser separados del Servicio Exterior de la Nación sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley;
- d) Percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que correspondan a la categoría y a la misión que les fuere encomendada, en orden a las exigencias de representación de su función, jerarquía, permanencia en el cargo y las distintas obligaciones emergentes de su estado civil;
- e) Percibir las retribuciones en concepto de compensación, por gastos de vivienda adecuada, subsidio familiar y escolaridad de sus hijos, conforme a las exigencias que determinen los países de destino;
- f) Percibir órdenes de pasaje anual exclusivamente para sus hijos cuando de conformidad con la educación deficitaria en el país de destino se vea obligado a desplazarlos a terceros países o a la República para mantener su educación;
- g) Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes;

- h) Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del Servicio Exterior de la Nación, y por lo tanto mantienen el uso de los atributos de su categoría;
- i) Requerir órdenes o instrucciones escritas del superior jerárquico, cuando por la naturaleza del asunto lo estime aconsejable;
- j) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos o insalubres, que se calificarán de «régimen especial», computándose doble dicho lapso a los efectos de la jubilación o retiro;
- k) Introducir libres de todo derecho y gravamen los bienes muebles de uso personal, de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyan el ajuar de su casa en el exterior, cuando sean trasladados a la República, dentro de un plazo no mayor de 200 días desde la fecha de su llegada al país. Este plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada, debiendo solicitarse tal ampliación dentro del lapso mencionado. De igual forma tendrán derecho a exportar libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles, inclusive los de industria nacional, de uso personal y de su familia, así como del personal de servicio, y los que constituyan el ajuar de su casa en ocasión de ser trasladados al exterior o adquiridos durante su permanencia en destino y reintroducírlos en iguales condiciones de exención de derechos y gravámenes cuando regresen a la República;
- l) Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus bienes muebles que hubieran sufrido, ellos o los miembros de su familia, por causa que no proviniere de negligencia o imprevisión del funcionario y en ocasión de sus funciones en el exterior, para lo cual deberán haber presentado previamente a la Cancillería el inventario de sus bienes muebles, sujeto a la reglamentación que se dicte al efecto;
- m) El uso del pasaporte diplomático por el funcionario y los miembros de su familia, incluidos los hijos menores de 18 años hasta su regreso a la República. Como asimismo el uso del pasaporte diplomático por parte del funcionario retirado o jubilado y su cónyuge o viuda;
- n) Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma o disposición que estimen inadecuada o medida disciplinaria que consideren injusta;
- ñ) Usar de las licencias ordinarias y extraordinarias;
- o) Sus derechohabientes recibirán los gastos de sepelio y en calidad de gastos de luto la cantidad prevista en los artículos 87, 88 y 89.

OBLIGACIONES

Art. 22. — Son obligaciones de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que las reglamentan y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos internacionales, los usos y las costumbres:

- a) Prestar juramento, antes de asumir sus tareas, de guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con sus

- obligaciones y deberes de funcionario del Servicio Exterior de la Nación en las condiciones estipuladas en las prescripciones de la presente ley y su reglamentación. La violación de este juramento hará pasible al funcionario de exoneración. El personal prestará juramento ante las autoridades superiores de acuerdo con lo que establezca la respectiva reglamentación;
- b) Desempeñar las funciones o misiones que se le encomendaren con eficiencia y dedicación;
- c) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir con las instrucciones, reglamentos, circulares y demás disposiciones que reciba;
- d) Promover el conocimiento del acervo nacional;
- e) Fomentar y estrechar las buenas relaciones con el país en que ejerce sus funciones;
- f) Defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación;
- g) Declarar bajo juramento los bienes que poseyeren y las modificaciones que experimentare su patrimonio;
- h) Prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses, de acuerdo con las normas pertinentes;
- i) Mantener cohesión permanente y espíritu de cuerpo en el servicio;
- j) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que recibiere;
- k) Preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial;
- l) Guardar absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejen de pertenecer al Servicio Exterior;
- m) Respetar el orden jurídico y las costumbres vigentes en el lugar de destino;
- n) Solicitar autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para contraer matrimonio;
- ñ) Observar una conducta pública y privada ajustada a la más estricta honorabilidad en su actuación social y económica;
- o) Mantener y perfeccionar los niveles de capacidad y eficiencia que exige el Servicio;
- p) Ser convocados cuando revistan en el Cuerpo Permanente Pasivo, si necesidades del servicio así lo aconsejan y continuar sujetos —salvo dispensa expresa— a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad;
- q) No abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia, hasta que la misma sea aceptada y se haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante o a quien corresponda, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

PROHIBICIONES

Art. 23. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior:

- a) Intervenir en la política del país extranjero en que desempeñen sus funciones;
- b) Ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero;
- c) Representar a firmas comerciales o intereses extranjeros en el país, o hacer gestiones en su favor;
- d) Percibir otras remuneraciones oficiales, en el ámbito federal, provincial o municipal, excepto

las referidas a la docencia universitaria, y siempre que ellas no dificulten la dedicación debida a su función específica;

- e) Prestar servicios en el país extranjero del que fuera originario su cónyuge, con la excepción prevista en el artículo 94 de la presente ley;
- f) Los funcionarios del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, que pasen a situación de retiro o jubilación, así como también los funcionarios mencionados en los artículos 5º, 9º y 10 de la presente ley, no podrán formar parte de directorios ni ejercer ningún tipo de comercio o funciones de carácter honorario o remuneradas relacionadas con empresas de intereses extranjeros;
- g) Que su cónyuge y/o las personas a su cargo desempeñen tareas, remuneradas o no, en el país extranjero donde estuvieren destinados;
- h) Hacer uso indebido de documentos o noticias reservadas, confidenciales o secretas.

Art. 24. — Prohíbese a los funcionarios del servicio exterior, salvo autorización expresa:

- a) Asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales;
- b) Integrar comisiones con el propósito de asumir una actitud colectiva ante el gobierno del país de destino, salvo extrema gravedad y urgencia debidamente comprobadas;
- c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República;
- d) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino, prohibición que alcanza a la familia a su cargo;
- e) Ejercer la docencia, la que sólo se podrá autorizar en el ámbito universitario y siempre que no interfiera con la dedicación y eficiencia que debe a su función.

Art. 25. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa a dicho estado;
- b) Por las causas previstas en el artículo 18, inciso c) de la presente ley;
- c) Por condena criminal impuesta por delitos dolosos;
- d) Por presentarse en concurso civil o ser declarado fallido;
- e) Por la causal prevista en el artículo 41, inciso d) de la presente ley.

CAPÍTULO IV

Del Consejo Superior de Embajadores

Art. 26. — Créase un Consejo Superior de Embajadores, de carácter permanente, cuyas funciones serán asesorar al ministro en materia de política exterior y en los asuntos de especial relevancia que conciernen a la conducción general del ministerio.

Art. 27. — Los funcionarios de la categoría A del cuerpo permanente en actividad que hubieren cumplido 65 años pasarán a revistar automáticamente en la Cancillería para integrar el Consejo Superior de Embajadores, salvo la excepción prevista en el artículo 28.

Art. 28. — El límite de edad indicado en el artículo anterior podrá ser ampliado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en forma de excepción, en caso de que lo juzgue conveniente.

Art. 29. — Podrán por derecho integrar el Consejo Superior de Embajadores, los funcionarios de la categoría A del cuadro permanente en actividad que hayan revistado por lo menos 12 años en el cargo.

Art. 30. — Una vez integrado el Consejo Superior de Embajadores sus miembros podrán ser trasladados al exterior en misiones permanentes, previo dictamen de la junta calificadora, cuando razones de interés nacional así lo aconsejen, pero podrán cubrir también en cualquier momento misiones especiales concretas y transitorias.

Art. 31. — El consejo funcionará mediante salas que respondan a especialidades tales como:

- a) América latina;
- b) Organismos internacionales;
- c) Política económica exterior;
- d) Asuntos culturales;
- e) Asuntos consulares;
- f) Y aquellas que las necesidades de servicio aconsejen establecer en adelante.

Art. 32. — El número de integrantes será limitado y sujeto a la proporción que se establezca por reglamentación. El tiempo de permanencia de los funcionarios en el Consejo Superior de Embajadores será de tres años.

Art. 33. — Si al tiempo de constitución o renovación del consejo hubiese mayor número de embajadores en situación de revista en la Cancillería para acceder al mismo, se efectuará un sorteo. Los no favorecidos deberán acogerse a los beneficios del retiro o jubilación, salvo excepción debidamente fundada por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 34. — Los funcionarios integrantes del Consejo Superior de Embajadores dejarán de pertenecer automáticamente al mismo:

- a) Por renuncia al servicio activo;
- b) Al cumplir setenta años de edad;
- c) En caso de traslado al exterior o cese de funciones;
- d) Al finalizar el tercer año de su permanencia si no le fuera expresamente prorrogado el plazo por un nuevo período no superior a dos años;
- e) Por exigencias de la rotación o sorteo que corresponda efectuar entre sus miembros.

Art. 35. — El funcionamiento, forma de integración y misión asesora del Consejo Superior de Embajadores, serán establecidos por la reglamentación.

CAPÍTULO V

De la junta calificadora

Art. 36. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una junta calificadora de cinco miembros, presidida por el subsecretario que tenga a cargo la superintendencia de la administración del personal, e integrada por cuatro miembros en actividad con rango de embajador, escogidos por orden de precedencia entre quienes se encuentren en funciones en la Cancillería.

El director de Personal actuará como secretario asesor. Los cuatro embajadores se renovarán cada dos años.

Art. 37. — Serán funciones de la junta calificadora proponer y/o asesorar al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en:

- a) Lo referente a la selección de los aspirantes a ingresar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, promociones, traslados, disponibilidades, retiros, jubilaciones, aun las de oficio, aplicación de sanciones disciplinarias, y cualquier otra materia vinculada con el régimen de la presente ley que afecte la relación existente entre el Estado y los funcionarios que pertenezcan o hubieren pertenecido al Servicio Exterior de la Nación, así como también a los aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación;
- b) Los recursos a que dieren lugar las actuaciones mencionadas en el inciso a) anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso n) del artículo 21 de la presente ley;
- c) Lo referente a la integración del Consejo Superior de embajadores;
- d) Anualmente confeccionará el escalafón de los funcionarios del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación teniendo en cuenta la antigüedad en la carrera y en el grado. El escalafón será público;
- e) Materia de los dictámenes del Tribunal de Honor que le sean elevados;
- f) Propondrá la promoción automática de los funcionarios de las categorías G a E que no hayan ascendido en el término de diez años, y los de la categoría D que no lo hubieran hecho en doce años conforme con las previsiones del artículo 18, inciso f);
- g) Intervenir y asesorar en las cuestiones de su competencia referentes al personal administrativo técnico-profesional y de servicios generales.

Art. 38. — Todos los funcionarios que posean estado diplomático podrán ser sometidos a la jurisdicción de un tribunal de honor a fin de dejar debidamente aclarado si han ajustado su conducta a la honorabilidad inherente a su investidura. Los tribunales de honor se formarán:

- a) Por pedido de cualquier funcionario que lo considere necesario en salvaguardia de su reputación;
- b) Por pedido de dos funcionarios integrantes del Servicio Exterior de la Nación, cuando consideren que otro funcionario de la misma jerarquía ha incurrido en falta que, prima facie, haga aconsejable su formación;
- c) Por decisión directa del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto cuando considere que así corresponde.

Art. 39. — La solicitud pertinente deberá ser presentada directamente al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto. La formación del tribunal no podrá ser denegada; pero si en el caso del inciso b) del artículo precedente resultare temeraria o manifiestamente infundada, hará pasible al solicitante de pena grave.

Art. 40. — Cuando se constituye para juzgar la conducta de un embajador extraordinario y plenipotenciario, el tribunal de honor se integrará por tres funcionarios de esa jerarquía presididos por el de más antigüedad, y en caso de igual antigüedad, por el de mayor edad. En los demás casos se integrará por dos

funcionarios de igual jerarquía a la de aquel cuya conducta será motivo de juzgamiento de más antigüedad que él, presididos por otro funcionario de mayor jerarquía.

La función de miembro de los tribunales de honor es de inexcusable cumplimiento, pero no podrán ser designados para tales funciones quienes se hallen ligados por lazos de parentesco de cuarto grado por consanguinidad o segundo grado de afinidad entre sí o con respecto del denunciante o el imputado; los que hubieren intervenido en otro tribunal de honor, en carácter de denunciados por el acusado o denunciante contra el mismo; quienes tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el acusado o denunciante, o quienes hayan tenido participación en los hechos de modo que no estén en condiciones de pronunciarse libremente.

Art. 41. — Los tribunales de honor procederán sumariamente y en forma reservada, debiendo labrar actas de sus reuniones y encuadrar su actuación en el respeto de la garantía constitucional del derecho de defensa. Sus decisiones deberán notificarse por escrito a los interesados bajo pena de nulidad y serán inapelables. La resolución que dicten dispondrá:

- a) El sobreseimiento del imputado, si no hubiere mérito para su condena;
- b) Hacer saber el desagrado del tribunal por la conducta del imputado por los hechos que han llevado a su formación, aunque no constituya falta punible;
- c) Apercibir al imputado con prevención de aconsejarse su destitución si la falta fuere leve;
- d) Aconsejar la pérdida del estado diplomático si la falta cometida lesiona el prestigio del Servicio Exterior de la Nación.

En todos los casos se dejará constancia testimoniada del fallo del tribunal de honor en el legajo personal del imputado, dándose intervención a la junta calificadora para su conocimiento y a efectos de que se adopten las medidas que correspondiere según la decisión del tribunal.

CALIFICACIONES

Art. 42. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con excepción de los pertenecientes a la categoría A, serán calificados anualmente por sus superiores jerárquicos. Todo funcionario tiene la obligación de calificar a sus subordinados inmediatos cuando éstos se hayan desempeñado a sus órdenes durante un lapso no menor de cuatro meses.

El informe de calificación será secreto y estará destinado a reflejar la forma en que se hayan desempeñado durante un período determinado, apreciando sus cualidades y de acuerdo a lo que determine la reglamentación de la presente ley.

CAPÍTULO VI

Del régimen disciplinario

Art. 43. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en los casos de negligencia, indisciplina o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Las transgresiones por parte de los funcionarios de la categoría A a las normas y preceptos emergentes de la presente ley, así como también a la conducta ética y moral ejemplar que deben observar constantemente, será severamente sancionada de acuerdo con

el grado de importancia de la transgresión cometida, previa intervención de la junta calificadora y/o tribunal de honor. Esta intervención tendrá lugar mediante disposición expresa del ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que se instruya el correspondiente sumario.

Las sanciones a que dé lugar el sumario podrán ser:

1. Retiro obligatorio.
2. Cesantía o exoneración, previo acuerdo de remoción por parte del Honorable Senado de la Nación.

Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación comprendidos en las categorías B a G, podrán ser objeto de las medidas disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento escrito;
- c) Suspensión;
- d) Disponibilidad;
- e) Cesantía;
- f) Exoneración.

Para su aplicación se tendrá en cuenta el carácter y la importancia del hecho cometido, el daño originado y los antecedentes del inculcado.

Art. 44. — Las medidas disciplinarias serán aplicadas por las siguientes autoridades:

- a) Apercibimiento verbal o escrito, por el superior jerárquico;
- b) Suspensión hasta cinco días, por el jefe de misión diplomática o consular, como asimismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- c) Suspensión hasta diez días, por resolución del subsecretario con superintendencia sobre asuntos de personal a requerimiento del jefe de misión diplomática o de la representación consular, como asimismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- d) Suspensión de diez a noventa días y la disponibilidad por resolución ministerial.

Toda medida disciplinaria será comunicada de inmediato al organismo encargado del personal, y por éste a la junta calificadora.

Art. 45. — No se impondrá la suspensión de funciones por más de treinta días ni las medidas disciplinarias indicadas en los incisos d), e) y f) del artículo 43 sin previa instrucción de un sumario administrativo.

La reglamentación determinará las normas necesarias para garantizar la defensa del funcionario sumariado.

Art. 46. — Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al imputado de sus funciones se podrá disponer la suspensión preventiva por un período no mayor de 90 días.

Art. 47. — Cuando el funcionario estuviere procesado criminalmente por un delito doloso cuya gravedad requiera apartar previamente al imputado de sus funciones, y en el caso en que la substanciación del proceso criminal supere al plazo establecido en el artículo precedente, dicho plazo será ampliado hasta el momento en que quede consentida la sentencia.

Art. 48. — Los sumarios se iniciarán por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO VII

De la disponibilidad

Art. 49. — Los funcionarios podrán ser declarados en disponibilidad:

- a) A su solicitud, por razones particulares, cuando tuvieren más de cinco años en el Servicio Exterior de la Nación, en cuyo caso queda en suspenso la prohibición establecida en el artículo 23, inciso b), siempre que las actividades a que se refiere el mismo no sean gestiones de intereses extranjeros;
- b) Cuando la licencia por lesión o enfermedad contraída por causa o en ocasión de sus funciones exceda los períodos de dos años con el 100 % de sus haberes y el año de extensión con el 50 % previsto por la legislación general previsional de la Nación;
- c) Los que desempeñaren funciones electivas mientras durase su mandato;
- d) Si hubieren sido designados en un organismo nacional, provincial o municipal;
- e) Si hubieren sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República;
- f) Por aplicación de la sanción prevista en el inciso d) del artículo 43, en cuyo caso no podrá exceder de un año.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto podrá, por razones de servicio, disponer el pase a disponibilidad de los funcionarios de la categoría A, por un período de hasta dos años en la forma que determine la reglamentación.

Art. 50. — En el caso de los incisos a) y b) del artículo anterior, la disponibilidad tendrá en su totalidad o fraccionadamente una duración máxima de un año. En el caso del inciso d), el funcionario podrá solicitar una prórroga no mayor de un año sobre el plazo máximo fijado para el inciso a) o por el período que dure el desempeño de la designación, siempre que ésta, justificadamente, responda a un alto interés nacional. En el caso del inciso e), la disponibilidad se otorgará por dos años, pudiendo extenderse a cuatro a solicitud del interesado, siempre que el ministro juzgue que la designación responde a intereses del Estado.

Art. 51. — El tiempo transcurrido en disponibilidad conforme al inciso b) del artículo 49 será computado a los fines del ascenso. En los demás casos dicho lapso no será computado.

El tiempo transcurrido en todos los casos de disponibilidad previsto en el artículo 49, excepto el del inciso a), será computado a los fines del retiro o jubilación.

Art. 52. — La disponibilidad será ordenada por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, excepto la prevista por el artículo 43, inciso d), que será dispuesta por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto basado en dictamen de la junta calificadora.

Si el funcionario, al vencer los plazos previstos en el artículo 50, no hubiere solicitado su reincorporación o una prórroga en el caso que corresponda, se decretará su cesantía.

Art. 53. — Los funcionarios declarados en disponibilidad en virtud del artículo 49 no percibirán sueldo alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-

to hasta la fecha de reintegro a sus funciones, salvo los casos del inciso a) en que recibirán el 25 % de sus haberes; del inciso b), en que se les retribuirá conforme el mismo lo prevé y de la impuesta por razones de servicio a los funcionarios de la categoría A en que se les abonará el 50 % de su remuneración.

Tanto la disponibilidad por razones de servicio como la impuesta de acuerdo al artículo 43, inciso d), no podrá ser aplicada sin previo traslado a la República del funcionario que se encontrare en el extranjero y su reintegro al servicio se producirá automáticamente al cumplirse el término de la disponibilidad determinada, el que será improrrogable.

CAPÍTULO VIII

De los traslados

Art. 54. — Todos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación están sujetos a ser trasladados.

Todo traslado será dispuesto por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y deberá ser cumplido como orden de servicio.

A los efectos de la aplicación de la presente ley y su reglamentación se entiende por traslado, el pase de un país a otro y, dentro del mismo país, de una ciudad a otra.

El funcionario tendrá un plazo de treinta días continuos para emprender viaje, a contar del día siguiente al de su notificación. Este plazo podrá ser modificado por disposición ministerial cuando necesidades de servicio así lo requieran.

Art. 55. — Los funcionarios de las categorías D a G deberán prestar funciones en forma alternada por los periodos siguientes:

- a) Dos años consecutivos como mínimo y cuatro como máximo durante su permanencia en la República;
- b) Cuatro años consecutivos durante su permanencia en el exterior.

El límite máximo de a) y el término de b) podrán prolongarse o acortarse por el periodo de un año por resolución fundada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 56. — Obligación de servir en América latina y en funciones consulares:

- a) Será obligación de todo funcionario en el transcurso de su carrera servir en dos oportunidades como mínimo en países de América latina;
- b) De igual forma será obligación prestar servicios, como mínimo en dos oportunidades en funciones consulares, tanto en la Cancillería como en el exterior.

Antes de disponer el traslado de un funcionario, la junta calificadora tendrá en cuenta esta circunstancia a fin de proponer el destino en forma prioritaria para cubrir países de América latina con los funcionarios mejor calificados.

Art. 57. — Los funcionarios del servicio exterior destinados por primera vez a un cargo permanente en una misión diplomática o consular, independientemente de los gastos de embalaje y flete, recibirán en esa única oportunidad para gastos de instalación, con el coeficiente correspondiente al país de destino, el importe igual a dos meses de retribución si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si en el momento de iniciar el viaje estuvieran casados. Esta

última asignación también la recibirán los viudos y los solteros que deban atender las necesidades de los miembros de su familia conforme lo determina el artículo 92, siempre que los familiares a su cargo viajen con él.

Art. 58. — Cuando los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con familiares a su cargo sean trasladados percibirán, antes de emprender viaje, para compensar los gastos de instalación, la suma equivalente a dos meses de retribución —uno si se tratase de solteros o viudos sin hijos—, calculada conforme al país de coeficiente más favorable, así como los gastos de embalaje y flete, salvo que el traslado fuese dentro de la misma ciudad. Al pasar a prestar servicios a la Cancillería se aplicará para los gastos de instalación el coeficiente del país de su anterior destino.

Art. 59. — En el caso de que un funcionario sea trasladado al país para dejar de pertenecer al servicio exterior, ya sea por jubilación, retiro u otra causa, le corresponderán todos los derechos inherentes al traslado en los siguientes casos:

- a) Cuando hayan sido designados en virtud de los artículos 5º, 9º, 10 o sean de aplicación los incisos f), g) y h) del artículo 18;
- b) Cuando el funcionario solicitare la disponibilidad de conformidad con el artículo 49, inciso b).

En caso de que la cesación de funciones en el exterior sea consecuencia de la pérdida del estado diplomático, el funcionario tendrá derecho, dentro del plazo que fije la reglamentación, a los pasajes para él, su familia y el empleado personal previsto en el artículo 61, así como a los gastos de embalaje y flete.

Art. 60. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que deban viajar en cumplimiento de un traslado recibirán los pasajes correspondientes para ellos y los miembros de su familia. Cuando se tratase de una misión especial o comisión de servicio de la República al extranjero el funcionario podrá requerir un pasaje más para su cónyuge si debiera permanecer fuera de su destino permanente más de 45 días. El plazo será de quince días cuando se trate de comisiones de servicio entre países extranjeros.

Art. 61. — Los funcionarios de las categorías A, B y C en todos los casos, y los de las restantes categorías que tuvieran por lo menos un hijo menor de 12 años, tendrán derecho a un pasaje para un empleado personal.

Art. 62. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación podrán ser llamados en comisión a la República por razones de servicio, mediante resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y por el plazo que fije la reglamentación. En tales desplazamientos, durante su permanencia en la República, los viáticos serán liquidados sin el coeficiente del país de destino, y en la forma que establezca la reglamentación.

CAPÍTULO IX

De los haberes y asignaciones

Art. 63. — Los haberes, asignaciones, suplementos y gastos previstos en la presente ley que correspondan al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las representaciones diplomáticas y consulares, serán liquidados y abonados por trimestre anticipado y, en el exterior, desde la fecha de partida en la divisa que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará o reajustará el Poder Ejecutivo, siempre que la ley no disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se aplicará al sueldo anual complementario.

La reglamentación establecerá la asignación con coeficiente que, en concepto de salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el exterior.

Cuando pasen a prestar servicios a la Cancillería, se liquidarán sus haberes con el coeficiente del anterior destino, hasta la llegada a la República.

Cuando se desempeñaren en cargos superiores en la Cancillería recibirán una suma que nunca podrá ser superior al índice de equivalencia del veinticinco por ciento del sueldo mensual, para atender gastos de representación con la obligación de rendir cuenta detallada de la inversión conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 64. — Los funcionarios de las categorías B y C que de acuerdo con el artículo 8º fuesen acreditados como jefe de misión con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario percibirán, mientras se desempeñen como tales, un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su propia remuneración y la que correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 65. — Los encargados de negocios *ad interim* recibirán desde el momento en que invistan ese carácter y por el término del interinato un sobresueldo por responsabilidad de funciones, equivalente al 20 % de la remuneración que le correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 66. — Todo funcionario del Servicio Exterior de la Nación que estuviere acreditado ante varios gobiernos podrá solicitar el reintegro de los gastos de representación y de oficina en que incurriera con motivo de sus funciones concurrentes, y percibirá los viáticos correspondientes a los períodos en que deba permanecer en los países en que no tuviere su residencia habitual.

Asimismo se le otorgarán las órdenes de pasajes pertinentes.

Art. 67. — El funcionario que en virtud de usos o de exigencias transitorias de servicio deba trasladarse a otra ciudad, dentro del mismo país, podrá modificar su residencia previa autorización del ministerio.

En ese caso, recibirá una retribución extraordinaria equivalente a la tercera parte de su remuneración total y se le otorgarán pasajes para él y para su familia.

Art. 68. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que fueren designados para el desempeño de misiones especiales u otras comisiones de servicio tendrán derecho a pasajes y a los viáticos que fijará la respectiva reglamentación.

Cuando para el cumplimiento de dicho cometido deban desplazarse desde el ministerio y la permanencia en el exterior exceda de treinta días recibirán, en substitución de los viáticos, la remuneración que percibiría el funcionario de igual categoría en el país donde desempeñará su misión. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá anticiparles los viáticos o remuneración que corresponda y las órdenes de pasajes, así como también en caso necesario una suma para gastos de representación con cargo a rendir cuenta.

Las personas que el Poder Ejecutivo designe para el desempeño de misiones especiales ante gobiernos extranjeros o en congresos, conferencias y reuniones

internacionales, así como los miembros que integren las delegaciones, recibirán los pasajes, los viáticos y gastos de representación que se determinarán en cada caso.

Art. 69. — Las representaciones diplomáticas y consulares recibirán los gastos de representación que para cada una de ellas determine anualmente el ministerio, conforme a las exigencias propias de su función.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares, para las rendiciones de cuentas de dicha partida, teniendo presente que esos gastos no se asignan con carácter personal al jefe de misión sino que tienen como objeto atender los compromisos protocolares oficiales de todos los funcionarios de la representación.

Art. 70. — En los países en que la embajada no posea para residencia del jefe de misión diplomática una propiedad del Estado, se destinará, con cargo a rendir cuenta, la suma necesaria para su arrendamiento y se determinarán, también anualmente, las partidas destinadas a las representaciones diplomáticas y consulares para alquiler de sus oficinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares en el arrendamiento de inmuebles a fin de que los contratos de locación que subscriban *ad referendum* puedan ser ratificados de oficio por el ministerio.

Art. 71. — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determinará anualmente los gastos e inversiones que demande el funcionamiento de cada misión diplomática y oficina consular, y establecerá en la forma que determine la reglamentación el presupuesto de dichas partidas.

Art. 72. — A fin de determinar las sumas que corresponda asignar en virtud de los artículos 69, 70 y 71, las representaciones diplomáticas y consulares elevarán anualmente al ministerio, en el plazo y forma que determine la reglamentación, el presupuesto detallado de sus necesidades.

CAPÍTULO X

Del régimen de licencias

Art. 73. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes licencias:

- a) Ordinaria anual de treinta y cinco días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- b) Licencia especial de 35 días corridos para ser utilizados en la República luego de cada 2 años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración total con coeficiente y las órdenes de pasaje para el funcionario y su familia. Esta licencia excluye, durante el año en que sea acordada, el derecho a lo previsto en el inciso anterior;
- c) Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se concederán conforme a las normas que rigen. En el caso de que corresponda percibir haberes, serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;

- d) Semestral de 20 días para los funcionarios destacadados en los países denominados de régimen especial de acuerdo al artículo 21, inciso j), y que serán otorgadas según las circunstancias lo exijan;
- e) Extraordinaria, que no podrá exceder de 3 meses cada 5 años y que interrumpe el plazo para gozar de la licencia de los incisos b) y d), y excluye durante el año en que sea acordada el derecho a la licencia del inciso a). Esta licencia será otorgada al 50 por ciento del haber y sin coeficiente.

Las licencias ordinarias deberán ser usadas en el año calendario correspondiente caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas. Solamente por razones de servicio y autorizado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto podrán usarse al año siguiente.

CAPÍTULO XI

De las jubilaciones, retiros y pensiones

Art. 74. — El régimen de previsión aplicable a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación estará integrado por las normas generales establecidas para los agentes de la administración pública nacional, y las normas específicas referidas a ellos que modifiquen aquéllas.

Art. 75. — La prestación de servicios en los destinos indicados en el artículo 21, inciso j), será computada doble a los efectos del retiro o jubilación, si así lo solicitare el interesado.

Art. 76. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del artículo 18 estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, podrán ser jubilados de oficio.

Art. 77. — Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de 20 años en la administración pública, de los cuales 15 como mínimo computables en el Servicio Exterior de la Nación, y hubieren cesado en sus funciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la presente ley, tendrán derecho al haber de retiro, siempre que no hubieren percibido ningún tipo de indemnización, en razón del cese de funciones y en su caso la reintegrarán.

Art. 78. — Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un haber de retiro mensual equivalente al 2,5 % de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicio computable para el retiro. Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario tenga 60 años de edad, si estuviere entonces en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y hasta los 65 años en caso contrario.

Art. 79. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se acogieren a los beneficios de la jubilación o fueren jubilados de oficio de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, desde el momento en que dejaren de pertenecer al cuadro permanente en actividad y hasta que obtuvieren el beneficio de la caja respectiva, percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un anticipo de jubilación equivalente al 70 % del que presumiblemente les co-

rrespondiere, calculado sobre los importes que por todo concepto hubieren constituido su última retribución, excluidos asignación familiar y viáticos sujetos a rendición de cuentas. La liquidación será efectuada por el ministerio previa acreditación por parte del interesado de haber iniciado el trámite jubilatorio ante la caja, y se computará como pago a cuenta del haber jubilatorio, deduciéndose de la retroactividad que se acumulare. Si el monto de los anticipos excediere de la retroactividad a percibir, la diferencia será deducida por la caja de los haberes del beneficiario mediante un descuento que no podrá exceder del 20 % del importe mensual de los mismos. El ministerio deberá comunicar que efectúa el anticipo a la caja, la que a su vez le hará saber la fecha en que comience el pago de los haberes jubilatorios. En el caso de que en definitiva no se acordare la jubilación por la caja, el ministerio formulará los cargos de reintegro correspondientes.

CAPÍTULO XII

Del Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Art. 80. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tendrá las funciones y atribuciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Art. 81. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación tiene por misión fundamental desarrollar la capacidad vocacional del aspirante y es eminentemente formativo de los principios éticos y morales que informan la conducta de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 82. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación complementa su cometido con sujeción a la misión señalada en el artículo anterior, mediante:

- a) La selección y preparación de los aspirantes al ingreso, según lo dispone el artículo 13;
- b) La capacitación profesional técnica y práctica de los aspirantes, así como también de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación conforme lo exige el inciso c) del artículo 16;
- c) El cumplimiento de todas las actividades docentes y de investigación que determine la reglamentación.

Art. 83. — La dirección del Instituto del Servicio Exterior de la Nación estará a cargo de un funcionario con rango de embajador del cuadro permanente del Servicio Exterior de la Nación.

CAPÍTULO XIII

De las disposiciones generales

Art. 84. — Cuando los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación serán elegidos entre los de la categoría A.

Art. 85. — Queda prohibida toda designación honoraria en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 86. — Cuando un funcionario del Servicio Exterior de la Nación se lesionara o contrajera alguna enfermedad por causa o en ocasión de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de asistencia médica, internación y medicamentos, sin perjuicio del retiro o jubilación que pudiera corresponderle.

Art. 87. — En caso de fallecimiento de un funcionario del Servicio Exterior de la Nación mientras estuviese destinado en el extranjero, el Estado se hará cargo de la repatriación de los restos del extinto hasta el domicilio fijado en la República por su familia y de los siguientes gastos:

- a) De acondicionamiento y sepelio;
- b) De los pasajes de regreso a la República de los miembros de su familia y del empleado previsto en el artículo 61;
- c) De embalaje, fletes y acarreos que se originen como consecuencia del derecho acordado en el artículo 58.

Asimismo se reconocerá a la familia el derecho a los gastos de traslado que le hubieren correspondido al extinto.

Art. 88. — Cuando falleciere un miembro de la familia, el Estado repatriará los restos y se hará cargo de todos los gastos de acondicionamiento y traslado hasta el lugar en la República que determine el funcionario.

El Estado abonará, además, el pasaje de regreso de la o de las personas que acompañen los restos y otorgará al funcionario una licencia especial conforme se determine en la reglamentación de la presente ley.

Art. 89. — En caso de fallecimiento del funcionario en actividad mientras revista en Cancillería y del jubilado o retirado, sus derechohabientes percibirán gastos de sepelio y gastos de luto. Estos últimos serán equivalentes al pago de tres meses de remuneración para el activo y de dos meses de la prestación para el jubilado o retirado. Igual temperamento se aplicará para el caso de fallecimiento de un miembro de su familia, conforme con el artículo 92.

Art. 90. — Los títulos otorgados por universidades extranjeras o establecimientos de enseñanza de nivel primario, secundario o terciario a los funcionarios del servicio exterior destinados en el extranjero, así como a miembros de su familia, serán reconocidos en la República conforme con las reglamentaciones de las universidades nacionales o de los organismos de conducción de la enseñanza de los respectivos niveles. Si los interesados no hubieren terminado sus estudios en el exterior, las universidades nacionales o los respectivos organismos reconocerán la validez de los estudios hasta el último curso completo aprobado en el extranjero. Si los estudios seguidos no lo fueran por el sistema de cursos completos, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero que tengan su equivalente en el respectivo plan de estudios argentino. Igual criterio se seguirá si hubiera completado cursos en el extranjero, en el caso de que la correspondiente carrera esté organizada por materias en la República.

Art. 91. — Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazcan en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte de los padres

Art. 92. — Se entiende por familia a los fines de esta ley: el cónyuge, los hijos e hijastros menores de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas e hijastras solteras y los ascendientes de primer grado tanto del funcionario como del cónyuge, cuando aquél compruebe que subviene a sus necesidades.

Art. 93. — A partir de la sanción de la presente ley queda prohibido a los funcionarios del Servicio Exte-

rior de la Nación contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros que no hayan previamente obtenido su carta de ciudadanía.

Art. 94. — Únicamente se destinará un funcionario al país de origen del cónyuge cuando razones de interés nacional así lo impongan y siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

- a) El cónyuge deberá tener ocho años en el ejercicio de la ciudadanía argentina;
- b) El cónyuge debe haber residido en la República durante ocho años, ya sea en forma continua o discontinua.

Art. 95. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que desempeñen funciones en el exterior conservarán su domicilio legal en la República.

Art. 96. — El jefe de la misión diplomática permanente será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado y, en virtud de tal investidura, le serán subordinadas jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

CAPÍTULO XIV

Del personal administrativo técnico profesional y de servicios generales

Art. 97. — El personal administrativo técnico profesional y de servicios generales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mientras preste servicios en las representaciones diplomáticas y consulares de la República, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en esta ley para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, dentro de las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 98. — Al personal administrativo técnico profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior, se le asignará rango de secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

CAPÍTULO XV

Del ceremonial del Estado

Art. 99. — Dependiente directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, funcionará el Ceremonial del Estado, organismo único de la gestión protocolar de carácter nacional, que estará a cargo del jefe superior del Ceremonial del Estado con categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario

La reglamentación establecerá la forma de su integración, funciones y competencia.

CAPÍTULO XVI

De las disposiciones transitorias

Art. 100. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se encuentren en actividad a la fecha de vigencia de la presente así como también todos aquellos reincorporados, designados o nombrados de conformidad con las leyes 20.508 y 20.549, con excepción de los que fueren designados de acuerdo con el artículo 5º de esta ley, formarán parte integrante del cuadro permanente activo, una vez que cese la vigencia de la ley 20.549.

Art. 101. — Establécese que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que actualmente revistan en la categoría B ministros plenipotenciarios, y que pasaron a integrarla por o durante la vigencia del decreto ley 19.300/71 ya sea por pertenecer entonces a la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase o por promoción respectivamente, revistarán, a partir de la promulgación de la presente ley, en la categoría C ministros plenipotenciarios de segunda clase. El resto pasará a integrar la categoría B ministros plenipotenciarios de primera clase.

Art. 102. — Previo a la aplicación de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso f), la junta calificadora procederá dentro de los noventa días desde la sanción de la presente ley, a proponer en base a sus antecedentes y demás elementos de juicio, el reescalafonamiento, por esta única vez, de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados en sus ascensos sin que mediaren justificativos para esa postergación.

Art. 103. — Como caso de excepción, a efectos de reorganizar adecuadamente el cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, facúltase por esta única vez al ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que, hasta el 31 de diciembre de 1974, pueda efectuar promociones, siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16.

Art. 104. — Dentro de los 180 días de promulgada la presente ley el Ministerio de Bienestar Social de común acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estudiará un régimen previsional para el personal del Servicio Exterior de la Nación, que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que preste el mismo.

Art. 105. — La disposición contenida en el inciso p) del artículo 22, regirá a partir de la fecha en que entre en vigencia el régimen a que se refiere el artículo 104.

Art. 106. — Los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los 30 días de la promulgación de la presente.

Igualmente, en el plazo y forma que establezca la reglamentación, quedarán disueltas las oficinas de Ceremonial o de Audiencias Diplomáticas de todas las dependencias del Estado nacional, las que transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para facilitar la gestión del Ceremonial del Estado mencionado en el artículo 99, los créditos existentes en sus respectivos presupuestos destinados a la atención de gastos protocolares.

Art. 107. — La reglamentación de la presente ley será dictada por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dentro de los noventa días de la fecha de su publicación. Hasta tanto se concrete esa medida, regirán las disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto 5.182 del 24 de febrero de 1948 y sus modificaciones, en cuanto sean aplicables a la presente.

Art. 108. — Derógase el decreto ley 19.300/71 y todas las otras disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 109. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Evans). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Luder. — Señor presidente: el 6 de junio de 1974 este honorable cuerpo trató el proyecto de ley del Servicio Exterior de la Nación en un amplio debate. Por esa razón he preferido agregar al dictamen de la comisión un informe escrito, con el propósito de que los señores senadores lo conocieran con la debida antelación.

No obstante ello, creo adecuado agregar algunas consideraciones con respecto al trámite legislativo de este proyecto de ley, que se debe a una iniciativa del Poder Ejecutivo, que por tres veces consecutivas remitió el pertinente mensaje y proyecto eligiendo en las tres oportunidades al Honorable Senado como Cámara iniciadora.

El primer proyecto tuvo entrada en este cuerpo el 11 de marzo de 1974 y fue tratado, como he dicho, en la sesión del 6 de junio, remitiéndose a la Honorable Cámara de Diputados para su consideración. La Cámara revisora recién lo trató en las sesiones de los días 7 y 8 de mayo del corriente año, es decir, prácticamente un año después de la sanción del Senado.

En ese ínterin, entre la sanción del Senado y la de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cambió parcialmente de opinión con respecto al proyecto de ley, y dio testimonio de este cambio a través de dos proyectos idénticos que remitió también al Senado, uno de ellos el 17 de diciembre de 1974, durante las sesiones extraordinarias, y el otro, el 2 de mayo de este año, al iniciarse el período ordinario. El proyecto remitido el 17 de diciembre del año pasado no fue posible considerarlo porque el Poder Ejecutivo retiró los asuntos de la convocatoria a sesiones extraordinarias y levantó dicha convocatoria. El proyecto que entró el 2 de mayo a este cuerpo, llegó cuando ya la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Labor Parlamentaria, había anunciado el tratamiento del proyecto de ley de servicio exterior para el 7 de mayo.

Cabe señalar, además, que el dictamen de la comisión de la Honorable Cámara de Diputados coincidía, literalmente, con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, enviado en diciembre de 1974 y reiterado el 2 de mayo de este año. Es decir que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado se encontró frente a dos proyectos idénticos: la sanción de la Cámara de Diputados efectuada en la sesión del 7 y 8 de mayo de este año, y el proyecto del Poder Ejecutivo remitido el 2 de mayo.

Tratándose de dos proyectos idénticos, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto optó por considerar la sanción de la Cámara de Diputados, por razones de economía de procedimiento legislativo, para evitar de esa manera dilaciones innecesarias. Si se trata el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados en esta reunión de hoy, si este cuerpo acepta las modificaciones que aconseja la comisión, dicho proyecto puede quedar convertido en ley. Si la Comisión de

Relaciones Exteriores y Culto del Senado tomaba como base para su dictamen el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que, como digo, es idéntico a la sanción de Diputados, esta sanción debería volver nuevamente a esa Cámara para que la considerara.

Entendemos que ya ha sido dilatado demasiado el tratamiento de esta ley, y hay muchos sectores del servicio exterior, además de otros, interesados en tener un ordenamiento legal adecuado y ajustado a las nuevas exigencias que el servicio exterior plantea.

Por esa razón, hemos considerado oportuno someter a la consideración del Senado el proyecto revisado y modificado por la Cámara de Diputados, que se encuentra en las bancas de los señores senadores. Cabe señalar, no obstante, que la sanción de Diputados contiene dos reformas con respecto al nuevo proyecto del Poder Ejecutivo. Esas dos reformas se refieren: una, al artículo 5º, que modifica la limitación del 30 por ciento para designar embajadores a personas de fuera del servicio, y otra, a las licencias anuales ordinarias, ya que el proyecto del Poder Ejecutivo exigía que fueran tomadas en el lugar de destino del funcionario diplomático, mientras que la sanción de Diputados admite que lo sea en nuestro país o en cualquier otro, sin la exigencia del lugar de destino.

En última instancia, señalo con respecto al trámite legislativo, que lo que está en consideración en esta sesión son las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, es decir, sólo cabe a este cuerpo aceptarlas o rechazarlas, pero no entrar a considerar los otros artículos del proyecto no modificados, porque éstos ya tienen sanción definitiva.

Sr. Jáuregui. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui. — Señor presidente: bien decía el señor senador Luder, miembro informante de la comisión, que en oportunidad del tratamiento inicial de esta ley el debate fue amplio y mereció en ese entonces el apoyo de la Cámara, aunque haciendo constar la observación en alguno de sus artículos.

Con el mismo temperamento, en estas circunstancias nos vamos a limitar a observar, a través del recuerdo de lo que dijimos en aquella ocasión, las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.

En la sesión del 6 y 7 de junio de 1974 dijimos que es evidente que el Servicio Exterior de la Nación es el espejo de la República en el mundo, que refleja la imagen del país; a través de él se conocen nuestra historia, tradiciones, costumbres, cultura y forma especial de ser, y, sobre todo, es el instrumento ejecutor de la política nacional más allá de nuestras fronteras.

De la capacitación técnica y profesional, del conocimiento ambiental y del modo de actuar

de nuestros representantes dependerá la idea que de nosotros se formen los demás países, razón por la cual es fundamental dotar al Servicio Exterior de la Nación de los medios idóneos para que pueda cumplir su función cabalmente.

La ley que se encuentra a nuestra consideración debe posibilitar la realización de los medios anteriormente citados. Por eso es interesante destacar que la experiencia reunida no ha sido desaprovechada. Se han tenido en cuenta en la redacción de la presente las disposiciones de las últimas leyes sobre la materia, habiéndose recogido de todas ellas los componentes principales y agregándosele innovaciones interesantes.

Estamos de acuerdo en que el servicio exterior debe estar formado por funcionarios permanentes que se dediquen con exclusividad a sus tareas, habiendo ingresado en el mismo previo paso por el instituto que les dará los conocimientos científicos y técnicos necesarios. Una vez egresados del mismo iniciarán la carrera por el primer cargo del escalafón. Así se evitará que ingresen en el servicio personas no capacitadas, favorecidas por el azar de la política.

Por ello afirmamos, enfáticamente, que uno de los mayores aciertos de la ley es el mantenimiento del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ya que la mayoría de los países avanzados cuenta desde hace años con organismos similares.

El Consejo Superior de Embajadores resultará de suma eficacia en la colaboración por prestar al señor ministro con su asesoramiento, pues las personas que lo compongan gozarán de una vasta experiencia práctica en la función, no desperdiciándose de esta manera su capacidad y permitiendo, a la vez, el acceso de los funcionarios subalternos a los cargos superiores.

La creación del Tribunal de Honor reviste suma importancia, pues es esencial que todo funcionario del servicio exterior exhiba una conducta moral intachable tanto en su vida particular como en el ejercicio del cargo; posibilita, además, de esta manera, que los mismos componentes del cuerpo puedan ejercer entre sí una estrecha vigilancia de su comportamiento.

Por estas razones, señor presidente, entendemos que la ley es buena en general.

Va de ello, señor presidente, que algunas de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados no pueden merecer de nosotros nada más que el voto adverso en esta circunstancia para ser coherentes con lo que sostuvimos en aquella oportunidad, y que es lo que realmente sentimos.

En el informe del señor senador Italo Luder, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, se destaca que se introduce en el artículo 1º la definición de Servicio Exterior de la Nación, con lo cual, es obvio, estamos de acuerdo y debemos aceptarlo.

En el artículo 2º se van a iniciar nuestras disensiones, ya que en el inciso c) se suprime, para los agregados laborales, la exigencia de aprobar un curso de capacitación en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación por haberse querido dejar al estatuto especial y a la reglamentación establecer los requisitos que deben llenar. Asimismo, se incorporan al servicio exterior los agregados especializados que se designan de conformidad con el artículo 10.

En el mismo artículo 2º, en su inciso c), se fija quiénes deben integrar el Servicio Exterior de la Nación; asimismo, especifica que el Cuerpo de Agregados Laborales estará constituido por el personal designado con arreglo al artículo 9º del presente proyecto de ley.

El artículo 9º dice textualmente: «El Cuerpo de Agregados Laborales estará constituido por el personal que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo, propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo. Su organización, régimen y funcionamiento serán regulados por un estatuto especial».

A su vez, en el artículo 107 se especifica que «dentro de los 90 días de la publicación de la presente ley, será puesto en vigencia el estatuto a que se refiere el artículo 9º, el que deberá ser confeccionado por una comisión integrada por tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y tres representantes designados por la Confederación General del Trabajo».

Objetamos, señor presidente, que los agregados laborales estén exentos del curso de actualización o adecuación que deben cumplir todos los funcionarios del servicio exterior en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Creemos que todos los argentinos que lleven tan alta investidura, como es la de representar en forma permanente o pasajera a la Nación en el exterior, deben ir dotados de los mejores atributos y de las mejores condiciones para el desempeño de su cargo.

Creo que nuestros dirigentes obreros, entre quienes pueden estar las propuestas para agregados laborales, están en condiciones de satisfacer con amplitud las exigencias de este inciso que, entiendo, no hace favor a nuestra clase laboral sino que más bien la deteriora.

En el artículo 5º se suprime el límite fijado al Poder Ejecutivo para designar embajadores a personas no pertenecientes al servicio exterior y que establecía un máximo del 30 por ciento del total de cargos en el escalafón de la categoría A. Este límite fue propuesto por el propio Poder Ejecutivo como una autolimitación en su proyecto original; pero la comisión estima que, aparte de la medida y ponderación que en tal materia ha observado el gobierno, unido a las razones dadas durante el debate en la Honora-

ble Cámara de Diputados para suprimirlo, hacen aconsejable la aceptación de la modificación adoptada.

El artículo 5º dice: «El Poder Ejecutivo podrá designar, excepcionalmente, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la Nación que lo haya efectuado».

Me remito en esto, señor presidente, a lo que dijimos en el tratamiento inicial de la ley, en el sentido de que creemos que el Servicio Exterior de la Nación debe estar constituido por personal permanente que a su capacidad une su experiencia. Reconozco en el Poder Ejecutivo el derecho, la atribución y la conveniencia de designar embajadores. Y en esto creo que con aquel 30 por ciento que fijó inicialmente la sanción del Senado estaba ampliamente satisfecho, sobre todo cuando de la redacción del informe se deduce que el Poder Ejecutivo no habría llegado al límite a que hacía referencia el artículo en consideración.

El artículo 10 establece que: «El Poder Ejecutivo podrá designar agregados especializados en las áreas de defensa, cultura, economía y otras por iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos. Este servicio de agregados especializados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen. Formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán entrar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango protocolar».

A pesar de que el artículo quiere expresar taxativamente cuál es el ordenamiento y las funciones, indudablemente, de aceptarse este articulado puede darse lugar a la presencia de un paralelismo en la función diplomática. Es otro artículo que también merece nuestra objeción.

Al tratar de las disposiciones transitorias no podemos dejar de observar el artículo 101, que dice: «Establécese que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que actualmente revistan en la categoría B, ministros plenipotenciarios, y que pasaron a integrarla por o durante la vigencia del decreto ley 19.300/71, ya sea por pertenecer entonces a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, o por promoción, respectivamente, revistarán, a partir de la publicación de la presente ley, en la categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase. El resto pasará a integrar la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase».

Entiendo al respecto, señor presidente, que con esta disposición habría un retroceso en la jerarquía de numerosos miembros de nuestro personal diplomático lo que creo que no es aceptable y, sobre todo, no resulta justo. Sobre el particular podríamos recordar o hacer un paralelismo con situaciones que se deben haber dado en las fuerzas armadas, cuyos integrantes, en determinados períodos, han merecido los ascensos y posteriormente el poder constitucional los ha respetado y ha seguido manejándose de esa forma.

Otro artículo que merece nuestra crítica es el 103, el que expresa: «Como caso de excepción, a efectos de reorganizar adecuadamente el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, facúltase, por esta única vez, al ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que, por un período de ocho meses a partir de la publicación de la presente ley, pueda efectuar promociones siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16».

Al respecto, me permito recordar que el artículo 16 de la sanción de la Cámara de Diputados, al hacer referencia a los requisitos indispensables para el ascenso, expresa en el inciso b): «Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías»; y en el inciso d): «Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación que establezca la reglamentación de la presente ley».

Es decir, señor presidente, que consideramos que varias de estas modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados no mejoran el texto ni el espíritu de la ley, sino que, por el contrario, significan probablemente un deterioro al sentido que ha inspirado la sanción de esta ley, que otorga estado diplomático a todos aquellos argentinos que nos están sirviendo en nuestras representaciones en el exterior.

Va de suyo, señor presidente, que en el tratamiento en particular, votaremos por la negativa respecto de los artículos a que he hecho referencia.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: al tratarse este proyecto de ley en este recinto, ya formulé algunas observaciones al mismo, que no fueron tenidas en cuenta.

Observo ahora con preocupación que la Honorable Cámara de Diputados le ha introducido enmiendas que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado acepta en su totalidad y que desvirtúan y reducen a dicha iniciativa a una imperfecta copia de la ley 12.951, promulgada el 15 de febrero de 1947 por el presidente Perón y refrendada por el canciller Bramuglia.

El proyecto anterior contenía en su artículo 5º una sabia medida, que era la de que el Poder

Ejecutivo nacional estaba facultado para designar como embajadores a personas no pertenecientes al Servicio Exterior, que posean condiciones relevantes, pero estos nombramientos estaban limitados al 30 % de las vacantes existentes. En la sesión de la Cámara de Diputados se elimina ese tope, con lo cual se permite que los cargos de embajador puedan ser ocupados discrecionalmente por personas no pertenecientes a la carrera.

Con esto se produce, además, el taponamiento de la misma y hace que el funcionario de carrera no pueda superar el cargo de ministro plenipotenciario, razón por la cual difícilmente podrá llegar a ser jefe de misión, ya que las legaciones no existen más. De esa forma, toda la experiencia adquirida a lo largo de una vida, lejos de ser un estímulo será un injusto techo en la culminación de su carrera.

Es indiscutible que el Poder Ejecutivo tiene derecho a disponer de cargos de embajador, pero para que realmente representen al país y de ninguna manera para cumplir con compromisos o recompensar a desplazados por circunstancias diversas. No es mi propósito señalar que esto pueda ocurrir con el actual Poder Ejecutivo, pero ha sucedido en diferentes gobiernos y sobre ello hay una larga experiencia en la República.

La sanción venida en revisión suprime también el artículo 89 del proyecto anterior, que disponía la indemnización a los derechos, habientes por fallecimiento del funcionario en actividad, retirado o jubilado. Extraña que la Cámara de Diputados, siempre sensible, haya tomado esta medida que perjudica al funcionario.

En cuanto a los agregados laborales, creo que son necesarios. Cuando pertencí al Servicio Exterior existían los agregados obreros y pude constatar que esos hombres de trabajo que nos representaban en otros países llevaban a los mismos la experiencia de lo que ocurría en nuestra patria y recogían lo que sucedía en los campos laborales y en todo tipo de actividad, para transmitirlo aquí y, fundamentalmente, para enterar a la clase obrera.

Pero me pregunto por qué motivo estos agregados están sujetos a un régimen diferente al que se aplica a los de otros ministerios: fuerzas armadas, Cultura, Economía, etcétera. Entiendo que aquéllos deberían desempeñarse en las mismas condiciones que éstos y ser designados por el Ministerio de Trabajo, cobrar sus emolumentos por intermedio de dicha repartición y figurar, por lo tanto, en el inciso d) del artículo 2º de la ley, y no en un inciso especial, como es el c). De la misma manera deberían estar mencionados en el artículo 10, que trata de todos los agregados especializados, y no en el artículo 9º, que se refiere sólo a ellos y que, por lo tanto, los diferencia de sus colegas de las otras especializaciones.

Con respecto al consejo de embajadores me mantengo en lo manifestado en este recinto cuando se trató esta iniciativa, es decir que lo considero de ninguna utilidad y sí una complicación para los destinos de tales funcionarios, a menos que la real finalidad sea la de integrarlo con embajadores de carrera para dejar libres destinos en el exterior.

En lo que se refiere al artículo 98, que establece que el personal administrativo, técnico y profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior, tendrá asignado rango diplomático entre las categorías G y E, es decir, de secretario de embajada y cónsul de tercera, de segunda y de primera clase, es un poco peligroso, pues esta definición genérica del artículo no indica qué personas ocuparán esos cargos y cuáles serán sus funciones específicas, lo que hará que protocolariamente puedan producirse molestias. Ignoramos si se trata de personal de maestranza, de servidores, choferes, teletipistas, etcétera.

Del artículo 100, entre las disposiciones transitorias, estimo que debe eliminarse el último párrafo, pues la ley de disponibilidad 20.713 perdió vigencia el 31 de diciembre de 1974.

Me opongo, por considerarlo arbitrario y contradictorio con la ley que estamos por sancionar, al artículo 103, que faculta al ministro de Relaciones Exteriores, por esta única vez, como caso de excepción y a efectos de reorganizar adecuadamente el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, para que, por un período de ocho meses a partir de la publicación de esta ley, pueda efectuar promociones, siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16. Dice el inciso b): «Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías». Y el c): «Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación de la presente ley».

Señor presidente: este proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo el 8 de marzo de 1974. Entonces el ministro solicitaba un plazo hasta el 31 de diciembre de 1974 para proceder a esta reorganización, es decir, diez meses. Hasta hoy han transcurrido esos diez meses y cinco más, es decir que han pasado quince meses para hacer lo que en principio se dijo que exigía diez. ¿Para qué se necesitan hoy otros ocho meses?

Sr. Luder. — Si el señor senador me permite...

Sr. Bravo. — Con mucho gusto.

Sr. Luder. — Es que el ministro no dispuso de la ley, que no ha sido sancionada todavía. Sólo a partir de ahora necesitará un plazo para la reestructuración. Antes el proyecto tenía media sanción, de modo que no se podía aplicar la disposición.

Sr. Bravo. — Gracias, señor senador.

En el tiempo transcurrido para la sanción de esta ley —más de un año— estimo que los ministerios de Bienestar Social y de Relaciones Exteriores y Culto habrían podido adelantar algo en lo inherente al artículo 104, que se refiere al régimen jubilatorio del personal del Servicio Exterior de la Nación. Este régimen permanece congelado desde la época de Onganía, quien anuló arbitrariamente los derechos que se habían obtenido después de años de lucha.

Para finalizar, quiero dejar constancia de que he percibido, con pena, que no se tomaron las medidas adecuadas para reparar integralmente la situación de los cesantes de 1955 y de 1966. Este aspecto no ha merecido la atención de las autoridades que tenían la obligación de reparar la afrenta de que esas personas habían sido víctimas. La situación de los cesantes se ve ahora agravada por la respuesta dada por el Poder Ejecutivo a la solicitud de informes elevada por esta Cámara en su oportunidad. En efecto, el mensaje 1.052 del Poder Ejecutivo ha tenido la consecuencia de colocarlos en una situación moral similar o peor que la que les creara el decreto 360 del 11 de octubre de 1955, producido por el gobierno de facto. La comunicación elaborada por el actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto los considera ineptos por no haber —según él— actualizado sus conocimientos, agregando que sus condiciones psicofísicas no reúnen los requisitos indispensables para poder tener un buen desempeño.

Con esta actitud el ministro haría suyo el contenido del mencionado decreto firmado por Lonardi y Amadeo, y que entre otras cosas se refiere a la necesidad de que el personal del Servicio Exterior de la Nación responda, por su preparación y conducta, a las graves responsabilidades que pesan sobre sus componentes, agregando la existencia de notorias deficiencias en parte del personal, que redundan en menoscabo del prestigio internacional de la República.

Con su actitud a este respecto el señor ministro estaría respaldando a la revolución de 1955, que habría echado con razón a personal que no servía y que se desempeñó durante el gobierno del general Perón.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: el Senado considera un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación. Es decir que este problema se inserta en la política exterior del país.

Se ha expresado en este recinto que el conjunto de hombres que integran nuestra Cancillería es algo así como la herramienta de la realización de esa política.

Deseo señalar que con respecto a la política internacional, en La Hora del Pueblo, con apoyo de los distintos sectores políticos que integran esta Honorable Cámara, se estableció en el punto 19 que la República Argentina debe mantener un perfil de plena independencia para el manejo de su política internacional, sin sometimiento a las grandes áreas del poder militar, económico y político mundial. También se señaló allí que esta política debe basarse en el reconocimiento del principio de la no intervención, de la autodeterminación, de la igualdad jurídica de las naciones y de la vigencia de los derechos humanos y sociales.

En nombre de mi bloque firmé en disidencia parcial el dictamen de comisión, por considerar que, si bien estamos un poco constreñidos a aceptar lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados, el Senado debe insistir en algunos de los aspectos afirmativos de su media sanción de junio de 1974.

La Unión Cívica Radical entiende que la ley sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación debe ser la palanca que permita realizar una política exterior determinada.

Nuestra generación está gozando del privilegio de vivir tiempos de cambios históricos substanciales; vivimos un proceso revolucionario que se expresa en términos muy diferentes a los clásicos y tradicionales. La revolución que hoy se vive —como dice Tofler— no tiene como conflicto básico el enfrentamiento entre negros y blancos, ricos y pobres, jóvenes y maduros, sino que, coyunturalmente, intenta definir si se va a preservar el proceso de la civilización industrial o va a jugarse al cambio que significa una mayor e importante participación de los distintos sectores del pueblo en la conducción de los negocios y de la política.

Están bastante superadas las ideologías en homenaje a márgenes de seguridad de escalas superiores.

Vivimos hoy la dinámica resultante de esta aceleración que yo definí como contracción histórica hace un momento, en el transcurso del homenaje al 25 de Mayo. Ello nos obliga como nación, a responder acertadamente, con impulso típico, de acuerdo con el molde nacional, a los desafíos de la época, para preservar nuestro prestigio, nuestra supervivencia y seguridad.

Hoy vamos a dar una ley a la República. Ella debe dar vigencia a una vocación argentina, debe tener sentido nacional y, por supuesto, debe expresar nuestra voluntad de cooperación en el ámbito internacional.

Los argentinos tenemos la obligación de definirnó con lealtad ante el mundo y de elaborar, a través de la propia política nacional, nuestra imagen exterior. ¿Cuál debe ser en 1975 la respuesta de nuestro país a la joven revolución contemporánea, sumándonos a la misma como nación civilizada y culta?

Esta ley que vamos a votar crea un organismo e instrumenta hombres; pero nosotros debemos

definir cuál es el modelo que elegimos para expresarnos en esta geografía universal que se achica con el vértigo del hombre llegando a la Luna.

Quedaron atrás las guerras, también va quedando atrás la guerra fría porque las superpotencias concretan acuerdos en Moscú, Washington o Vladivostok. Ahora la paz es la paz nuclear, la paz disuasiva, porque no aceptarla significa posibilitar la destrucción del conjunto humano.

Para el radicalismo —y para la Argentina, supongo— la paz no es simplemente no matar; es elaborar una economía de cooperación justa, afirmar una cultura y una política tendientes a reclamar permanentemente la libertad del hombre.

En Europa ya no están el Kaiser ni Hitler desbordando fronteras; hay una comunidad económica, sin fronteras. La *ostpolitik* alarga sus brazos al Este. Japón afirma su desarrollo a través de la tecnología y la China continental se levanta pesadamente con sus 750 millones de hombres para ubicarse en el sillón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En nuestro hemisferio estamos intentando un nacionalismo latinoamericano rumbo a la liberación, y los pueblos hasta ahora postergados del Tercer Mundo descubren que se va agotando su descolonización y están viviendo un poco la gloriosa insolencia de comprobar que los que parecían todopoderosos aparecen temerosos, sacudidos por las naciones emergentes y poderosas del cambio que está significando la incidencia del precio del petróleo.

Lástima grande, diría, que esta actitud del Tercer Mundo aparece un poco desvirtuada, por lo menos de acuerdo con la filosofía de la Unión Cívica Radical, y el sha del Irán, en lugar de volcar los dólares al servicio del bienestar y la educación de su pueblo, compra empresas multinacionales o acciones de la Panamerican, sin comprender que esta coyuntura debería ser aprovechada para elaborar la justicia internacional y superar las eternas frustraciones de la humanidad.

En este escenario, debemos definirnó, decir qué va a hacer la Argentina, qué quiere en esta geografía cambiante y súbita, como decía un canciller de Venezuela. Sigue en pie y avanza, por supuesto, el sentido universalista que imaginó Yrigoyen en 1916. Estamos de acuerdo, por supuesto, con el continentalismo, porque para la Unión Cívica Radical los pueblos de América siguen siendo los pueblos-continente y América latina sigue siendo como siempre nuestra patria continental. Aunque lo digamos, no somos potencia. La potencia es una entelequia fabricada para discursos teóricos. La Argentina no es potencia aunque merezca serlo; aunque merezca acertar no ha implementado todavía una política de continuidad que nos ubique en el escenario de la política del mundo.

Entre las etapas históricas de nuestro desarrollo se mezcló nuestra decadencia institucional; junto al ingrediente negativo de la dependencia del imperialismo, que nos fue dejando como consuelo algunas victorias chicas, no se ha elaborado todavía la victoria grande de la gran presencia argentina influyendo civilizadamente en el conjunto de los pueblos del mundo.

Yo ruego a Dios que esta ley sirva para apasionar a los hombres de nuestra Cancillería, a los integrantes del servicio exterior, desde los más humildes secretarios y cónsules hasta el embajador más prestigiado, para que sirvan y comprendan que son soldados de esta causa importante de la paz, que todavía en algunos ámbitos parece inconclusa.

Muchos podrán pensar que esto es solamente una ilusión de los políticos que amamos a la República, pero en ese esfuerzo no podemos dudar. Esta elaboración de una política exterior en un mundo interrelacionado que se achica, presenta casi aquella circunstancia dramática del militar venezolano que decía a la juventud: «Ni siquiera tenemos la coyuntura de morir o triunfar; la única coyuntura es triunfar». Parecería que esta actitud de la Argentina 1975 ni siquiera tiene la coyuntura del sacrificio grande sino la de vencer para gestar la etapa grande en la que la Argentina aparezca en el mundo proclamando como San Martín que nuestra causa es la causa del género humano, o alentando a Byron, quien decía que la patria es donde haya un oprimido. Para eso debemos unirnos los argentinos; unir los argentinos a América y unir América a la humanidad. Pero, para unirnos debemos fortalecer la democracia adentro y proyectar la democracia afuera. Eso nos obliga a ser coherentes: no podemos enorgullecernos de tener gobierno elegido por el pueblo adentro si después —como lo hizo el ministro Savino hace unos días en el Uruguay— vamos a felicitar a las fuerzas armadas porque han destruido la guerrilla y la democracia uruguaya. La Unión Cívica Radical es el adversario histórico de la subversión en el país, pero también cree que hubiera sido una mejor interpretación de la política exterior del país que los ministros viajaran para decir que hay que convocar a elecciones en las patrias hermanas sin soberanía de pueblo, porque en esa homogeneización de la democracia estará asentada la solidaridad de América latina.

Por esto mismo veremos que el mundo argentino estará falsificado si nuestros agentes exteriores no hacen esta interpretación. Somos federales porque no habrá unión nacional sin integración de nuestras regiones; no habrá política exterior prestigiosa sin una clara política definida nacionalmente en lo interno.

¿Qué ministro de Economía, señor presidente, podría elaborar planes de cooperación universal con nuestra coyuntura económica si en el mundo sólo se publica nuestra violencia desfigurada?

Ayer, aquí, el ya ilustre senador Caro nos decía que un diario extranjero, «The New York Times», falsificaba nuestra realidad al manifestar que la Argentina era el paraíso de las drogas.

Creo que también tendríamos que preguntarnos por qué pasa esto, cómo nuestro país no puede crear los anticuerpos para combatir a esta política negativa que vende imágenes falsas de una nación que vive el drama de algunas «vendetas», pero que aspira a la paz.

¿Cómo perfeccionar nuestro prestigio afuera, si adentro la corrupción permite que haya empresarios, exportadores, tramposos en la calidad de nuestras mercaderías? ¿Qué política podría elaborarse si los exportadores —algunos, por supuesto—, para ganar mucho, son capaces de enviar mercadería deteriorada, lesionando así nuestra imagen de país exportador?

—Ocupa la Presidencia el señor senador Alberto M. Fonrouge, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.

Sr. León. — ¿Cómo gritar al mundo que somos independientes, si por los pasillos de nuestros comandos de defensa caminaron hasta hace poco, o caminan todavía, representantes de ejércitos extranjeros?

¿Cómo pretender el prestigio y el despegue, si paralizamos una instalación industrial porque no se le da visa al técnico que viene a ponerla en marcha?

¿Qué prestigio puede tener la política exterior de un país si el señor Lacabanne intenta —en un error, incluso, de los países extranjeros— una especie de manejo propio de ella, negando la facultad exclusiva de la señora presidente de conducir los negocios exteriores del país, cuando en Córdoba da a conocer una declaración conjunta con los embajadores de Siria y Egipto en nuestro país y la comisión directiva de la Cámara de Comercio Exterior Argentino-Arabe, desvirtuando así la homogeneidad de nuestra política exterior? No tengo conocimiento de que la Cancillería haya tomado medidas respecto a este nuevo abuso del ya famoso, por lo negativo, señor interventor en la provincia de Córdoba.

¿Cómo expresarnos con prestigio en la Unesco, sede de los representantes del conjunto cultural del mundo, si en nuestras universidades, en función de actitudes irracionales, siguen triunfando los bastones largos sobre la autonomía universitaria; si nuestros artistas, músicos y pintores salen del país no como embajadores de nuestra cultura, sino como enviados del miedo, de la prepotencia y de la amenaza?

¿Qué éxito podría tener un canciller, por más talento e imaginación que tenga, si el Poder Ejecutivo le impone condecorar a Pinochet, en momentos en que el régimen chileno es condenado por el mundo por violar los derechos humanos?

Debemos estudiar en plenitud la raíz de nuestras realidades para no escurrirnos negativamente en la superficie de los hechos. Nuestros embajadores deben ser, como dije, apasionados de esta realidad.

¿De qué vale que el ministro de Economía pida austeridad o que los legisladores de este Parlamento sólo votemos el 0,6 por ciento del presupuesto para el Poder Legislativo, si después se designa un embajador que contrata una *suite* del Hilton Hotel de Teherán solamente para dormir, gastando en ello 300 millones de pesos por año?

Debemos hacer el acto político de modelar con mano propia una personalidad internacional que muestre que somos capaces de superar el encierro de nuestros desencuentros y tener voz en las grandes e históricas decisiones del mundo.

Este proyecto acepta como valederas algunas de las razones que expuse el año pasado, tanto en la comisión como en este recinto. Algunas de las modificaciones que propuse en aquel entonces fueron aceptadas por la comisión; ahora es la Cámara de Diputados la que ha resuelto introducir otras de las que sugerimos. No obstante, quedan algunas que el tiempo y los hechos, creo, demostrarán que son las correctas desde el punto de vista de nuestra apreciación.

Por eso, reitero que el bloque de la Unión Cívica Radical se reserva el derecho de introducir después modificaciones a esta ley del Servicio Exterior de la República.

Al respecto diré que, en principio, sigo pensando que en el artículo 3º no se debió desdoblarse la categoría de ministro plenipotenciario, sino que como categoría C debió establecerse la de un ministro consejero sin acuerdo del Senado, pues al haber desaparecido prácticamente las legaciones basta con una sola categoría de ministro plenipotenciario.

En segundo lugar, el artículo 3º, ahora modificado, debió haber previsto la posibilidad de efectuar designaciones en las categorías B a E en un determinado porcentaje, 20 %, que ya estaba en la ley 12.951, en la modificación hecha durante el gobierno radical, no en un ciento por ciento como ahora lo crea para la categoría A la sanción de la Cámara de Diputados y que es uno de los motivos fundamentales de la disidencia de nuestro sector con esta legislación.

Nosotros pensamos que este porcentaje basta para que la realización de nuestra política permita introducir —si ello es necesario— al servicio hombres especializados que con sus conocimientos puedan servir coyunturalmente al mejoramiento y perfección de esta herramienta fundamental, que no sólo sirve a nuestra política exterior sino también a nuestra política interna, porque así como lo interno está desbordando hacia lo exterior, también es importante lo que ocurre fuera del país, ya que todo lo que su-

ceda en el mundo actual, achicado por la técnica, tiene incidencia fundamental en el seno de nuestra colectividad.

Pienso que de esa manera el servicio exterior se hubiera enriquecido con funcionarios que habrían adquirido experiencia en diversos sectores de la actividad humana.

Entendemos que ello pudo haber sido posible entre las categorías B y E, para no desalentar a los jóvenes, quienes sí deberían ingresar en el servicio exterior en forma exclusiva por el instituto, creando al mismo tiempo una válvula para permitir el ingreso a partir de la categoría de primer secretario para reclutar la gente que hubiera podido surgir de otros campos de la actividad humana.

Tal como fue modificado el artículo 5º por la Honorable Cámara de Diputados, todos los embajadores de la categoría A —como lo han expresado con brillantez los señores senadores Bravo y Jáuregui— pueden ahora ser designados no habiendo cursado lo que nosotros creamos hoy como la organicidad de esta ley del servicio exterior.

Es decir, ahora todos los embajadores podrían ser nombrados al margen de la carrera. No se aceptó el temperamento prudente del porcentaje para todas las categorías, idealmente de la A a la E, propuesto por nosotros en el Senado. En Diputados directamente han suprimido todo el porcentaje para la categoría A. Esto, evidentemente, significa desalentar a los que pongan su pasión, su esfuerzo y su capacidad de estudio en los niveles intermedios, porque saben que sus ansias de promoción encontrarán forzosamente un techo cerrado para la aspiración definitiva y justa de alcanzar la categoría A.

Vemos, en cambio, con beneplácito, que la Cámara de Diputados haya modificado el artículo 13, derogando algo que yo impugné durante el anterior tratamiento en esta Cámara: a saber, que quienes no aprobaron los cursos o los demás requisitos exigidos no podían presentarse a examen sino una sola vez y que, en caso de readmisión, tendrían que entrar sin beca.

En el debate de junio dije que todos rendimos examen alguna vez, y sabemos que un único examen no marca el índice de capacidad y que, en consecuencia, no podía entender por qué quien aprueba el primer examen tenía beca y el que aprueba el segundo no la tenía.

Esto ha sido interpretado por la Cámara de Diputados y creo que perfecciona la ley.

También debo advertir que en el artículo 41 de las modificaciones aprobadas por Diputados se haya establecido, en coincidencia con lo que dije en este Senado en la discusión anterior, que los funcionarios de la categoría A no debían sujetarse exclusivamente a las sanciones de retiro obligatorio, cesantía o exoneración. He dicho que había que graduar, porque no era lo

mismo la pena para un embajador que traiciona a la República que para aquel que besa a su secretaria en público.

Así lo ha entendido ahora la Cámara de Diputados, y también ha creado la disponibilidad para la categoría A, lo mismo que para las categorías inferiores. De esta manera, con la nueva redacción que ahora corresponde al artículo 41, al haberse establecido la posibilidad de aplicar la disponibilidad a los embajadores, se logra una más perfecta graduación de las sanciones y una más justa interpretación de la gravedad de los hechos, con un espíritu correctivo y no meramente punitivo, que creo hace a la mejor tradición del derecho disciplinario.

Celebramos también que Diputados haya aceptado otro aspecto que yo critiqué en la sanción anterior, que es lo relativo al tribunal de honor, y, por sobre todo, que se haya seguido nuestro criterio con respecto a la calificación. Yo impugné el tribunal de honor en el debate anterior y fue ahora aceptado por la Cámara de Diputados. Impugné que las calificaciones fueran secretas porque no hacían al sistema republicano y frenaba la posibilidad de una buena información para el hombre de nuestra Cancillería. Ahora son reservadas y se le informa al correspondiente agente. Esto me parece muy justo e interpreta el pensamiento del bloque de la Unión Cívica Radical expresado en aquella oportunidad.

Otro punto importante es que se haya eliminado el sorteo para la integración del Consejo de Embajadores, que también impugné en ese entonces. Ahora, según lo dispone el artículo 33 de las modificaciones de Diputados, si hay un mayor número de embajadores que plazas en el consejo, se los determina por resolución. Todo ello, sin perjuicio de nuestras dudas respecto del llamado Consejo de Embajadores.

Resulta grato que se haya eliminado el sorteo, pues a través de él se creaba una situación que evidentemente era un procedimiento equívoco para disponer la estabilidad o no de un embajador en una república como la nuestra, puesto que en la aprobación del Senado, quien no pasaba a integrar el consejo debía retirarse o jubilarse, lo que significaba para el no sorteado que su carrera terminaba a los sesenta y cinco años.

Nos resulta también digno de destacar que Diputados haya incluido en el artículo 77 a las personas que hubiesen sido separadas por razones ajenas a su voluntad, con respecto al retiro, porque crea un margen de mayor justicia para algunos funcionarios que, por razones que yo no quiero discutir en esta circunstancia, han dejado de pertenecer al Servicio Exterior.

Con respecto a la nueva sanción de Diputados, nosotros vamos a seguir con nuestra tradición en el sentido de que muchas de las discrepancias que marcamos no las vamos a repetir en la consideración en particular, porque quedan

ya expresadas para evaluación de los señores senadores; pero adelanto que entiendo que deberíamos insistir en el artículo 1º aprobado por este cuerpo en su sanción anterior, pues en el nuevo artículo, como lo dice muy bien el despacho de la comisión, se introduce una definición en forma análoga a la que contenía el acápite del proyecto originado en el Poder Ejecutivo y que el Senado eliminó en la aprobación anterior.

Se define al Servicio Exterior como organización fundamental: «fundamental» es lo que está en el cimiento o base de algo, mientras que aquí se está utilizando el adjetivo en el sentido de esencial. El vocablo «órgano», según lo criticáramos oportunamente, ha sido abandonado para definir al Servicio Exterior y se lo ha reemplazado por «organización», palabra que implica cierta personalidad, cierta estructura jurídica o fáctica, con órganos propios. Más adecuada hubiera sido la palabra «organismo», como conjunto de empleos que configura una institución, en el sentido de «agencia», ya que los funcionarios son agentes diplomáticos y no órganos.

Como se ve, es preferible evitar todos estos problemas filológicos e insistir en la sanción del Senado. No resulta aconsejable, y en esto comparto la tesis que da el señor miembro informante de la mayoría, de las definiciones en las normas. Es mejor dejarlas para la doctrina. Además, esta ley es un estatuto del Servicio Exterior y no una ley de funciones y misiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Refiriéndose en general al proyecto, habría sido preferible que en el artículo 2º se excluyera la palabra «cuerpo», substituyéndola por «cuadro». Pero quiero ahorrar tiempo y no deseo extenderme en la consideración artículo por artículo.

Entiendo, además, que era preferible también el texto anterior aprobado por el Senado, por cuanto consideraba al Servicio de Agregados Laborales como adscrito al Servicio Exterior de la Nación. Sobre el particular considero que debe estar integrado por auténticos dirigentes sindicales y por obreros, los que, una vez cumplida su adscripción, deberán reintegrarse a su medio natural para volcar allí todas las experiencias recogidas.

Por lo contrario, aquí parecería engendrarse una carrera de agregado laboral. Nosotros pensamos que en este terreno la Cancillería y los organismos participantes deberían tener la prudencia del caso para comprender que los agregados obreros no tienen que ir forzosamente a todos los países del mundo, sino a aquellos donde la vivencia de un real rumbo social o de estructura sindical pueda ser recogida con utilidad por un país como el nuestro que está pensando en sus grandes mayorías, es decir, que la clase trabajadora organizada debe estar en la cresta de la ola del proceso de cambio argentino.

Con respecto al artículo 13, estimo que debió estipularse la posibilidad de que pudiese incorporarse un pequeño porcentaje al margen de la carrera cursada en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Lógicamente, en las presentes circunstancias, aun cuando al Senado sólo le queda aceptar o desechar, lo expreso para señalar lo que considero una falencia del proyecto.

Estimo que en el inciso j) del artículo 22 podría haberse agregado, luego de donde dice: «Recurrir por vía administrativa...», las palabras «...o judicial».

En el artículo 23 inciso d), si bien su redacción pudo ser mejor, es preferible el texto del proyecto que viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados al primitivo votado por el Honorable Senado. Es decir, se limita la incompatibilidad a cargos de la administración nacional, provincial o municipal y se ha quitado la condición que se ponía referida al ejercicio de la docencia universitaria.

En el inciso f) del artículo 24, con respecto a la autorización que se exige, habría sido deseable que se permitiera también la docencia universitaria, incluso en países extranjeros, donde a veces, en el dictado de cátedras en sus universidades, un embajador argentino con muy buena formación cultural puede dar brillantez a nuestra representación a través de una fluida comunicación con los estudiantes que asisten a ellas.

En el capítulo relativo al Consejo de Embajadores, con el que en principio no estamos de acuerdo, pues significa una instancia burocrática que no puede substituir a las comisiones asesoras de Relaciones Exteriores de esta Cámara como órgano de consulta y formulación de la política exterior, debo señalar que es preferible la nueva redacción.

Anteriormente señalamos la injusticia del sorteo. Sin perjuicio de aceptar la nueva redacción, apuntamos la injusticia de que los funcionarios de las categorías b) y c) se retiren a los 67 años, mientras los embajadores que no pasen a integrar el referido consejo lo hagan a los 65.

Cabe agregar que la Honorable Cámara de Diputados aceptó una propuesta hecha por nuestro bloque en el debate anterior en el sentido de elevar de 33 a 35 años de edad para ingresar al servicio exterior.

Sobre el particular tendría que reiterar lo que dicen los señores embajadores con respecto al artículo 103, que crea una facultad discriminatoria y subjetiva al señor ministro a los efectos de efectuar los ascensos. En el proyecto del Poder Ejecutivo que el Honorable Senado trató anteriormente, existía un artículo que facultaba al señor ministro a decretar por sí mismo la disponibilidad en la carrera, y con buen sentido nuestra Comisión de Relaciones Exteriores modificó este criterio pensando que siempre en este caso es mejor prever los subjetivismos.

Pero ahora se introduce un aspecto de la subjetividad para el ascenso; aquello era para la disponibilidad. De todas maneras, la decisión de nuestro bloque es que no se puede dejar librado al señor ministro, aunque sea con carácter transitorio, por ocho meses, la posibilidad de dar ascensos, porque bien puede hacerse con prudencia y con justicia, pero también se pueden otorgar con un sentido de favoritismo, lo que es lógico y humano.

Reitero que el artículo 107, que prevé la confección y puesta en vigencia del estatuto para los agregados laborales a que se refiere el artículo 9º, debería ser rechazado; y pienso que los representantes laborales —cuya integración a nuestras delegaciones del servicio exterior votamos con entusiasmo— deben ser personal adscrito a la Cancillería. Por consiguiente, el estatuto no debería existir o, en última instancia, no podría estar confeccionado —como dice el proyecto— por tres funcionarios de la Cancillería, tres del Ministerio de Trabajo y tres representantes de la Confederación General del Trabajo. En caso de aceptarse la existencia del estatuto, éste debería instrumentarse por medio de una ley, es decir mediante la intervención de los cuerpos legislativos de la República.

También quería decir que estoy totalmente de acuerdo con la redacción aprobada en la Cámara de Diputados, modificando el despacho de la propia Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que establecía que los miembros de nuestro servicio exterior tenían que tomar las vacaciones en los países sede. Era bastante aberrante, por ejemplo, que cuando al embajador en Dinamarca le tocaran las vacaciones en invierno, tuviera que tomarlas en aquel país, impidiéndole ir a tomar sol al Mediterráneo o, mejor aún, venir a la Argentina a gastar los dólares que ahorró y visitar a su familia.

De todas maneras, esto a sido modificado por Diputados y para nosotros constituye un acto de lógica legislativa.

Podría seguir analizando artículo por artículo, pero creo que a través de la exposición de los señores senadores Luder, Jáuregui y Bravo se han ido examinando las partes principales de esta futura ley que tiene también, a mi criterio, algunas deficiencias.

Pienso que el requisito para jubilarse, de 15 años por lo menos en el servicio exterior tendría que reducirse a 10, y en esto soy coherente con mi posición, porque también lo propuse en el debate anterior en esta Honorable Cámara. Es decir que se deberían tomar veinte años en la administración pública, de los cuales diez como mínimo computables en el servicio exterior.

Entre mis observaciones tengo también anotado el artículo 73, donde entiendo que la Cámara de Diputados se ha equivocado. Nosotros habíamos autorizado licencias de 20 días a los agentes diplomáticos designados en zonas espe-

ciales, es decir en aquellos países considerados como destino insalubre o peligroso. Ahora se ha disminuido a 10 días. Esto significa que en el caso de zonas muy alejadas, como por ejemplo Bangla Desh, el agente gastará sus 10 días de vacaciones en viaje. Por lo tanto, pienso que deberían mantenerse por lo menos los 20 días de licencia.

Estoy totalmente de acuerdo en que es imprescindible la jerarquización del Servicio Exterior de la Nación, pero pienso que hay que ajustar los detalles de la docencia en el instituto, para que los hombres que salgan de ahí no sean una especie de burócratas al servicio del pasatismo de una expresión de *status* de cancillería, sino apasionados soldados de un país que tiene que realizarse a veces con grandes sacrificios.

Pienso que hay que respetar y alentar a esta gente para que se ponga a estudiar sacrificadamente. Por eso nuestro desacuerdo con que se pueda designar el ciento por ciento de los trabajadores en el grupo A al margen de la carrera, porque estaría tapando esta posibilidad de progreso, que es lógico que tiene que ser alentada.

También es fundamental crear una indubitable estabilidad en los miembros de nuestro servicio exterior. Los ejemplos que tenemos no son ideales. Podría decir que una de las cancillerías que han hecho una buena escuela sobre este particular —aunque a veces nos haya dado dolores de cabeza— es la de Itamarati, la cual muestra el ejemplo de que en una oportunidad un presidente de la república puso en disponibilidad a tres miembros de su servicio exterior y el Tribunal Supremo de Brasil ordenó que fueran repuestos.

Comprenderán los señores senadores que, por una parte, estamos sancionando una ley otorgando estabilidad y, por la otra, dentro de las disposiciones transitorias se establece en el artículo 103 que el ministro podrá ascender o pasar a disponibilidad a estos funcionarios.

Creemos que los argentinos tenemos que decidarnos a crear una gran estructura de civilización política en el país. Creo que uno de los defectos nuestros es contar con un estado de inestabilidad, frente al cual debemos crear una gran organización y una administración prestigiosa y capaz con gran sentido nacional. A veces, esta inestabilidad lleva a la corrupción y da lugar a que los funcionarios —no me refiero en este caso a la Cancillería actual—, en lugar de estar al servicio de la defensa de los grandes intereses del país, resultan fácilmente corruptibles, en función de un materialismo que corrompe conciencias.

Pienso que uno de los aspectos que debemos considerar los argentinos es nuestro propio mejoramiento moral, porque con ello la Argentina podrá ubicarse en los organismos internacionales

o en los países donde tengamos delegaciones representativas, marcando el sentido moral y ético de nuestra vida.

Este país, que pudo decir que «la victoria no da derechos» y cuenta con muchos antecedentes de una política generosa con el mundo, que marcó etapas en las que ganaba guerras y las perdía por sentido moral, debe ser una expresión totalmente limpia y purificada en este aspecto, para un prestigio no de potencia militar, sino de nación culta y civilizada como lo es realmente nuestra Argentina.

Podría, señor presidente, continuar cabalgando en el texto de la ley, pero pienso que está suficientemente informado el Senado al respecto. He dicho ya cuáles son los artículos sobre los que habría que insistir y dejo expresadas algunas de nuestras disidencias que justifican mi disensión parcial.

Estimo que esta ley debe ser mejorada, pero también creo y en esto no soy original, que las leyes son perfeccionadas por la calidad humana de quienes practican la propia ley. A veces, los verdaderos funcionarios no resultan de que la ley sea buena o mala, sino precisamente, de esa calidad a que he hecho referencia y que integra el ingrediente básico: cumplir las leyes de la República.

Consideramos que las observaciones que cabría formular respecto del proyecto en consideración pueden resumirse en las siguientes: en el artículo 22, insistir en el inciso m) del texto sancionado por el Senado, que correspondía al artículo 21 anterior; en el artículo 24, suprimir el inciso f); en el artículo 25, insistir en el texto de la sanción del Senado, al igual que en el caso del artículo 53; en cuanto al artículo 59, insistir en el artículo 60 de la sanción del Senado; lo mismo que con referencia al artículo 63. Y en cuanto al artículo 73 señalo un error en la cita que se formula en el inciso d) del mismo, en el que, en lugar de decirse «de acuerdo con el artículo 21, inciso j)», debe expresarse «artículo 22, inciso g)».

En cuanto al artículo 80 debe insistirse en el texto sancionado por el Senado, al igual que respecto al artículo 84, que fuera aprobado por este cuerpo como artículo 83.

Respecto al artículo 89, mantener el texto aprobado por el Senado, porque en la sanción de la Cámara de Diputados se suprimen los gastos de sepelio y luto para el caso del funcionario que revistara en la Cancillería y se acuerdan solamente a los que están en el exterior, lo cual pienso que es una desigualdad para integrantes de un mismo sistema argentino.

Asimismo, hemos propuesto la supresión del artículo 103, referido a la facultad del señor ministro de efectuar promociones a su exclusivo criterio durante un lapso de ocho meses.

Señor presidente: creo imprescindible que comencemos a comprender que todo lo que hace a

nuestra presencia argentina en el exterior tiene que tener una coherencia total con respecto a nuestras aspiraciones nacionales. Los organismos internacionales crean hoy ciertos canales de comunicación con distintos sectores de la administración pública, lo que produce a veces una cierta dicotomización o falta de integración. Existen casos, que todos conocemos, de conducciones sobre un aspecto que aparecen diversificadas, impidiendo a la República la aplicación de una buena estrategia o táctica coyuntural. Por ejemplo, la FAO está comunicada con la Secretaría de Agricultura; la OIT, con el Ministerio de Trabajo; y la O.M.S., con la Secretaría de Salud Pública. Es evidente que tiene que haber un canal interno que haga que esto se suelde en una sola actitud nacional, para que nuestra expresión exterior sea la de un país totalmente unido, la de un conjunto nacional; que la estrategia no sea estructurada a criterio de un ministro sino que sea la de la República como un todo.

La escena donde más se juega hoy la vida de las naciones es la del campo económico y del comercio. Para esa escena yo solicito que no nos traumatizemos desde el punto de vista de nuestra vocación universal. Nosotros queremos y debemos sostener relaciones con todos los países y comerciar con todos ellos, y en esto debemos tener el sentido propio de una universalidad que siempre cuenta con el abrigo de la soberanía y de los intereses de la República.

Por ejemplo, puede ser que la problemática norteamericana sea distinta de la nuestra, como surge del discurso de Kissinger en Houston, que hace la política del nuevo diálogo y vuelve a crear una recriminación de desencuentro con América latina, como lo muestra la ley de comercio exterior. Yo pretendo que no tiene que haber dos Américas, la desarrollada y la del Sur, sino que los norteamericanos tienen que entender que si nosotros somos la expresión solidaria dentro del sector latinoamericano tiene que haber una justicia social que haga comprender al fuerte que tiene que desarrollar al débil para crear la fortaleza del conjunto.

En la Argentina se había producido un hecho importante, nos guste o no, estemos nosotros de acuerdo o no con la política. El Ministerio de Economía del señor Gelbard había creado una evidente apertura hacia otros sectores del mundo. Habíamos concertado negociaciones con Cuba, Rusia y Polonia. Yo quisiera preguntar por qué esto ahora se está frenando. El convenio con Cuba está estancado. Se discute el convenio con Polonia. Representantes de este país han venido hace días a acordar las condiciones de este tratado y cuando ya están aquí se les dice que no va a haber reunión para estudiar el proceso.

Si estamos en el continentalismo y en la universalidad yo quisiera preguntar por qué hay que esperar dos años para nombrar embajador nada menos que en la China de los 750 millones de habitantes, que constituyen un mercado potencial formidable para nuestra posibilidad de venta exterior, muy acorde con nuestra política.

Quisiera decir, por ejemplo, que nuestro país estuvo mucho tiempo, más de seis meses, sin igualdad ante el derecho para quienes se ampara lo que no parece lógico si se piensa que la misma absorbe el 70 por ciento de nuestro comercio de carnes. Ahora se ha nombrado a un distinguido argentino, el doctor Cafiero, como embajador concurrente en el Mercado Común y en Bélgica, cosa evidentemente negativa desde el punto de vista de la realización del prestigio que tiene nuestro país, tanto para Bélgica como para el Mercado Común.

Con respecto a los Estados Unidos, un informe del City Bank de 1970 dice que el diez por ciento del total de las inversiones de ese país ha venido a América latina, pero que ese diez por ciento le produce el 26 por ciento del total de sus ganancias en el exterior.

Los radicales constituimos un partido político nacionalista y que aspira a una modernidad permanente. Nuestra definición dice que somos la corriente histórica de la revolución permanente en la Argentina. Por eso hemos practicado claras actitudes de defensa y afirmación nacional. La Unión Cívica Radical cayó dos veces desde el gobierno: en 1930 porque se nacionalizaba el petróleo y en 1966 porque rompimos las marañas de una atadura que nos habían dejado algunos gobiernos anteriores.

Tampoco podemos decir que debemos atarnos a mitos o tabúes sin perspectiva histórica. Tenemos la cultura política suficiente para comprender que el mundo exterior, el árbitro de nuestro comercio, el mundo de nuestras realizaciones, no es el albedrío de nuestras pretensiones, sino el universo posible de las soluciones para el conjunto.

En un importante libro que se llama *Superdesarrollo*, se dice que los dirigentes de las jóvenes naciones no tienen otra alternativa que equilibrar lo racional que refuerza nuestras economías, con lo irracional y emotivo que refuerza nuestra identidad como soberanía nacional.

En esta mezcla de nacionalismo emocional y de realidad tenemos que formar el conjunto de estadistas para crear las condiciones del gran desarrollo y el gran prestigio exterior de la Argentina.

Esta ley debe ser aplicada por hombres nuestros y que interpreten nuestra propia política. Pero, ¿cuál debe ser esta política?; ¿cuál debe ser nuestro rumbo?; ¿qué metas hay que cumplir para llegar a estas aspiraciones que —estoy convencido— son del conjunto del país? Evidentemente las metas serán las de nuestra liberación. El rumbo debe ser la instrumentación de una capacidad criolla intelectualmente dotada y con realismo político, sin desdeñar lo ético, para alcanzar el difícil equilibrio de nuestro tiempo a fin de plasmar el ser nacional y esclarecer definitivamente lo argentino, sin desconocer los hechos históricos de una dinámica enajenante de obligada perspectiva multinacional.

No podemos aislarnos de la revolución tecnológica sin riesgo de seguir perdiendo tiempo. No podemos ignorar nuestras necesidades de financiamiento. El radicalismo cree en el pueblo argentino y en la solidaridad con todos los pueblos del mundo. Apoyamos el inevitable universalismo sin barreras ideológicas, pero sin subestimar el abrigo de nuestro ser nacional.

La distensión y la obligada disuasión militar de que hablaba al comienzo parecen reiterar la concepción de que América latina debiera seguir siendo productora de alimentos y materias primas. Eso explica el discurso de Kissinger en Houston, pero no debe ser nuestro rumbo. Nosotros pretendemos salir al paso de nuestro subdesarrollo creando las condiciones de un desarrollo que conjugue todas las aspiraciones de una comunidad que tiene que modernizarse. No podemos crear igualdad donde no existe, por ejemplo respecto de los Estados Unidos. Pero sí debemos estar junto al resto de América latina intentando un nuevo sistema de cooperación internacional. No están condicionados a la estrategia del país ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni los acuerdos de Bretton Woods; fracasó la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo); va quedando atrás la rueda Kennedy. Los modernos intentos de coordinación entre los países industrializados y no desarrollados van siendo quebrados, como el caso de la última reunión de París, convocada por Giscard d'Estaing.

Nuestra nueva política exige una Argentina solidaria y una América latina solidaria. Nada vamos a ganar con protestar contra los imperialismos y lamentarnos del enriquecimiento y desarrollo de los demás. A veces se enriquecieron a costa nuestra, pero pienso que en esta cuestión hay bastante de nuestra propia declinación. Nadie nos va a regalar nada graciosamente; fijemos nuestras reglas de juego y avancemos a través de nuestra soberanía. Terminemos con la subordinación psicológica en ciertos sectores del país. Esto obliga a una docencia interna con respecto a algunos poderosos de afuera.

El calendario está en contra de nosotros. Si tenemos conciencia de ser independientes, trabajemos como independientes, y si tenemos conciencia de que no vamos a ser dependientes, trabajemos sin miedo para no serlo. Si nuestra misión es de paz y nuestro prestigio no será de potencia militar, mostremos la personalidad de una cultura y civilización que hoy parecen agotarse en el lamentable muestrario de la violencia interna de nuestra República.

Habrà muchos obstáculos, pero más obstáculos tuvieron nuestros libertadores y triunfaron. Hay que planificar fronteras, y si éstas resultan porosas con Brasil, Bolivia o Chile, hay que afirmar, a través de la docencia, que nuestro entendimiento será el suicidio latinoamericano.

El mundo tiene hambre. Hace poco he visto en la India los ojos tristes y abiertos de mucha gente que sufre enfermedades y desnutrición; pero los indios ya tienen su bomba atómica. Yo no quiero este ejemplo para mi país ni para América latina. También leí hace unos días un discurso del canciller del Perú, país que intenta mostrar al mundo un proceso de cambio, agradeciendo a los Estados Unidos el otorgamiento de un crédito de 30 millones de dólares para comprar armamento. ¿Para qué? ¿Para pelear con Chile por el Lauca o para demostrar si es mejor el sistema político del Perú que el de Pinochet? De ese modo seguiremos siendo tontos o locos, pero subsistirá la dependencia de América latina. Lo que tienen que hacer Chile y Perú es llamar a elecciones y devolver la soberanía a sus pueblos.

Cuando los pueblos de América latina dejen de ser convidados de piedra en el proceso y sus gobiernos hablen de trabajar no para los pueblos sino con los pueblos, el tiempo se irá recuperando. Y frente a este cambiante universo que decreta la paz nuclear por el equilibrio de fuerzas o de miedo, la Argentina y América latina podrán seguir creando el equilibrio para la esperanza.

Esto es lo que mi partido quiere decir en el debate de un proyecto de ley que votaremos con la ilusión de que sirva a este proceso, que creo interpreta a muchos argentinos.

Se vive una era de justicia social en la que tiene que estar presente el país. Hay una evidente pluralidad mundial que nos obliga a tener generosidad en la comprensión. Una política exterior sólo puede desarrollarse con un país unido. Los argentinos tenemos que unirnos; no seremos nunca potencia si peleamos por lo anecdótico dentro del país. Tenemos que crear una revolución con nombre propio; no se trata de cambiar una dependencia por otra. No hay que depender de nadie, aunque debemos estar integrados en el proceso de cooperación internacional.

Para finalizar, quiero recordar que Platón expresaba que el arte de gobernar consiste en hacer amar a los pueblos la constitución y las leyes.

Que esta ley sirva para que los hombres de nuestro servicio exterior, más allá de nuestras fronteras, proclamen que los argentinos somos prestigiosos porque amamos la Constitución y las leyes, y que comprendan que la cura de la Argentina no se hace desde Washington, Pekín o Moscú; se hace en la Argentina, y con el gran entendimiento del proceso latinoamericano. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — Señor presidente: voy a contestar algunas objeciones que se han formulado al

proyecto, en el orden en que han sido expuestas, aunque algunas fueron compartidas por varios señores senadores.

En primer término, los señores senadores Jáuregui, Bravo y León —este último con otro enfoque— consideran que el problema de los agregados laborales no está bien resuelto en la ley, por entender que se los exime del paso por el Instituto del Servicio Exterior y se los encuadra en un estatuto especial que dictará el Poder Ejecutivo.

Considero que en esto hay una confusión, porque el artículo 29 de la ley, que se refiere a los componentes del servicio exterior, distingue entre cuerpo permanente activo, cuerpo permanente pasivo, cuerpo de agregados laborales y agregados especializados. Ninguno de los agregados especializados pasa por el Instituto del Servicio Exterior. Están eximidos, pues, los agregados militares, culturales y económicos; y eso es lógico, porque la enseñanza del Instituto del Servicio Exterior es de tipo académico y se refiere concretamente a la función diplomática; en cambio, la formación que deben tener los agregados se refiere, como es obvio, a la propia especialidad que se obtiene en el área de donde provienen. Los agregados militares, culturales y económicos se forman en el área respectiva, y los agregados laborales en la que va a establecer el estatuto.

Las condiciones son, pues, más rigurosas para el agregado laboral, porque para los demás no se requiere ninguna otra instrumentación a los efectos de la designación. Basta la propuesta del ministerio del ramo o del arma a que pertenecen para que el Poder Ejecutivo concrete la pertinente designación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cambio, al agregado laboral se le exige un estatuto en el cual se establecen cuáles son los requisitos indispensables que debe llenar para poder ser incorporado en el servicio exterior.

Sr. León. — Yo hice la objeción desde otro punto de vista.

Sr. Luder. — Efectivamente, así lo señalé.

Debo destacar que si hay algo que deberíamos contemplar con un régimen especial —aunque aquí, de acuerdo con lo que expresé, las condiciones son más rigurosas—; si hay algo que el Congreso debe facilitar es, precisamente, el acceso de los obreros al Servicio Exterior de la Nación.

Entiendo que éste es uno de los grandes méritos del justicialismo. El señor senador León expresó en su discurso de homenaje al 25 de Mayo que la revolución radical había levantado el tercer estado. Lo acepto en la medida en que se refiera a la clase media, que fue llevada por el radicalismo a la participación política y a las funciones de gobierno. Pero es el justicialismo el que incorpora a un sector marginado totalmente de la participación política y del consumo y le permite acceder a las más altas magis-

traturas del Estado. Este es el aporte histórico del justicialismo: no sólo ha incorporado a un sector marginado que, como tal, estaba enfrentado a una comunidad política injusta, sino que también posibilitó que ese sector se encuadrara dentro de un signo nacional. El mérito del justicialismo —no lo digo como partidario, sino a través de un análisis objetivo de la historia argentina, confrontándola con la de todos los países del mundo— es que nuestro sector obrero y nuestras centrales obreras están dirigidas por hombres que responden a una línea nacional y no a teorías extremistas ni al marxismo internacional. Eso ha dado estabilidad política y social al país y es el gran aporte que el justicialismo ha hecho a la República y a la evolución política pacífica del país, a las posibilidades de un cambio social en paz.

Si ahora queremos incorporar el sector obrero al servicio exterior es precisamente porque éste careció, durante veinte años, de esta participación que nosotros consideramos importante. El sector obrero padeció todas las persecuciones desde 1955 en adelante. Asumió la tarea de mantener las causas nacionales que había enarbolado el justicialismo, a la sazón proscrito y perseguido. Cuando la revolución de 1955 cometió el error de entregar los sindicatos a los marxistas, el justicialismo los recuperó uno a uno para la causa nacional. Los obreros justicialistas aceptaron la lucha en el terreno nacional y jamás su dolor, su decepción, la persecución que sufrieron ni la infamia a que fueron sometidos los llevó a abrazar causas extrañas al ser nacional.

Ese es el mérito que ostenta la clase obrera argentina y el Congreso de la Nación tiene el deber de reconocerlo lealmente, porque ella mantuvo las auténticas banderas nacionales cuando los dirigentes del país habían olvidado el sentido nacional que el pueblo argentino quería para su gobierno.

Durante la larga proscripción y la persecución, en la que está incluida también la persecución económica, la cárcel y la muerte, que yo no quiero volver a recordar en este recinto, la clase obrera se mantuvo encuadrada en una línea nacional. Hoy el Congreso no tiene por qué retacear su participación en el servicio exterior porque es una forma de culminar su participación en todos los ámbitos del país a que tiene derecho, porque se lo ha ganado con su sacrificio, su esfuerzo y su fidelidad a la causa nacional. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Yo creo que no se puede venir a retacear esa participación, porque el obrero deba cursar un poco más o un poco menos para incorporarse al servicio exterior, o discutir si el estatuto tiene que ser sancionado por ley, o si el propio Poder Ejecutivo debe hacerlo a través de una comisión con participación obrera, conforme a la ley de asociaciones profesionales que hemos sancionado. El estatuto para el personal obrero es sola-

mente para él y no contraviene ningún derecho de los demás estamentos del servicio exterior, puesto que se trata de un estatuto al que se ajustan, exclusivamente, los agregados obreros que se nombren en el servicio exterior. No podemos disminuir la importancia de la incorporación que trae esta ley y dilatar aún más su sanción; por eso hemos aceptado la modificación de Diputados, aunque en otros aspectos de la ley he hecho una reserva personal que menciono en mi informe. Pienso que por encima del prurito del amor propio que podamos tener, este proyecto da solución a muchos problemas importantes del servicio exterior.

Otras críticas no se han formulado concretamente a la ley —hay tres o cuatro artículos que trataré de aclarar de la mejor manera posible—, sino a la forma en que se aplica la ley, a la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que atañe a la incorporación de cesantes de 1955 ó 1966.

Yo no vengo a debatir la forma en que se aplica la ley, porque entiendo que no es el momento y me voy a ajustar estrictamente a los artículos de la misma, puesto que, como ya lo he anunciado, el objeto de este debate es aceptar o rechazar las modificaciones introducidas en el proyecto por la Cámara de Diputados. No obstante, no puedo dejar de decir que el señor senador León ha hecho una larga exposición sobre la política exterior —que yo entiendo no es el momento de hacer— y apenas cabalgó un poco sobre el proyecto, como él ha dicho. Su exposición se refirió a las grandes líneas de la política internacional y a lo que él cree que debe ser la política exterior argentina. No tengo ningún inconveniente en aceptar el debate sobre política exterior argentina en el momento que la bancada radical lo desee hacer, así como acepté analizar exhaustivamente la política exterior en la Cuenca del Plata, en una sesión especial que el Senado dedicó al tema.

No obstante, repito, no puedo dejar de decir que es injusto que el señor senador León cuestione la política exterior argentina, que precisamente es el área menos cuestionable del gobierno justicialista. Si el país se ha recuperado en materia de política exterior ha sido gracias a la obra del gobierno justicialista. Este, al igual que los anteriores gobiernos justicialistas, trató de hacer una política exterior independiente, al servicio del desarrollo y de la seguridad del país.

En el mundo bipolar de hace 30 años, en el que resultaba difícil para los pequeños países intentar una política exterior independiente, el justicialismo lo hizo a través de la Tercera Posición del general Perón, procurando crecer entre los grandes con una estrategia política que era avanzada en aquella época; el tiempo le dio la razón.

Cuando vuelve al poder el gobierno justicialista, las condiciones exteriores son distintas: la quiebra de la polaridad, el aflojamiento de las

tensiones entre las grandes potencias y una coyuntura internacional inédita le permitieron al justicialismo forjar, con toda amplitud, una política exterior independiente, encuadrándola en dos principios fundamentales: el pluralismo ideológico y la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados.

Pero el pluralismo ideológico significa ser consecuente, es decir, significa pluralismo hacia la derecha y hacia la izquierda y no solamente hacia ésta, quedando los agravios e insultos para la derecha. Nosotros podemos disentir de la estructura institucional y la filosofía política de los países con los cuales mantenemos relaciones, pero si practicamos la no intervención y el pluralismo ideológico no tenemos por qué hacer uso de ese pseudomesianismo ideológico que en el pasado nos encerró e impidió mantener relaciones con los países que no tenían una organización institucional similar a la nuestra. En eso sí hemos servido a los intereses de las grandes potencias a las que estamos asignados por razones geopolíticas. El mantenimiento de las fronteras ideológicas y el repudio a los gobiernos vecinos que no comparten nuestro sistema político serviría inconscientemente a los intereses de la dependencia que procuran la disgregación de Latinoamérica.

Actualmente el pluralismo ideológico nos permitió abrir un ancho marco para la presencia argentina en Latinoamérica. Estábamos encerrados en el Cono Sur e íbamos a seguir sirviendo los intereses de otras naciones, aislándonos dentro de un cerco de gobiernos hostiles. ¿Pero es que íbamos a ser tan ingenuos como para llevar adelante una política exclusivamente declamatoria e ideológica en contra de los verdaderos intereses del país? El general Perón entendió que había que abrir rumbos hacia Latinoamérica, sin importar cuál fuera la organización política y la filosofía que inspiraran a los distintos regímenes de Latinoamérica.

Si queríamos ganar espacio político en Latinoamérica, recuperar el tiempo perdido y mejorar la imagen argentina, había que practicar leal y noblemente el pluralismo ideológico, y no servir inconscientemente intereses que no son los nuestros cometiendo el error de alentar un cerco austral de países hostiles, simplemente porque no tienen, en un determinado estadio de su evolución, nuestra misma organización política.

No tenemos la soberbia de querer imponer nuestra organización política a los demás países; queremos lealmente que todos los países latinoamericanos encuentren el camino de la liberación nacional, que para nosotros es prioritario a las formas políticas. Cada país encontrará, en la coyuntura histórica que vive, de acuerdo con su propia idiosincrasia nacional, el camino y la forma de esa liberación. Nosotros no tenemos la petulancia de que lo hagan con nuestra forma y nuestra estructura política.

No todos los países de Latinoamérica están en el mismo estadio de su evolución política. Por lo tanto debemos tener la comprensión inteligente y lúcida de que debemos ayudarlos, pero no agravarlos ni ponernos frente a ellos. Debemos colaborar para lograr una evolución política que, en definitiva, contribuirá a la unidad de Latinoamérica, presupuesto geopolítico de nuestro propio proceso de liberación nacional.

Algunas veces he dicho que así como las grandes potencias nos envían tecnología de rezago, nos mandan también sus tácticas política de rezago; cuando ellas han abandonado las fronteras ideológicas en el mundo entero para la elaboración de sus estrategias nacionales; cuando hace diez años que Nixon mantiene contactos con China, y han abandonado completamente el problema de las discriminaciones ideológicas, resulta anacrónico que las mantengamos dentro de Latinoamérica, cualquiera fuere su signo.

Vuelvo a repetir que, en este estadio de la evolución histórica de Latinoamérica, mantener la discriminación ideológica significa entorpecer la integración latinoamericana y, por lo tanto, servir a la causa de la dependencia. (*¡Muy bien!*)

Yo no deseo hacer un debate sobre la política exterior porque no es ésta la oportunidad, y señalo, nuevamente, que estoy dispuesto a enfrentarlo en el momento que la bancada radical lo desee.

Si hay algo en lo que yo creo que el gobierno justicialista ha tenido éxito y ha triunfado es, precisamente, en su política exterior, en la que ha tenido el apoyo de todos los sectores del país. No importa si algún funcionario se ha equivocado. Lo que cuenta son las grandes líneas, las que marcan el derrotero del país. Y cualquiera que haya salido de nuestra patria sabe que así como hay una mala imagen con respecto a la violencia —producto de las grandes agencias noticiosas que aquí han sido defendidas y que dan esa imagen del país—, existe un gran respeto por la Argentina, por su política exterior independiente, de apertura hacia todas las áreas del mundo, por el respeto que tenemos por todos los demás y que exigimos para nosotros en el ejercicio auténtico de una política exterior independiente y de respaldo exclusivo de nuestro interés nacional, de nuestro desarrollo y seguridad.

Eso no significa, en manera alguna, dejar de lado el ideal argentino de que todos los países de Latinoamérica y del mundo encuentren, de acuerdo con su propia modalidad nacional y su propio proyecto político, un régimen de justicia social, de representatividad política y respeto por los derechos humanos. (*¡Muy bien!*)

Con relación al artículo 59, indudablemente es uno de los más conflictivos y contra el cual se han centrado las objeciones de todos los señores senadores preopinantes.

Debo decir que lo único que hace ese artículo es mantener el texto que desde 1948 está vigente

en el país. Además, el artículo no dice que el Poder Ejecutivo pueda nombrar indiscriminadamente a todos los embajadores entre personas de fuera de la carrera. Lo que dice es que en vez de fijar un porcentaje se sacó el que había establecido la sanción del Senado y se dispuso que —con carácter excepcional— el Poder Ejecutivo podrá nombrar persona de fuera de la carrera.

La terminología del artículo 59, la limitación excepcional, demuestra que el propósito de la ley no es que todos los funcionarios con rango de embajador sean personas de fuera de la carrera. El uso prudente que el Poder Ejecutivo haga de esa facultad está demostrado por lo que ha sucedido en estos dos años. Además, debo señalar que otra disposición, el artículo 15, establece que los cargos de embajador se cubren normalmente por ascenso de los ministros plenipotenciarios.

Es decir que del juego del artículo 59, que establece que por excepción el Poder Ejecutivo podrá nombrar embajadores de fuera del servicio, y del artículo 15, que dispone que los cargos de embajadores se llenan normalmente por ascensos de los ministros plenipotenciarios, creo que surge claramente el espíritu de la ley y que la filosofía de ésta no tiene por objeto dar mano libre al Poder Ejecutivo, sino asignar un carácter excepcional a la designación de los embajadores fuera de carrera, designaciones que, por otra parte, tienen carácter transitorio porque concluyen con el presidente que los nombró.

Lo que sí creo que distorsionaría la carrera es el proyecto del señor senador León, en virtud del cual en cualquier rango de la carrera pueden ingresar personas que no pertenezcan al servicio. Eso sí desalienta al personal permanente, y no que en el tope se sepa que puede venir alguna persona de fuera del servicio.

Sr. León. — Es una ley vieja, la del 20 por ciento.

Sr. Luder. — Usted lo dijo en esta sesión y también en la del 6 de junio.

Sr. Presidente (Fonrouge). — La Presidencia ruega a los señores senadores que no dialoguen.

Sr. Luder. — El sistema vendrá de la época del breve gobierno radical, pero no de 1948, cuando se sancionó la ley Bramuglia, durante el gobierno del general Perón.

Lo que quiero manifestar es que el sistema que estructura la ley es de respeto para el servicio. El servicio exterior sabe que va a ascender normalmente, que la única posibilidad de que no todos lleguen a embajador está dada por la facultad que se acuerda al presidente de la República de designar en el último rango de la carrera a algunos funcionarios que no pertenecen al servicio, con carácter transitorio.

Sr. Caro. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Luder. — No, por favor, después.

Pero en cambio, introducir en todos los rangos de la carrera un porcentaje de funcionarios de fuera del Servicio, sí que lo distorsionaría totalmente y crearía un desaliento en los funcionarios de inferior jerarquía. Creo que en ese sentido el proyecto que sancionamos para preservar el Servicio es superior a la propuesta que hace el señor senador León, de incorporar en cualquier rango de la carrera a personas ajenas a ella.

Con respecto al artículo 10, el señor senador Jáuregui entiende que se crea una especie de paralelismo en la función diplomática, dado que el artículo, en su primera parte, dice que los «... agregados especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía y otras, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos...», agregando luego que «... este servicio de agregados especializados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen». Se trata de mantener una coordinación con el ministerio que los designe. Es lógico que un agregado militar en su función específica acepte una coordinación del Ministerio de Defensa o del comandante en jefe, que es, en definitiva, su jefe directo; pero la última parte del artículo dice que «formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango protocolar».

Otro artículo, el 96, establece que el jefe de la misión lo es también de todos los funcionarios que se encuentran en ese país y dependientes de cualquier ministerio, no sólo los incorporados a la misión sino los que estén designados en cualquier otra organización transitoria, como en el caso de la FAO (Organización para la Agricultura y Alimentación), que fuera mencionada por el señor senador León.

Si hay algo que esta ley trata de mantener, es la centralización en la conducción. El jefe de la misión en el exterior lo es de todos los funcionarios que están cumpliendo, como dije, una misión transitoria en cualquiera de estos organismos.

El artículo 105 establece que dentro de los 30 días de la publicación de la ley se comunicará a todos los ministerios y demás reparticiones la disposición de que sus funcionarios deben subordinarse al jefe de la misión en todo lo que se refiera a la conducción diplomática. Es decir, que no hay tal descentralización.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor Carlos H. Evans.

Sr. Luder. — Por otra parte, aunque los emisarios de la FAO u otros organismos técnicos internacionales puedan no ser designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es obvio que son nombrados por el presidente de la República, que por la Constitución es quien dirige la política exterior. La centralización está dada en el Poder Ejecutivo, y como ya he señalado, en el lugar de destino están subordinados al jefe de la misión. No importa que su designación provenga del área específica a que corresponda, sea Agricultura, Hacienda, Salud Pública o cualquier otra.

Con respecto al artículo 101, que el señor senador Jáuregui considera injusto, yo quiero destacar que es el mismo que fuera sancionado anteriormente. Este artículo, que también fuera cuestionado por los señores senadores, es el que establece la distribución de los ministros de primera y segunda clase. Nos encontramos con ministros de primera y de segunda en esta ley, de manera que no hubo otra solución que establecer cómo se debía hacer esa distribución en los rangos. Era mejor establecerla *ministerio legis* que por disposición del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, y se resolvió que los designados durante el gobierno de facto pasaran a ser ministros de segunda, y los otros fueran ministros de primera.

Creo que, dentro de la relatividad que tienen todas las soluciones de encuadramiento de los funcionarios, ésta era la más equitativa y no la más injusta, porque, obviamente, un grupo tiene que ser de ministros de segunda y otro de primera, ya que la ley crea ambos rangos.

Con respecto al artículo 103, que también cuestionaron los señores senadores Bravo, Jáuregui y León, debo señalar que faculta al ministro de Relaciones Exteriores y Culto a reestructurar el Servicio sin necesidad de ajustarse a la antigüedad que prescriben las otras normas. Quiero decir que la misma disposición estaba en la ley que sancionamos en junio del año pasado; pero, además, deseo agregar que hay una cierta incongruencia, y lo digo con todo respeto al señor senador Bravo, al sostener que no se cumple debidamente con los que solicitaban reincorporación o fueron reincorporados y no ubicados en el rango que les corresponde y negarle al ministro la posibilidad de hacer una reestructuración sin ajustarse a los términos de antigüedad y a la norma de la ley.

Como no hay más remedio que un reincorporado entre en un rango que no le corresponde, ya sea porque no hay otra posibilidad o porque no existen vacantes, con esta reestructuración puede hacerlo sin necesidad de esperar la antigüedad de los tres años y las demás prescripciones de que habla la ley. Si queremos realmente procurar, en alguna forma, un paliativo para la situación de los reincorporados, que a veces ocupan cargos ínfimos o tienen que esperar para ser reincorporados, no hay más remedio,

por carácter excepcional y por un término limitado, que dejar al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto la posibilidad de que, por ocho meses —tal el plazo que se establece— no se ajuste a las normas de la ley, pues de lo contrario ningún reincorporado dejado cesante por razones políticas podría ocupar un rango adecuado que se creyera que merece.

No entro a considerar aquí si el número de reincorporaciones es suficiente o no para las pretensiones de los que las solicitan. Esa es una función a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, que entiendo tampoco corresponde tratar en esta ley.

El Congreso de la Nación ha dictado una ley que posibilita la reincorporación de los agentes dejados cesantes por razones políticas. Y no se trata sólo de nuestros compañeros de lucha, los cesantes de 1955, sino que también comprende a los del año 1966.

Pero la ley ha dado la norma y la posibilidad de reincorporación en relación con las necesidades del servicio, porque de no ser así, se acumularían los agentes que fueron cesanteados en 1955 y en 1966, en una forma inorgánica y caótica que imposibilitaría el funcionamiento del servicio.

No significa esto, señor presidente, defender la forma como se han hecho las reincorporaciones, que no conozco, sino el análisis objetivo de que la única manera por la que se puede hacer justicia es darle al Poder Ejecutivo, en este caso al señor ministro de Relaciones Exteriores, durante un tiempo limitado, la facultad de no ajustarse a la ley e incluir al solicitante en un rango acorde con su capacidad y antecedentes, exceptuándolo de las prescripciones de antigüedad y demás reglamentaciones que establece la ley.

También objetó el señor senador Bravo que se hayan suprimido los gastos de fallecimiento del retirado del servicio. Se entendió que se creaba un régimen de privilegio, pues los jubilados de la administración pública —desde luego no creo que naden en la abundancia—, tendrán problemas de este tipo y a ninguno de ellos se les reconoce el beneficio en caso de fallecimiento.

En este proyecto se reconoce exclusivamente al personal diplomático con destino en el exterior este gasto por fallecimiento. Es decir, que si alguien no cumple funciones, no tiene un destino, no se justifica que el Estado se haga cargo de esa erogación. A fin de tener un régimen uniforme con los demás funcionarios y empleados de la administración pública se retira el privilegio de la percepción de estos gastos al jubilado. Es decir, repito, se trata de establecer un régimen uniforme y no de excepción con el personal del servicio exterior.

El señor senador Bravo se pregunta si no resultará peligroso que el personal administrativo a que se refiere el artículo 98, destinado en el exterior, tenga rango diplomático. En primer

lugar, sostiene que no sabe si se trata de agentes que cumplen tareas de maestranza, etcétera. El artículo dice claramente que se refiere al personal administrativo, técnico y profesional.

Desde luego, la explicación es que el rango diplomático, aunque sea de secretario de tercera, facilita en el exterior la solución de una serie de problemas y de situaciones de índole a veces delicada, que el personal administrativo no puede salvar. Se trata, más que nada, de proteger al personal argentino que actúa en el exterior, dado que no es fácil moverse en el extranjero. En cambio, la inmunidad diplomática, de alguna manera resguarda a estas personas de posibles inconvenientes o de situaciones conflictivas a que pueden verse expuestas.

No se trata de darle funciones diplomáticas a quien no las tiene, pues este agente seguirá escribiendo a máquina o pasando los cables; simplemente, cuando sale y anda por la calle y tiene problemas —por ínfimos que estos sean—, goza de una inmunidad diplomática. No se le asignan funciones diplomáticas, sino que se le da la calidad de diplomático para un mejor desempeño, dentro del medio extraño en que se desenvuelve el empleado administrativo.

Es cierto que este proyecto sigue mencionando a la ley de prescindibilidad, que ya está derogada. La Cámara de Diputados omitió suprimir esa mención, y la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que presido ha entendido que no valía la pena devolver el proyecto a la Cámara baja por esa omisión, porque la ley de prescindibilidad —repito— ya ha caducado, y por lo tanto no tiene ninguna virtualidad jurídica. Esa es la razón por la cual la comisión ha preferido dejar el artículo tal cual está.

El señor senador Bravo dice que no se repararon las cesantías de los años 1955 y 1956. Es un tema al que yo no debo entrar en este momento, pues entiendo que corresponde plantearlo nuevamente al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El senador sabe que, cuando planteó la cuestión, la comisión que presido despachó favorablemente su pedido de informes, y ha llegado la respuesta del ministerio. Si el informe no le complace, no tengo ningún inconveniente en volver a despachar favorablemente otro pedido ampliatorio del señor senador, pero entiendo que no es un problema que atañe al proyecto en consideración, y por lo tanto podemos dejarlo para otra oportunidad.

Aunque el señor senador León está de acuerdo en general con el proyecto, y ha destacado que el mismo reconoce algunas de las proposiciones que él hiciera en el debate anterior, no comparto su posición en el sentido de que el ejercicio de la docencia universitaria pueda ejercerse por el diplomático en el extranjero, porque hay otra norma que le impide aceptar puestos de un gobierno extranjero. Y, en definitiva, la docencia

universitaria es en alguna medida un puesto remunerado en un país extranjero, y está prohibido aceptarlo en esa forma.

De manera que hemos preferido establecer este criterio, sin mengua de que el diplomático dé cursos ad honorem y haga conocer la cultura y la organización política de nuestro país, y participe, de alguna manera activamente, en la vida cultural del país en que está destinado, pero sin una obligación o subordinación hacia él a través de un sueldo que reciba como docente. Hemos limitado la posibilidad del ejercicio de la docencia dentro del país, y cuando sale al extranjero el diplomático debe recibir como única retribución la del Estado argentino, porque está a su exclusivo servicio.

También creo que el señor senador León está confundido al afirmar que los embajadores se retiran a los sesenta y cinco años. Lo que dice el proyecto es que a esa edad los embajadores son llamados a la Cancillería para participar en la designación del Consejo de Embajadores. Pero de ningún modo dispone que los que no forman parte del consejo pasan a retiro. El proyecto no lo dice —repito— en ninguna parte; por lo tanto, no hay por qué inducir lo que la norma legal no expresa. Por el contrario, está bien claro que los embajadores se jubilan a los setenta años.

Por último deseo decir, con respecto a algunas alusiones formuladas por el señor senador León, que no comparto —y lo dije al comienzo de mi exposición— las conclusiones que él saca por algunas declaraciones de funcionarios del gobierno.

Tampoco entiendo que nuestro país haya abandonado la apertura hacia el área de Europa oriental. Considero que dicha apertura se hizo en momentos en que había una posibilidad económica internacional distinta a la que existe actualmente, y en manera alguna nuestro país pretende cerrarla. Por el contrario, hemos mantenido la creencia de que la posibilidad de tener otros mercados consumidores nos da mayor margen de maniobra para negociar con nuestros mercados tradicionales. Lo peor que le puede suceder a un país es tener siempre los mismos mercados tradicionales, y eso es lo que le ha pasado a la Argentina durante muchos años, en los que sus mercados tradicionales fueron Inglaterra y la Comunidad Económica Europea. Es precisamente el gobierno justicialista el que salió a la búsqueda de nuevos mercados, no sólo para colocar sus productos en amplios mercados de Asia y Europa oriental sino también para que esa apertura le permitiera negociar mejor con sus mercados tradicionales. Un hecho que demuestra que habíamos acertado en ese enfoque es el ocurrido en el año anterior, en que la Comunidad Económica Europea cerró abruptamente la importación de carnes argentinas, lo que colocó al país en una situación difícil.

En manera alguna nuestro país pretende dejar sin efecto esa apertura; todo lo contrario, la

quiere acentuar, porque entiende que la política independiente no se refiere sólo al plano político. La política independiente de un país se relaciona con su necesidad de establecer vínculos comerciales y culturales con todos los países del mundo, porque el desarrollo de nuestra Nación y proyección al exterior son interdependientes. No habrá desarrollo del país si no existe una política exterior independiente, y no la habrá si no se asienta sobre un proceso de emancipación nacional que tiene su base en el desarrollo económico de la Nación.

En la discusión en particular, si es necesario, haré algunas ampliaciones y aclaraciones. *(Aplausos.)*

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Caro. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. León. — Con muchísimo gusto.

Sr. Caro. — Señor presidente: declaro que nos hemos apartado un poco del reglamento. El señor senador León ha aprovechado la oportunidad para camppear respecto de temas que no hacen a la cuestión...

Sr. León. — ¡El señor senador Caro es un ilustre legislador!

Sr. Caro. — Aquí no está en discusión el tipo de política internacional que hemos desarrollado en el pasado inmediato o remoto, o el que llevamos a cabo en el presente o cumpliremos en el futuro. Esto es mucho más sencillo. Se trata simplemente de dar una nueva organización, y modificar las normas legales para el funcionamiento del Servicio Exterior de la Nación.

Es decir, estamos circunscriptos al campo del derecho administrativo y no al del derecho o de la política internacionales. Eso sería harina de otro costal.

Por otra parte el señor senador León, en un tono perfectamente opositor y opositor radical, cabe señalarlo, con lenguaje galano, florido, mediante un discurso pleno de sugerencias y de réplicas apasionadas, puede suscitar el debate indefinido de esta cuestión.

Le voy a rogar a mi amigo, el señor senador León, a quien todos valoramos, —porque hemos tenido oportunidad de actuar juntos en algunos foros internacionales— que, en homenaje a la celeridad de los trámites parlamentarios, decline efectuar una nueva réplica al señor senador Luder; quien, por otra parte, también ha camppeado —como no podía ser de otra manera— por los fueros de la ideología del partido a que pertenece. De no ser así, esto nos llevaría a un callejón sin salida. Existen muchas cosas por decir, otras que no se han expresado, muchas por replicar y mientras tanto nos encontramos sin poder avanzar en el trabajo de esta sesión.

Le solicitaría respetuosamente al señor senador, que acceda a mi requerimiento por cuanto no voy a hacer uso de la facultad reglamentaria de pedir que se cierre el debate, en homenaje al nuevo estilo parlamentario que nos hemos impuesto recíprocamente, es decir, el respeto por la opinión ajena, para que todos los legisladores tengan oportunidad de decir lo que deseen.

Creo que está todo dicho. Se han fundado las posiciones y, hasta paradójicamente, en el fondo son coincidentes. Sabemos que poniendo mayor o menor énfasis no vamos a encontrar, por ese solo hecho, cuál es la verdad de la cuestión.

Le voy a rogar nuevamente al señor senador que terminemos el debate y nos aboquemos, porque así lo indica el reglamento, a la votación en general de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados a la primitiva sanción de este Senado. Vale decir, que en la discusión en particular, a la que propongo pasemos de inmediato, formulemos todas las observaciones que nos sugiere la ley. Nada más, señor senador León, y muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador León.

Sr. León. — Comprenderá, señor presidente, que para mí, que lo calificué hace unos minutos de ilustre senador al señor Caro...

Sr. Caro. — ¡Casi ilustre! Estoy haciendo méritos. (Risas.)

Sr. León. — ... cuán importante me resulta la recepción que hago de su solicitud. Pero la vida parlamentaria exige evaluaciones personales.

Es decir, interpreto que seguramente la solicitud del señor senador ha sido hecha con la mejor intención. Debo decir que el doctor Luder usó mal mis palabras, aunque comprendo el discurso que pronunció. Desde que comenzó su alocución no mencionó lo que yo expresé, porque cuando hablé de la elevación del tercer estado con la Unión Cívica Radical por Leandro Alem, también dije que Perón intentó después la revolución proletaria. Se olvidó, y se hubiera evitado aclarar después la posición del justicialismo...

Sr. Luder. — Usted dijo «intentó» y yo dije «realizó».

Sr. León. — «Intentó» dije ahora, y lo leí porque es un librito propio. Dije que los argentinos tenemos revoluciones inconclusas...

De todas maneras quería decir que se trajo un poco de los cabellos el problema de los agregados laborales. He afirmado que nosotros lo votaremos con gran entusiasmo y simpatía porque interpretamos que los sectores de la clase trabajadora organizada deben estar presentes en todo este nuevo proceso del país, auscultando y receptando la problemática internacional, porque estamos convencidos de que esta clase trabajadora organizada — como ya lo expresé — debe estar en la cresta de la ola del proceso de transformación.

Sr. Luder. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. León. — Lo que no voy a admitir en silencio, en nombre de la Unión Cívica Radical, es que se pueda confundir en el proceso de los 18 últimos años el breve gobierno de mi partido, porque en los dos años en que gobernó la Unión Cívica Radical, que se ubican entre 1955 y el presente, nosotros no hemos avanzado discriminatoriamente, ni hemos perseguido, ni torturado ni intervenido sindicatos. Hemos votado la ley de salario vital mínimo y móvil, e incluso hemos respetado a dirigentes obreros que asistieron al juramento del dictador Onganía. Mi partido no puede aceptar en silencio esta complicación, porque históricamente no está complacido.

Con respecto al pluralismo ideológico, yo no he hablado ni para la derecha ni para la izquierda, pero puede haber un matiz que nos diferencie con el justicialismo. Al comienzo de mis palabras leí la definición de La Hora del Pueblo, en la que encuentro que es muy importante la vigencia de los derechos humanos; pienso que las leyes no son frías ni los tratados están congelados. Para los radicales el hombre tiene una gran significación porque es la base filosófica de la presencia del partido en la escena política de la Argentina y le damos una gran importancia al hombre de América. Cuando yo hice una crítica, no la formulé caprichosamente a la conducción, y sabe el señor senador Luder que con él hemos compartido otras cosas o no de este gobierno.

Pero en nombre de mi partido, que tiene esa filosofía, tengo derecho a decir que no me gusta. Y no apruebo que se condecere a Pinochet, no porque yo lo odie o porque seamos unos bárbaros con la derecha, sino simplemente porque el que se margina del proceso de pluralismo ideológico es Pinochet. Cuando la Argentina va a Quito a intentar la incorporación de Cuba al sistema interamericano, Pinochet patea esa mesa en que se había elaborado la estrategia de la República. Entonces la que se margina es la conducción de la actual política chilena.

Por otra parte, no soy yo el que dice que Pinochet viola los derechos humanos. Lo afirmaron los juristas de Ginebra, lo dijo la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, lo sostuvo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en este último organismo, por ciento seis votos contra cinco, el mundo dijo que en Chile se violaban los derechos humanos. Entonces yo tengo derecho, sin por esto intentar ser un blasfemo contra nadie, para decir que no me gusta que a este hombre que viola los derechos humanos en Chile lo condecere el gobierno de la democracia argentina.

Esta es la posición que hay que interpretar. Creo que es clara, y tengo necesidad, en nombre

de mi partido, de formular esta observación. Esto no quiere decir que no colaboremos en el trazado de un tipo de política exterior que tiene como común denominador buscar el aliento de ésta, nuestra definitiva liberación. No voy a extenderme más, en homenaje a la cordialidad del amigo Caro, pero no podía dejar pasar esto por alto.

Con respecto a esto de la FAO y de la OIT que yo mencionaba, lo dije simplemente como una afirmación útil. El artículo 96 dice que quien decide es el embajador, y yo formulé una expresión de anhelos, pensando que si allá manda el embajador, a veces hay departamentos estancos entre los ministerios y, en definitiva, no se hace lo que el embajador ordena.

Estoy haciendo autocrítica para el país, y esto no es solamente de ahora sino que también ocurría hace cincuenta años. Lo que yo digo no apunta solamente al gobierno justicialista sino que comprende también a nuestros déficit como nación. El pensamiento de nuestro partido en estas circunstancias está orientado hacia la elaboración de una política que permita una presencia más amplia del país en el escenario internacional.

No voy a seguir el juego de algunos artículos, aunque ya por su parte lo hizo el señor senador Luder, quien eligió algunos y dejó otros.

Sr. Caro. — Usted también eligió.

Sr. Presidente (Evans). — No interrumpa el señor senador al orador que está en uso de la palabra.

Sr. León. — Pienso que es oportuno que pa- semos a votar en general, pero, de todas maneras, quiero aclarar algunos aspectos.

En primer lugar el radicalismo no puede quedar alcanzado por una sospecha de persecución de los sectores del trabajo. Lo que yo dije fue que en vez de haber tres hombres de la C.G.T., tres del Ministerio de Trabajo y tres del de Relaciones Exteriores, prefería que eso lo resolvieran las Cámaras legislativas. Eso no es estar contra los trabajadores, a quienes en este Congreso les hemos votado todas las leyes que sirvieran al proceso de cambio, del que ellos deben ser un motor evidente. El radicalismo no puede, pues, ser sospechado de actitudes contra los sectores gremiales. La historia nos defiende.

En segundo lugar, nuestro partido comparte el pluralismo ideológico, pero piensa que la no intervención no puede servir de taparrabos a las dictaduras latinoamericanas.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Voy a ser muy breve, siguiendo la sugerencia del distinguido compañero de la infancia, el señor senador Caro.

Sr. Fonrouge. — ¿De la infancia de quién? (Risas.)

Sr. Bravo. — Quería dejar aclarado, con respecto a los agregados obreros, que el señor senador ha mencionado en el curso de una prédica elocuente para que volvieran a ser designados después de su supresión, que, como yo he tenido durante muchos años la oportunidad de trabajar junto con agregados obreros, me satisface la iniciativa y estoy totalmente de acuerdo con ella.

Tal vez podamos discutir en cuanto al régimen de su inclusión para diferenciarlos de otros agregados a las embajadas. Pero en lo fundamental estoy totalmente de acuerdo: considero muy justo que haya obreros en las embajadas.

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — Le agradezco mucho al señor senador por San Juan. Le quiero decir, también, que he interpretado perfectamente sus expresiones.

Previamente yo había significado que el estatuto es necesario porque en las embajadas los obreros son los únicos agregados especializados que todavía no tienen régimen, y por eso hay que elaborarlo. Los agregados militares tienen un régimen incorporado en la estructura reglamentaria de las fuerzas armadas, así como los agregados culturales y económicos también tienen el suyo. Con respecto a los obreros no había otra salida que establecer el estatuto correspondiente. Por eso aclaro que no es un privilegio, sino que se trata de incluirlos en el régimen común de los demás, ya que vienen tardíamente a incorporarse a la diplomacia y no hay ninguna estructura jurídica que prevea la formación y las exigencias a que se deben ajustar.

Sr. Bravo. — Gracias, señor senador.

Yo he tenido oportunidad de convivir con los agregados obreros y realmente pienso que es una medida muy importante, y que oportunamente, en el camino, se verá qué es lo más conveniente. A través de la reglamentación de la ley queda abierta la vía para hacerlo.

Sr. Jáuregui. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui. — Lamento, señor presidente, no tener la versión taquigráfica sobre la banca, pero voy a recurrir a mi memoria en la confianza de que ella me sea fiel.

No he impugnado en ningún momento —ello está muy lejos de mi espíritu— la presencia de los agregados laborales en las representaciones exteriores; lo que sí impugno, con referencia al informe del señor senador Luder, es lo que se expresa en el artículo 2º, inciso g), en el sentido de que se suprime para los agregados laborales la exigencia de aprobar un curso de capacitación.

Sr. Luder. — Para todos los agregados especializados no hay curso.

Sr. Jáuregui. — No deseo que quede flotando en el ambiente, ni por asomo, la impresión de que hemos podido tener la intención de bloquear la presencia de un sector ponderable del país. Por el contrario, del mismo modo que los señores senadores preopinantes, lo hemos reconocido y expresamos nuestra solidaridad con respecto a todas sus inquietudes.

Quiero, además, hacer una amable reclamación. Veo con agrado que el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto está dispuesto a sostener, en cualquier momento, un debate sobre nuestra política internacional con la bancada del radicalismo; pero le pediría que también lo haga con los otros sectores.

Sr. Luder. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Jáuregui. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Evans). — En consideración en particular.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans) — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Quiero señalar simplemente que para la consideración en particular nos remitiremos a las disidencias expresadas durante el debate en general.

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Sin observaciones, se leen y aprueban los artículos 1º a 4º.

—Se lee el artículo 5º.

Sr. Caro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Caro. — Sin el ánimo de reabrir el debate, quiero asentar mi posición personal con respecto a este artículo, ya que el señor senador Luder ha expresado la opinión del bloque.

El inciso 10 del artículo 86 de la Constitución Nacional establece, entre las facultades del Poder Ejecutivo, la de nombrar y remover a los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado. Es decir, ésta es una de las facultades discrecionales —diríamos— o no regladas que la Constitución otorga al presidente de la República. La única limitación que impone es el acuerdo del Senado.

Por lo tanto, establecer la regulación por ley, a mi juicio, es totalmente inconstitucional. El embajador es la prolongación del jefe del Estado en un país extranjero, ya que por razones físicas

no puede estar él personalmente. Si hay una facultad que es casi de tipo estrictamente personal es la del presidente de la República de designar a quien cree más conveniente para que lo represente en el exterior. El embajador no representa propiamente al país sino a la persona del jefe del Estado. Lo establece la Constitución y está de acuerdo con la tradición del servicio exterior en todos los países, a través de todas las épocas y de todos los regímenes de gobierno.

Señalo que la redacción del artículo 5º, tal como está, se ajusta estrictamente al texto constitucional. Redactarlo de manera que suponga otro tipo de regulación sería contradecir la norma constitucional y restringir las facultades del presidente de la República, quebrando, en consecuencia, el equilibrio de los poderes que quiere la Carta Magna.

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban sin observaciones los artículos 6º a 108.

—El artículo 109 es de forma.

Sr. Presidente (Evans). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8

RAUL SCALABRINI ORTIZ. — DENOMINACION DE ESTACION FERROVIARIA

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Mi bloque ha propuesto a los otros sectores que consideremos en esta sesión el primer punto del orden del día 125, del año 1973, que se refiere a la atribución del nombre de Raúl Scalabrini Ortiz a una estación del Ferrocarril General Belgrano.

Solamente quiero expresar que nos complace en la coincidencia de dar a esta sanción el significado de un homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz y que a través de él anunciamos nuestra perseverancia en el alto objetivo de la liberación nacional.

Sr. Presidente (Evans). — Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senador:

Vuestra Comisión de Interior y Justicia ha considerado el proyecto de ley en revisión por el cual se denomina Raúl Scalabrini Ortiz a la